



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Córdoba, 21 de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En estos autos caratulados: **“CUELLO FERNANDO LUIS y otros s/infracción art. 303 CP” (Expte. FCB 62002154/2013/TO1)**; tramitados ante este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de la **Dra. Carolina Prado** —en su condición de Presidenta— e integrado por los **Dres. José Camilo Quiroga Uriburu y Mario Eduardo Martínez**, con la asistencia del Secretario de Cámara, **Hernán Moyano Centeno**; interviniendo como Fiscal General el **Dr. Carlos Gonella** y como querellante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) representada por los **Dres. Carlos Ronchi y María Lucía de Benedetti**.

Los **Dres. Eugenio Darío Vezzaro, José Ignacio Cabanillas, Ezequiel Eletore y Leonardo Monti** en representación de los imputados:

FERNANDO LUIS CUELLO, sin apodo, de nacionalidad argentino, DNI N° 17.826.825, nacido el día 15 de septiembre de 1966 en la ciudad Córdoba, hijo de Mario Aurelio Cuello (f) y Susana Murúa (f), de estado civil soltero, padre de dos hijos de veinticinco y trece años edad, con domicilio en calle 3 de Noviembre s/n, ubicado en zona rural de la localidad de Río III, de propiedad de uno de sus hijos donde habita junto al menor, quien se halla bajo su cuidado. Con relación a su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios universitarios completos, ostentando el título de licenciado en administración de empresas, profesión que actualmente desempeña administrando la empresa de transporte que dejó su mujer fallecida (Natalia Paulus), como así también propiedades suyas y de la nombrada. Por dichas actividades, percibe en forma mensual la suma aproximada de pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000). Finalmente, manifestó gozar de buen estado de salud, teniendo como única adicción el cigarrillo.

Habiendo manifestado previamente su conformidad a los fines contestar preguntas, el señor fiscal general, Dr. Carlos Gonella, consultó al imputado en qué





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

año se recibió de licenciado, a lo que el Sr. Cuello respondió haberlo hecho en el año 1995; si poseía matrícula habilitante, a lo que el imputado manifestó que raíz de los problemas que tuvo luego de su detención dejó de ejercer la profesión.

Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por los delitos de Asociación Ilícita Tributaria, Evasión Agravada y Apropiación Indevida de Tributos, sentencia que al día de fecha no se encuentra firme. Por Secretaria se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

DIEGO GASTÓN LUDUEÑA, sin apodo, de nacionalidad argentino, DNI N° 27.510.542, hijo de Juan Pablo Ludueña y Edelma Aide Gómez (f), nacido el día 18 de febrero de 1980 en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, de estado civil soltero —en concubinato—. Posee domicilio en Av. San Martín N° 1315 de la localidad de Tancacha, provincia de Córdoba, donde habita junto a su pareja, su padre y sus dos hijos, de siete y tres años; propiedad de sus abuelos paternos. Respecto a su grado de instrucción y ocupación, manifestó haber culminado los estudios terciarios en “Seguridad e Higiene” y que desde el mes de junio del año 2016 trabaja como operario en la fábrica metalúrgica “Bell-Davi”, empleo que mensualmente le reporta un ingreso aproximado de pesos ciento veinte mil (\$120.000). Finalmente, manifestó ser una persona sana, que no adolece de ninguna adicción.

En la ocasión, el Fiscal General le preguntó al imputado respecto del año en que obtuvo su título profesional, a lo que el Ludueña respondió que fue en el año 2009.

Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba por el delito de Asociación Ilícita Tributaria, sentencia que carece hoy de firmeza. Por Secretaría se informa





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

Por su parte, el Defensor Público Oficial, **Dr. Rodrigo Altamira**, en representación de los imputados:

RAFAEL GUSTAVO VEGA, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 22.838.670, nacido el día 28 de enero de 1973 en la localidad de Tancacha, provincia de Córdoba, hijo de Domingo Adán Vega (f) y María Nicasia Carabajal, de estado civil casado. Posee domicilio en calle Tomas Wolf esquina Sarmiento de la localidad de Tancacha, inmueble de su propiedad en el que reside junto a su mujer y a sus tres hijos, de veintiuno, diecisiete y trece años de edad. Con relación a su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios secundarios completos y se desempeña como empleado administrativo de la empresa de transporte “Varal S.A.”, actividad que le reporta la suma mensual de pesos noventa mil (\$90.000). Finalmente, es persona sana de salud, no padece adicción alguna y carece de antecedentes penales computables.

RUBÉN OMAR DI PRIMIO, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 4.973.863, nacido el día 30 de marzo de 1945 en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, hijo de Roque Américo Di Primio (f) y Eulalia Eguillor, de estado civil viudo. Declaró tener tres hijos, de treinta y cinco, treinta y ocho y cuarenta tres años de edad. Su domicilio real corresponde a calle Pedro de Mendoza N° 1872 de la localidad de Valeria del Mar, provincia de Buenos Aires, en el que vive solo. En cuanto a su grado de instrucción y ocupación, expresó que es contador público desde 1973 y que a lo largo de su vida trabajó como productor asesor de seguros encontrándose en la actualidad jubilado de dicha profesión y percibiendo por su retiro la suma mensual de pesos treinta y seis mil (\$36.000). Finalmente, no padece ninguna adicción y sufre hipertensión arterial, arritmia cardíaca y colesterol alto; afecciones que se encuentran bajo tratamiento y medicación. Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Criminal Federal N°2 de Córdoba, por el delito de Asociación Ilícita Tributaria, sentencia que al día de fecha no se encuentra firme. Por Secretaría se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

MIGUEL ÁNGEL ORTEGA, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 16.164.950, nacido el 22 de enero del año 1963 en la ciudad de Carlos Casares, Provincia de Buenos Aires, hijo de Alcides Ortega (f) y Elvira Salvadora Rincón, de estado civil casado, padre de dos hijos de treinta y treinta y cuatro años de edad. Posee domicilio en calle Chiclana y Camolati s/n, casa N° 4, B° nuestra señora del Carmen de la ciudad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, inmueble de propiedad de su mujer, con quien convive. Con relación a su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios secundarios completos; durante los años 2010 y 2014 trabajó con el Contador Walter Tallarico, actualmente es comerciante y se desempeña como dueño de una pañalera, actividad que le reporta un ingreso mensual aproximado de pesos ochenta mil (\$80.000). Por último, manifestó padecer una enfermedad renal desde el año 2011, respecto de la cual se encuentra bajo tratamiento y con medicación.

Sobre sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba por el delito de Asociación Ilícita Tributaria, sentencia que al día de fecha no se encuentra firme. Por Secretaría se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

El Defensor Público Oficial, **Dr. Jorge Perano**, en representación del imputado:

HORACIO OMAR CISMONTI, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 11.382.017, nacido el 24 de julio de 1954 en la localidad de Berrostarán, provincia de Córdoba, hijo de Roque Cismonti (f) y Nélida Arbaliche Moro (f), de estado civil divorciado, tiene dos hijos, de 29 y 35 años. Posee domicilio en calle Estanislao del





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Campo N° 152, B° Castagnino de la ciudad de Río III, provincia de Córdoba, lugar donde reside solo y en calidad de locatario. En lo atinente a su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios primarios completos, durante el período 2010/2014 trabajó en la realización de análisis comerciales de trigo para molinos y, en la actualidad, se dedica a la distribución de bidones de agua, actividad que junto con la jubilación que percibe le retribuye mensualmente la suma aproximada de pesos cuarenta mil (\$40.000). Por su parte, adolece las enfermedades de hipertensión arterial y problemas de columna, padecimientos por los cuales no recibe tratamiento médico. La única adicción que reporta es al cigarrillo.

Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, por el delito de Asociación Ilícita Tributaria, sentencia que al día de fecha no se encuentra firme. Por Secretaría se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

ROLANDO OSCAR MARTÍN, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 25.082.134, nacido el 17 de abril de 1976 en la ciudad de Río Tercero provincia de Córdoba, hijo de Domingo Esteban Martín y Eugenia Yolanda Carballo. De estado civil divorciado, es padre de un hijo de once años edad, y se domicilia en calle Azcuénaga N° 59 de Río Tercero, provincia de Córdoba, inmueble que habita junto a sus padres —a su cargo—, en calidad de locatario. En relación a su grado de instrucción y ocupación manifestó no haber finalizado sus estudios secundarios y refirió que durante los años 2010 y 2014 trabajó como gestor del automotor y luego con el Sr. Cuello. Actualmente, se desempeña como jornalero y percibe la suma mensual aproximada por tal actividad y en concepto de asignación universal por hijo, de pesos cincuenta mil (\$50.000). Finalmente, no adolece enfermedades, no padece adicciones.

No registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

El **Dr. Gustavo Taranto** asistiendo técnicamente a los imputados:

JORGE RICARDO FERRER, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 13.461.715, nacido el día 15 de octubre de 1959 en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, hijo de Enrique Agustín Ferrer (f) y Estela Noemí Chesta (f), de estado civil casado, padre de tres hijos, de treinta y tres, treinta y cuatro y treinta y ocho años de edad, con domicilio real sito en calle Esperanza N° 1239 de Río Tercero, provincia de Córdoba, inmueble de propiedad de su esposa, con quien convive. En relación con su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios secundarios completos y hasta el año 2012 tuvo una empresa de comercialización de cereales, cuyo nombre de fantasía era “FG Cereales”, y en la actualidad es asesor bromatológico de laboratorios de bromatología y cereales. Por dicha actividad, obtiene un ingreso aproximado de pesos sesenta mil (\$60.000) y cuenta con la colaboración de su cónyuge, quien es jubilada y dueña de una parcela de campo para alquilar. En cuanto a su estado de salud, sufre hipertensión arterial y colesterol alto —ambos bajo tratamiento—, y no padece ninguna adicción.

Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, por los delitos de Asociación Ilícita Tributaria, Evasión Agravada y Apropiación Indebida de Tributos, sentencia que al día de fecha no se encuentra firme. Por Secretaría se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

SERGIO LUIS GUEVARA, sin apodo, de nacionalidad argentino, DNI N° 14.050.444, nacido el 09 de julio de 1961 en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, hijo de Santiago Eduardo Guevara (f) y María Teresa Tosco. De estado civil casado, padre de dos hijos, de treinta y tres y treinta y cinco años de edad, se domicilia en calle José Gervasio Artigas N° 139, B° Castagnino, de Río Tercero, provincia de Córdoba, vivienda que le pertenece y en la que reside junto a su esposa y a su hijo mayor, quien tiene capacidades diferentes. Con relación a su





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios primarios completos y desde hace diez años se dedica al comercio de insumos agropecuarios, actividad que le representa ingresos mensuales por la suma aproximada de pesos cincuenta mil (\$50.000). Asimismo, carece de adicciones y padece de osteofitos en columna, gota y dos hernias de disco, dolencias por las que recibe tratamiento médico.

Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, por los delitos de Asociación Ilícita Tributaria, Evasión Agravada y Apropiación Indebida de Tributos, sentencia que al día de fecha no se encuentra firme. Por Secretaría se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

Por su parte, el **Dr. Julio Antonio Loza** en representación del imputado:

RUBÉN ADOLFO CEVA, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 13.429.992, nacido el día 07 de septiembre de 1959 en la localidad de Justiniano Posse, provincia de Córdoba, hijo de Pedro Ismael Ceva (f) y Rosa María Crescimbeni (f). De estado civil casado, tiene una hija de veintinueve años de edad, y se domicilia en el inmueble de su propiedad ubicado en calle Maestros Argentinos N° 958, B° Las Violetas, de Río III, provincia de Córdoba, junto a su esposa. En relación con su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios universitarios completos y, desde el año 1982, se desempeña como contador público en forma independiente, actividad que le reporta la suma mensual aproximada de pesos cuatrocientos mil (\$400.000). Finalmente, es persona que carece de adicciones. Manifestó padecer afecciones de tiroides, hipertensión arterial y colesterol, bajo tratamiento y medicación.

El Fiscal General interrogó al imputado acerca de su especialidad profesional, a lo que contestó *"Yo apenas me recibí, abrí mi estudio y siempre me dediqué a brindar asesoramiento. Nunca manejé fondos, ni administré ninguno de los bienes de mis clientes. Siempre brinde asesoramiento en general, respondiendo*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

las inquietudes de los clientes y asesorando solamente desde mi estudio y en total independencia de mis clientes. Mi estudio brinda asesoramiento contable, impositivo y laboral.”

Respecto a sus antecedentes penales, hizo saber la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, por los delitos de Asociación Ilícita Tributaria, Evasión Agravada y Apropiación Indevida de Tributos, sentencia que carece de firmeza. Por Secretaría, se informa que no registra antecedentes penales computables, conforme surge del Registro Nacional de Reincidencia.

Por su parte, el **Dr. Carmelo Fabricio Zuccarello** en representación del imputado:

WALTER FABIÁN CABRERA, sin apodos, de nacionalidad argentino, DNI N° 21.655.151, nacido el 06 de octubre de 1970 en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba e hijo de la Sra. Marta Juana Cabrera, única progenitora conocida del encartado. De estado civil divorciado, tiene tres hijos, de veintiuno, veinticinco y veintiséis años de edad, domiciliado en calle Flor de Carrito N° 569 de Río Tercero, provincia de Córdoba, residencia de propiedad de su madre, con quien la habita. Acerca de su grado de instrucción y ocupación, cuenta con estudios secundarios completos, entre los años 2010 y 2014 trabajó como policía de la Provincia de Córdoba, a la vez que se desempeñaba como gestor de cobranzas para una empresa, y —en la actualidad— trabaja como chofer de una empresa de transporte de pasajeros denominada “Scagliarini”; actividad por la que obtiene la suma mensual aproximada de pesos noventa mil (\$90.000). Carece de adicciones y sufre de problemas de hipertensión arterial, apnea del sueño y diabetes, bajo tratamiento médico.

En relación con sus antecedentes penales, el Registro Nacional de Reincidencia informa que, en el marco de las actuaciones caratuladas “**CABRERA WALTER FABIÁN – VIOLACION DE DOMICILIO REITERADA – LESIONES**





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

LEVES REITERADAS" (Causa nº 549045), con fecha 11/03/2014, la Cámara Criminal y Correccional de Río III condenó a Cabrera a la pena de tres años de prisión en forma de ejecución condicional. Conforme certificado actuarial dicha condena se encuentra firme y en estado de pre-archivo.

Y CONSIDERANDO:

I. El auto de elevación de la causa a juicio atribuye a los imputados **Luis Fernando Cuello, Diego Gastón Ludueña, Rafael Gustavo Vega, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Horacio Omar Cismondi, Rolando Oscar Martín, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rubén Adolfo Ceva y Walter Fabián Cabrera** la comisión de los siguientes hechos:

"2.2 HECHO SEGUNDO

a) Descripción del hecho

*Así, es dable establecer que desde el día 02/08/2011 hasta el 31/07/2012, los coimputados **Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus y Rafael Gustavo Vega, en su calidad de accionistas de la empresa SOLFI S.A., con la cooperación de Oscar Martín Rolando -quien se desempeñaba como apoderado de la empresa mencionada-** habrían puesto en circulación en el mercado la cantidad de **quinientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y seis Pesos (\$599.656)**, provenientes de las actividades de la asociación ilícita de la cual formaban parte Cuello y Paulus, pretendiendo conferir a dicho dinero una apariencia de legitimidad, mediante el otorgamiento de préstamos de dinero a diferentes clientes, materializados a través de la citada firma SOLFI S.A., con domicilio en calle Tomas Wolsh esquina Sarmiento de la localidad de Tancacha (Cba.). Cabe señalar que SOLFI S.A. posee declarada como actividad ante AFIP el transporte automotor de carga, aunque nunca realizó actividades en tal sentido, sino que en la realidad operaba como financiera, otorgando préstamos dinerarios a través de contratos prendarios cobrando elevados intereses, con la clara finalidad*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

de blanquear las sumas obtenidas como producto del accionar delictivo de los integrantes de la asociación ilícita tributaria.

Dichos préstamos fueron otorgados en las fechas, a las personas y por los montos que se consignan a continuación:

- 1) 08/11/2011 - Acosta, Daniel Alejandro - \$15.800
- 2) 19/12/2011 — Ahumada Turismo - \$ 50.000
- 3) 22/06/2012 — Araya, Gustavo Adrián - \$ 10.776
- 4) 18/11/2011 — Bertello, Mirta María - \$ 120.000
- 5) 15/09/2011 — Duttweiler, Omar Rodolfo - \$ 19.000
- 6) Sept. 2011 - Ellena, Marcelo Pablo - \$ 15.000
- 7) 10/11/2011 — Garay, Olga - \$ 3.000
- 8) 04/08/2011 — Giacinto, Ángel - \$ 10.450
- 9) 29/08/2011 — Imán, Walter Eduardo - \$ 12.000
- 10) 28/09/2011 — Larumbe, Eduardo Andrés - \$ 10.000
- 11) 08/11/2011 — Luna, Juan Carlos - \$ 6.350
- 12) 15/08/2011 — Moris, Iván - \$ 7.000
- 13) 24/08/2011 — Palacio, Héctor Miguel - \$ 7.000
- 14) 04/11/2011 — Peralta, Luis Federico - \$ 10.000
- 15) 12/10/2011 — Pregot, Micaela - \$ 15.000
- 16) 27/09/2011 — Reynoso, Humberto Carlos - \$ 8.000
- 17) 24/05/2012 — Ropolo, José - \$ 25.000
- 18) 02/08/2011 — Salvatierra, Lucio - \$ 5.500
- 19) 21/03/20.12 — Sastre, Miguel Ángel - \$ 10.780
- 20) 10/02/2012 — Transporte Mugas S.A. - \$ 100.000
- 21) 12/10/2011 — Urquiza, Adolfo - \$ 9.000
- 22) 22/03/2012 — Urquiza, José María - \$ 5.000
- 23) 02/12/2011 — Vaselli, Luis Marcelo - \$ 5.000
- 24) 08/08/2011 — Viotto, Edgardo Federico - \$ 20.000





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

25) Nov./2011 — Sánchez, Raúl 60.000

26) 31/08/2011 — Nuccio, Gabriel - \$ 5.000

“RELACIÓN DE LOS HECHOS

La obtención del dinero ilícito

Desde comienzos del año 2008, Fernando Luis CUELLO, en carácter de organizador, Natalia de los Ángeles PAULUS, Diego Gastón LUDUEÑA, Rubén Rodolfo CEVA, Horacio Omar CISMONTI, Jorge FERRER, Sergio Luis GUEVARA, Julio Omar GONZALEZ, Miguel Ángel ORTEGA, Rubén Omar DI PRIMIO, habrían conformado, junto con otras personas, una organización delictiva que, mediante la administración de las empresas pantalla que operaban con las denominaciones de CORRETAJES GROUP SA; VERCOVIR SA; F G CEREALES SA; CERCAL SRL; ALGECIRAS SA; SWETENSON SA; ARBOL GRANDE SA; GRANEROS DEL SUR SA; EFCE SA; SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN SA; SOLFI SA., realizaban diversas actividades tendientes a cometer ilícitos tributarios, concretamente evasiones del impuesto al valor agregado (IVA), a las ganancias y la generación de significativos créditos fiscales simulados.

Los nombrados, por medio de las empresas fantasmas aludidas operaban ante el fisco como productores o acopiadores de cereales, cuando en realidad eran meros intermediarios entre los verdaderos contribuyentes y los grandes consumidores o exportadores del mismo, con lo cual lograban que los verdaderos operadores del mercado quedaran ocultos, obteniendo en consecuencia importantes beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas, conforme se encuentra detallado en el marco de las actuaciones "CUELLO FERNANDO LUIS; PAULUS NATALIA DE LOS ÁNGELES; CEVA RUBÉN ADOLFO Y OTROS S / ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL" (Fcb N° 69/2008).

Por medio de las actividades ilícitas detalladas, los nombrados habrían logrado evadir la suma total de cincuenta y siete millones doscientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y siete Pesos con cuarenta y nueve centavos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

(\$57.232.547,49); sumas que pertenecían al erario público y debían ingresar al fisco, pero que emplearon en provecho propio mediante las maniobras que se detallan a continuación.

Colocación y Estratificación del dinero ilícito

En ese marco y valiéndose de las empresas aludidas, los nombrados habrían efectuado, junto con Walter Fabián Cabrera, Enrique Osvaldo Lorca y Juan Carlos Gugliemini, diversas actividades tendientes a lograr poner en circulación en el mercado las cuantiosas sumas generadas con motivo de la comisión de los ilícitos tributarios aludidos; pretendiendo otorgarles apariencia de un origen lícito a tales fondos. Todo ello de acuerdo a las directivas brindadas por Fernando Luis Cuello y bajo el asesoramiento contable del Sr. Rubén Rodolfo Ceva.

Con dicha finalidad y tomando provecho de la estructura empresarial ideada para cometer los ilícitos, los nombrados habrían utilizado las cuentas bancarias de estas para la colocación y estratificación del dinero mal habido. Así por medio de tales cuentas se canalizaban las grandes sumas generada con motivo de las actividades lícitas e ilícitas llevadas a cabo, para luego extraerlo de tales cuentas mediante diversas maniobras que consistían en retiros en efectivo; cheques cobrados por caja y transferencias a diversas personas o sociedades, pretendiendo mediante dichas transacciones y operaciones, alejar el dinero de su origen espurio; dificultar su seguimiento y conocer su destino.

A modo de ejemplo, durante el transcurso del año 2011, con motivo de las gestiones comerciales realizadas por Cuello y bajo las directivas contables impartidas por Ceva, los nombrados, habrían canalizado, a través de la cuenta corriente bancaria de la firma SWETENSON S.A. en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., cuya titularidad figuraba a nombre Diego Gastón Ludueña, la suma total de un millón ochocientos noventa y tres mil setecientos dieciséis Pesos (\$1.893.716), mediante depósitos en efectivo, cheques y transferencias sin justificación (ROS 18.884.693). Con la misma modalidad, habría operado Diego





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Gastón Ludueña, en las cuentas corrientes N° CC139252742-CC244312748 del Banco Galicia y Buenos Aires S.A., de las firmas EFECSE (cuya presidente era la Sra. Natalia de los Ángeles Paulus) y Swetenson S.A. (cuyo presidente era el Sr. Ludueña), en el transcurso del año 2012; la suma de Pesos \$168.280; cuentas por las que se canalizaron \$4.676.066, entre enero de 2008 y diciembre de 2011 (ROS 17.295.935).

En el mismo sentido y bajo tales directivas, entre el 21/12/2010 y el 30/07/2013, los nombrados habrían efectuado operaciones por un monto total de \$630.654.855 (Ros 36.459.239); por intermedio de la cuenta corriente N° 2130138030 del Banco Nación, perteneciente a la firma Algeciras S.A. cuyos autorizados eran Rubén Omar Di Primo y Walter Fabian Cabrera. Dichas operaciones consistían en inyección de fondos, por importes significativos y su posterior retiro en efectivo, mediante el libramiento de cheques a cobrar por ventanilla.

Asimismo, desde el 10 de abril de 2012 al 28 de junio de 2012, utilizando la cuenta corriente N° 3-052-0000037905-9, que la firma Algeciras S.A. poseía en el Banco Hipotecario S.A., cuyo autorizado era Rubén Omar Di Primo, los nombrados habrían canalizado un monto de \$20.488.162 mediante depósitos en efectivo, acreditaciones de cheques de remesas y transferencias recibidas; dinero que fue posteriormente retirado en efectivo mediante cobro de cheques por ventanilla (ROS 8.313.759). Con la misma modalidad operativa y en la misma cuenta corriente del Banco Hipotecario S.A., los nombrados efectuaron operaciones por un monto de \$ 8.337.195, entre el 29/06/2012 y el 07/08/2012; sumas que fueron extraídas mediante 16 operaciones por medio de cheques ventanilla, luego de lo cual se cerró la cuenta corriente en cuestión, el día 07/08/2012 (Ros 13038996).

Los pagos y acreditaciones registrados en las cuentas corrientes de la firma Algeciras S.A., en el Banco Nación eran retirados en efectivo por personas identificadas con sobrenombres y por el Sr. Walter Fabián Cabrera; quien figuraba





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

como apoderado de la cuenta sin ser accionista o desempeñar rol de autoridad en la empresa y, sin embargo, en la sucursal Córdoba del Banco Nación y con cheques emitidos por Algeciras S.A.; el nombrado habría retirado de la cuenta corriente en cuestión la suma total de \$12.304.664. Similar maniobra se constató en la cuenta corriente N° 00717029-001 que la firma Algeciras S.A. poseía en el banco Superville S.A., cuyo autorizado era el Sr. Rubén Omar Di Primo; por medio del cual se canalizaron \$4.506.271, en el periodo comprendido entre el 19/08/2011 al 14/09/2011, mediante depósitos de cheques cuyos libradores o endosantes no tenían relación con la actividad relativa a la venta de cereales (pues se trataba de clubes de futbol, construcción, servicios de salud, empresas textiles y compañías financieras); fondos que fueron posteriormente retirados mediante cheques pagados por caja (Ros 80.725).

Asimismo, el Sr. Walter Cabrera recibió por medio de la cuenta corriente N° 084-306293/3 que la firma Algeciras S.A. poseía en el BBVA Banco Francés S.A. transferencias por el monto total de \$39.807.907, entre el 02/06/2011 y el 29/07/2011, sin poder justificar el origen de tales fondos (ROS 65.321).

Por su parte, los nombrados también se habrían valido de las cuentas que poseía la firma Corretajes Group S.A. en las entidades Banco Nación, Credicoop, Superville, ICBC, de la Provincia de BS. As., Galicia y BBVA Francés en las cuales habrían tenido acreditaciones millonarias. A modo de ejemplo, en el periodo comprendido entre el 01 y el 15 de Agosto de 2011, en la cuenta corriente N° 5420210232318 que la firma poseía en el Banco ICBC (Argentina) S.A., cuyo apoderado sería el Sr. Miguel Ortega, quien a su vez revestía el carácter de presidente de la compañía, se depositaron quince cheques de personas físicas o jurídicas que no guardarían una relación comercial con la firma, por un monto de \$971.391 (ROS 49.497). En el mismo sentido, Miguel Ortega, en el periodo comprendido entre el 08/07/2011 y el 24/11/2011, habría recibido depósitos en la cuenta corriente que poseía la firma Corretajes Group S.A., en la cuenta corriente





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

del banco de la Provincia de BS. As., por la suma de Pesos once millones cuatrocientos veinte mil trescientos treinta y tres (\$11.420.333), que fueron posteriormente retirados por medio de cheques cobrados por ventanilla (Ros 437.540).

Asimismo, Miguel Ortega recibió en la cuenta corriente N° 900251/43 que la firma Corretajes Group S.A. poseía en el Banco de la Nación Argentina, depósitos, en su gran mayoría de cheques, por S 31.343.909, entre noviembre de 2011 y febrero de 2012. Dicha suma fue extraída parcialmente en efectivo, por medio de cheques a cobrar por ventanilla y mediante transferencias electrónicas a cuentas de terceros en otras instituciones (Ros 5.181.708) y como representante de la firma Triple M S.A., Ortega habría recibido el 14 de septiembre de 2012, en la cuenta N° 30709594555 del Banco Itau Argentina S.A., la suma de Pesos \$991.400, cuando dicha operación no guardaba relación con los antecedentes y actividad económica de la firma, ni se aportó documentación alguna que justifique dicho movimiento (ROS N° 12.225.920).

En el mismo sentido, por medio de la cuenta corriente N° 305200000377840 que la firma poseía en el Banco Hipotecario, cuyo titular también sería el Sr. Miguel Ángel Ortega, se registraron entre el 05 de enero de 2012 y el 28 de junio de 2012 acreditaciones por \$52.511.689, que responden a transferencias del mismo titular, proveedores, depósitos en efectivo acreditaciones de cheques de remesas. Dichas sumas fueron extraídas por medio de cheques a cobrar por ventanilla (Ros 8.310.968). En la misma institución bancaria, en el periodo comprendido entre el 29 de junio de 2012 y el 07 de agosto de 2012, bajo la misma modalidad operativa se habrían canalizado en la cuenta corriente N° 305200000377840 la suma de Pesos \$12.025.567, los cuales fueron extraídos por medio de cheques a cobrar por ventanilla (Ros 13.039.519).

Por su parte, Sergio Guevara y Jorge Ferrer habrían operado mediante la firma F.G. Cereales S.A. y entre el mes de septiembre del año 2102 y enero del





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

2013, los nombrados habrían canalizado, por medio de la cuenta N° 289-1590/0 que poseía la firma en el BBVA Banco Francés S.A., la suma de Pesos tres millones quinientos treinta y un mil novecientos treinta y cuatro (\$3.531.934), a través de depósitos de cheques de otros bancos y transferencias recibidas. Dichos fondos fueron extraídos en efectivo mediante pago de cheques con lo cual mantuvieron una escasa permanencia en la cuenta, sin haber presentado documentación respaldatoria alguna frente a la solicitud que le cursara la institución (conf. ROS N° 15.888.186).

Asimismo, Juan Carlos Gugliemini y Enrique Osvaldo Lorca habrían recibido por intermedio de la cuenta corriente N° 084-305748/7, que la firma Vercovir S.A. poseía en el Banco BBVA Banco Francés S.A., la suma de \$49.584.096; entre el 29/04/2011 y el 29/07/2011, sumas que fueron recibidas por medio de diversas transferencias (Ros 65.304).

Por su parte, Enrique Osvaldo Lorca habría efectuado operaciones consistentes en depósitos de cheques de terceros y retiro de fondos en efectivo por la suma de Pesos \$ 67.250.000, en la cuenta que poseía la firma Vercovir S.A. en el banco Citibank N.A., en el periodo comprendido entre el 01/04/2011 al 30/06/2011 (Ros N° 25.250).

Por otro lado, entre enero del año 2011 y febrero de 2014, Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara -siguiendo las directivas impartidas- habrían canalizado, por medio de la cuenta corriente bancaria N° 20-289-001590/0 que poseía la firma FG Cereales S.A. en la institución BBVA Banco Francés S.A. la suma total de ciento dieciocho millones setecientos ochenta y siete mil novecientos noventa y seis Pesos (\$118.787.996), recibidos por medio de transferencias bancarias y retirados por medio de cheques y transferencias, cuando dicha operatoria no se condice con el perfil del cliente ni fue respaldada con la documentación correspondiente pese a la solicitud cursada por la institución (ROS 42.762.454).





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En el mismo sentido, en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, Fernando Luis Cuello habría canalizado, por medio de la cuenta corriente N° CC249672742-CA400717062747 que poseía en el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. la suma total de doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve Pesos (\$242.449), mediante depósitos en efectivo, cheques y transferencias (ROS 17.295.949).

Conforme lo expresado, dichas sumas de dinero eran empleadas para concretar nuevas operaciones que le permitían a los investigados continuar con las maniobras delictivas e incrementar las ganancias ilícitas; en parte eran diversificadas en distintas cuentas y extraídas luego en efectivo, a los fines de impedir su seguimiento y conocer su destino y finalmente eran empleadas para la compra de diversos bienes.

Integración y uso

Con el objeto de poner en circulación el dinero producido con motivo de los ilícitos investigados en el marco de la causa Fcb 69/2008 y otorgarle apariencia de origen lícito a dichos montos, además de reinvertirlos en las actividades desplegadas por la asociación ilícita fiscal para la comercialización de cereales; desde el día 2 de agosto de 2011, Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus y Rafael Gustavo Vega, habrían creado la firma Solfi S.A., de la cual eran accionistas y facultaron a Oscar Martín Rolando como apoderado.

Por medio de la firma en cuestión, los nombrados pusieron en circulación en el mercado, mediante préstamos personales de dinero en efectivo, la suma de Pesos quinientos noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y seis (\$599.656), provenientes de la actividad ilícita.

A los fines de aparentar un origen lícito y evitar las sospechas que implicaría un crecimiento patrimonial desmesurado Luis Fernando Cuello simuló recibir créditos, entre el transcurso de los años 2011 y 2012, de las empresas Solfi S.A. y Logint. S.A., de las cuales el era accionista y dirigía.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En el mismo sentido, Paulus simuló recibir créditos entre el transcurso de los años 2011 y 2012, de las empresas Solfi S.A. Arbol Grande S.A.; Efece S.A. y Fideicomiso Alejandra VI., en muchas de las cuales era accionista.

Por otra parte y con la misma finalidad, los bienes que adquiría la organización coordinada por Cuello, bajo el asesoramiento de Ceva, eran inscriptos a nombre de las firmas con las que operaban o de sus representantes y con el objeto de asegurarle a los verdaderos adquirentes la posibilidad de utilizarlos y disponer de ellos, se habrían otorgado autorizaciones y facultades de administración y disposición por medio de escrituras públicas.

En el caso, por medio de la firma SWETENSON SA, la organización habría adquirido los vehículos BMW X3, dominio HRQ-569 y Mercedes Benz ML 350 4tomatic, dominio IRN-293; respecto de los cuales Ludueña, en nombre y representación de la firma autorizó a Paulus, Cuello y Horacio Omar Cismondi, por escritura pública. Además, Fernando Luis Cuello poseía desde el 17/11/2009 un poder general de administración y disposición sobre SWETENSON S.A., que fue otorgado por Diego Gastón Ludueña.

Asimismo, con el producido de tales ilícitos y bajo las directivas impartidas por Cuello, Diego Gastón Ludueña adquirió el 21/11/11, la motocicleta marca BUELL, modelo XB 12 X, dominio 979GEE, otorgando el 3 de enero de 2012 autorización para conducir a Paulus, Cuello y a Horacio Omar Cismondi por medio de escritura pública.

Con fecha 07 de octubre de 2011, por medio de sus representantes y siguiendo las directivas impartidas por los titulares de la organización, la firma Árbol Grande S.A. adquirió la Toyota Hilux 4x2, dominio JKW-438; en la misma fecha autorizó, por medio de cédula azul, al Sr, Luis Fernando Cuello y a la Sra. Natalia de los Ángeles Paulus, para conducirla.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

También se habría empleado en la adquisición del vehículo Citroén 3CV, dominio XMJ-234, el cual habría sido adquirido en diciembre de 2011, a nombre de Rubén Omar Di Primio.

Con fecha 15 de abril de 2013 Sergio Luis Guevara habría adquirido por intermedio de Nancy Antonia Mineri el vehículo Fiat Strada Adventure dominio MKU-801 y a los fines de poder usar el mismo, con la misma fecha, la nombrada habría autorizado, por medio de cédula azul, al Sr. Guevara para conducirla.

Con fecha 24 de julio de 2014 la firma Boca del Rio S.A. autorizó, por medio de cédula azul al Sr. Julio Daniel Luján para conducir la Toyota Hilux 4x4, dominio GUV-856.

Como así también dichas sumas habrían sido utilizadas para adquirir propiedades, entre las cuales pueden mencionarse las efectuadas por el Sr. Fernando Luis CUELLO, ante el escribano David Scian CUIT N° 20-12546847-1 en el año 2011 por la suma declarada de Pesos \$370.800; en el año 2012 por la suma de \$597.640 y la compra efectuada por el nombrado al Sr. Daniel Horacio Ramos, ante el escribano mencionado, el 21 de septiembre de 2012 de dos unidades (matriculas 21-000165-0170 y 21-000165-0004 - Código de Catastro N° 33771300 DV 09), correspondientes al inmueble de Olga Cossetini N° 1611 95 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un valor de \$ 13.400.000 (Ros 15.865.050).

Como así también, la firma SWETENSON S.A., habría adquirido un inmueble en el año 2011 por la suma de Pesos \$68.000, operación en la que intervino el escribano Esteban Ferrer Frontera. Por otro lado y con el objeto de evitar levantar sospechas ante el fisco, los nombrados habrían adquirido por medio de la firma Swetenson S.A., el inmueble sito en calle Olga Cossentini N° 1660- piso 1 - DPTO 105 - CABA."

Calificación Legal: Fernando Luis CUELLO, Diego Gastón LUDUEÑA, Horacio Omar CISMONTI, Jorge Ricardo FERRER, Sergio Luis GUEVARA, Rubén Adolfo CEVA, Rubén Omar DI PRIMIO... Miguel Ángel ORTEGA, Rafael Gustavo





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

VEGA, Rolando Oscar MARTIN y Walter Fabián CABRERA -en calidad de coautores-, en orden al delito de “Lavado de Activos Agravada”, previsto y reprimido por el artículo 303, inc. a) del C.P.” (fs. 4513/4550).

La descripción de los hechos atribuidos a los imputados en el auto de elevación de la causa a juicio coincide con la descripción efectuada en las piezas acusatorias formuladas por la querellante (A.F.I.P.- D.G.I.) (fs. 4374/4384) y por el Ministerio Público Fiscal (fs. 4387/4402), a las cuales se remite en honor de la brevedad.

La pieza acusatoria transcripta precedentemente cumple el requisito establecido en el art. 399 del Código Procesal Penal de la Nación, en lo que hace a la enunciación de los hechos y circunstancias que fueran materia de acusación, encontrándose —de esta manera— debidamente conformada la plataforma fáctica del juicio.

II. Los imputados fueron oportunamente indagados en relación con los hechos por los cuales fueron procesados, ejerciendo su defensa material de la siguiente manera:

Fernando Luis Cuello brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3289 y 3494/3495, y en ambas oportunidades se abstuvo de declarar. Igual postura asumió en la audiencia de debate.

Diego Gastón Ludueña brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3496/3497, y en dicha oportunidad se abstuvo de declarar. Igual postura asumió en la audiencia de debate.

Rafael Gustavo Vega brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones fueron incorporadas a fs. 3287 y en dicha oportunidad se abstuvo de declarar.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Ya en el marco de la audiencia de debate, manifestó que proviene de una familia trabajadora conformada por su padre, jornalero, su madre, empleada doméstica, y ocho hermanos. Añadió que trabaja desde los diez años de edad y que ha hecho de todo —carpintería, verdulería— y que en ningún momento tuvo voluntad de cometer actos delictivos.

Por su parte, relató que, en el año 2009, a través de un conocido, ingresó a trabajar a Swetenson S.A., empresa que —junto a Árbol Grande S.A. — se dedicaban al rubro del transporte. Dijo que él prestaba tareas administrativas y operativas en Swetenson —facturaba servicios, llevaba documentación al estudio contable, les pagaba a los choferes, controlaba temas de neumáticos y combustible, etcétera— y cumplía allí un horario y cobraba un sueldo mediante recibo.

Recordó que Swetenson tenía cinco camiones y Árbol Grande tres, que las dos empresas estaban en el mismo lugar y él se encargaba de controlar y de darles dinero a los choferes. Dijo también que, si bien cada una de las empresas tenía sus propios choferes, él controlaba toda la documentación referente a los camiones y a los choferes de ambas.

Ese mismo año 2009, Swetenson empezó a vender sus camiones a terceros, por lo que la actividad disminuyó y fue en ese momento en el que le dijeron que, para poder seguir trabajando, iban a constituir la empresa Solfi S.A., por lo que debió pasar formalmente a dicha empresa. No obstante, en realidad nunca trabajó para Solfi, ni percibió sueldos de dicha empresa. No recordó quienes eran los dueños de Swetenson, pero sí refirió que fue Fernando Cuello quien le dijo que iban a pasar los empleados a otra empresa, para que conserven el trabajo y el pecó de iluso, porque no tiene muchos recursos para sobrevivir. También manifestó que no era fácil conseguir trabajo por aquel entonces, que tenía hijos pequeños y además no vio nada anormal que lo hiciera sospechar algo raro, porque continuó desarrollando sus mismas tareas. Agregó que Swetenson y Solfi compartían edificio





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

por lo que él se cruzaba con el imputado Martín en la oficina en la que ambos trabajaban en calle Mosconi, donde estaba la oficina comercial de Swetenson.

Respecto a la constitución de Solfi, dijo que fue creada como empresa de transporte, pero de ahí en más no sabe qué pasó porque no tuvo injerencia en esa empresa. Refirió que se enteró del tema de los créditos y demás, pero nunca supo bien cómo funcionaba, porque siempre fue empleado de Swetenson, mientras paralelamente figuraba en Solfi.

Aclaró que, desde 2009 a 2012, trabajó en las oficinas de calle Mosconi y que su trabajo consistía en hacer facturas o remitos. La oficina estaba en el centro y los camiones en las afueras de la ciudad, por lo que a veces se trasladaba para hablar con los choferes o eventualmente éstos iban a la oficina.

En esa oficina también funcionaba Árbol Grande. No había un galpón, no tenía estructura porque los camiones se mueven y esta empresa no tenía talleres propios por lo que se iban a los talleres.

Los camiones prestaban servicio para otras empresas, no recordó que empresas ni que mercadería transportaban, pero si sabe que los alquilaban porque el hizo contratos de alquiler.

También dijo que en el 2012 arrancó esta penuria, que no ha sido fácil y no estaba preparado para esto, que sufrió mucho la condena social. Agregó que es de Tancacha y todo esto repercutió en la imposibilidad de conseguir trabajo formal durante cuatro años, por lo que junto a su hermano se dedicó a hacer un trabajo primario pero digno, de recolección de silo bolsas en los campos y con eso subsistió hasta que consiguió el trabajo que tiene desde seis años. Aclaró así que nunca fue su voluntad formar parte de un trabajo que no fuera algo honesto.

Rubén Omar Di Primio brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3500/3501 y 3584/3585. Si bien en una primera oportunidad se abstuvo de declarar, luego amplió su declaración en los siguientes términos: *"lo que yo quiero decir puede ser que no tenga peso pero*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

no es nada más que la verdad. En las dos circunstancias anteriores me indicaron que no debía declarar. Soy una persona adulta y nunca hice nada, no tengo nada que negar a la justicia. En esas dos circunstancias sentí que estaba ocultando algo. Yo como presidente de la firma ALGECIRAS S.A. asumí esa responsabilidad porque se me propuso recibir un dinero adicional al sueldo que yo cobraba como empleado en relación de dependencia. Se me iba a dar un plus si figuraba como presidente de esta firma que comercializaba granos. Quiero aclarar que yo me había quedado sin trabajo y el banco me había rematado la casa por un crédito hipotecario que no puede seguir pagando. Yo era productor de seguros y con la crisis de los años 1999/2001 perdí la cartera de clientes y mi situación fue empeorando. Estuve varios meses en una situación desesperante. Después conseguí trabajo con otra gente hasta que esa persona disolvió su empresa y otra vez quedé sin trabajo. No tenía aportes hechos en los últimos años para poder tener una jubilación que me permitiera mantener a mi mujer y mis dos hijos. Entonces el titular de la oficina, el señor Walter TALLARICO que es Contador, que es de Carlos CASARES y vive en Barrio Puerto Madero, me propone ser Presidente de esta firma ALGECIRAS, el arma esa firma con el propósito de comercializar granos. El tenía una corredora de granos que se llamaba PELAIA S.A. Yo realizaba operatoria normal de oficina pero además, como era el titular de esta empresa, se abrían cuentas en bancos (Nación, hipotecario), donde me hacían firmar, y también firmar chequeras en blanco. El señor TALLARICO me lo pedía. Yo sabía que estaba mal pero sino me quedaba sin trabajo. El, TALLARICO tenía contacto con gente de acá de Córdoba porque cuando se constituyó esta sociedad, se hizo en una localidad cercana a esta ciudad de Villa María. A mí me trajeron en ómnibus a Villa María donde me vinieron a buscar en una camioneta, creo que fue en el 2010 y/o 2011, y me llevaron a una escribanía que creo que era en Rio Tercero a firmar la escritura de constitución de la empresa, creo que la escribana era una mujer. A mi trajeron con el Vice-Presidente Miguel Ángel ORTEGA con





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

quien trabajaba en la misma oficina. La oficina donde yo trabajaba no era ni Algeciras ni Pelaia, era una oficina de varias empresas donde se movía papelería correspondiente a varias firmas como "Corretajes Group", "Tripleme". Yo lo recuerdo por las conversaciones telefónicas. Esta oficina funcionaba en San Martín N° 66, 1er. Piso, Of. 107/108 de la Capital Federal, a media cuadra de plaza de Mayo. Yo iba a trabajar ahí todo los días y hacia fundamentalmente tareas de Banco. Los cheques eran de sumas importantes. Los firmaba yo, ponía mi nombre, cobraba la plata y la llevaba a la oficina, a TALLARICO. El 90% de las veces le entregaba el dinero a TALLARICO. Otras veces me hacían llevarla a cuevas. Todo esto lo hice porque me sentía presionado de perder el trabajo si no lo hacía, tenía pánico de volver a quedarme sin trabajo. Nunca un peso para mí. Yo cobraba y entregaba. Ahí también trabajaba un contador Juan CEROVIC, que creo que falleció, Darío CARRIZO, Miguel Ángel ORTEGA, Claudio ORELLANA, Diego SANCHEZ, todos trabajábamos en la oficina de calle San Martín. Hacíamos horario de oficina hasta las cuatro de la tarde más o menos. Actualmente vivo de mi jubilación mínima y vendo miel en las verdulerías y dietéticas. También llevo a Parque Centenario un puesto ambulante de venta de miel. Respecto al CITROEN, yo tuve un CITROEN Mehari, modelo 72. Ese auto ya no lo tengo. Es un auto de poco valor, no vale más de veinte mil Pesos. Acompaño constancia de consulta de dominio y aclaro que no es un C3 como dice el requerimiento de instrucción sino un Mehari, modelo 1972. Respecto de los contactos en Córdoba, TALLARICO hablaba de CUELLO. Cuando yo le preguntaba por el plus que yo debía cobrar, me decía que estaba esperando que CUELLO le girara la plata. Yo a CUELLO no lo conozco pero iban empleados de CUELLO a la oficina y cuando iban me hacían firmar planillas que yo suponía eran sobre operatorias de granos, pero desconocía de que se trataba de si eran operatorias ilegales. Yo nunca traté con ellos, desconozco los nombres, solo me hacían firmar, eran de Córdoba por el acento. Firme siempre bajo la confianza de que firmaba como presidente de la empresa y siempre dentro





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

de la operatoria de granos. Yo pensaba que eran operatorias legales aunque me llamaba la atención los montos de dinero que se manejaban. Pero tenía miedo de perder el trabajo no lo hacía, por eso no preguntaba, tenía pánico. Mi relación con TALLARICO terminó porque él cambió la operatoria de venta de granos. Achicó la operatoria y me dijo que me quedaba sin trabajo. Después me buscó en varias oportunidades porque yo tenía contacto ya con los bancos. El hacía operatoria de cambio de cheques y creo que tuvo problemas, por eso me quedé sin trabajo. Cuando me llegó una notificación sobre el juicio, fui a ver a TALLARICO y me dijo que no pasaba nada que no me haga problemas. Esto es terrible para mí. Cuando me abstenía de declarar yo me sentía mal. Sabía que estaba faltando a mis valores. Hago mi mea culpa pero aclaro que nunca me quedé con un centavo.

Que teme por sus hijos, porque conoce a sus hijos. Hasta este momento, todas las veces que hablaba con él, con TALLARICO siempre tuvo muy buena conducta. Nunca me amenazó ni nada. Pero como ahora hablo y quizás destapo una olla, tengo miedo por mis hijos. Él siempre tuvo una conducta intachable conmigo, salvo esto de verme involucrado en algo que jamás hubiera imaginado"

En el marco del debate, el acusado declaró que fue condenado por el Tribunal Oral 2 por los mismos hechos que se le imputan ahora y dijo que, como ya explicó antes, se le pidió formar parte de una sociedad desconociendo su finalidad, aprovechándose de su estado de necesidad. Por evadir impuestos ya fue condenado, él desconocía en aquel momento que, a través de su intervención en esa sociedad, personas a quienes no conocía iban a beneficiarse con esas maniobras. No los conocía.

Miguel Ángel Ortega brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3486/3487, y en dichas oportunidades se abstuvo de declarar.

En el marco del debate expresó que fue condenado por el Tribunal Oral 2 por los mismos hechos que se le están juzgando ahora y agregó que no ha





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

declarado antes por consejo de su anterior defensor. Asimismo, dijo que él dio su nombre para configurar una empresa, pero nunca tuvo ni administración ni dirección de la misma, no sabía que iban a evadir tributos y que con su nombre iban a lavar dinero, que desconocía esas maniobras y no sabía que usando su identidad iban a lavar dinero y hacer lo que estaban haciendo.

Horacio Omar Cismondi brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3489/3490, y en dichas oportunidades se abstuvo de declarar.

En la audiencia de debate, expresó su voluntad de declarar, afirmando que *“respecto al tema de las tarjetas, se las hacían a cualquiera para que maneje un vehículo... Cuello se las dio porque él viaja a hacer los services a las camionetas, pero también tenía Rivarola, y el hermano de ella. Respecto de Corretajes Group, el 4/5/2011 se vendió y la toma como presidente un señor Ortega y otro más y él se desvinculó de todo, nunca tomó ninguna decisión de esa empresa, ni recibió ningún beneficio económico de eso. Era amigo con Cuello, se juntaban, comían asado, pero no tenía negocios con él, para él siempre lo convenció de que hacía las cosas bien, tenía negocios de atención al público. Actualmente se gana la vida vendiendo bidones de agua, pero en julio le dieron una pensión, paga alquiler, no tiene nada, ya lo verificó la asistente social, ahora se mudó a un lugar más chico. Todas esas empresas eran de Cuello, el confía en la palabra de la gente, y como con él no hablaba mucho, el que lo llamaba era el contador Malpassi, y un día le dijo que era presidente, pero le dijo que no pasaba nada, que era de Nati, que lo iban a cuidar, que no pasaba nada. El no entiende nada, no tiene preparación, no sabe para que se usaban esas empresas.*

La mamá de Cuello estaba enferma, y por eso le dieron una tarjeta azul, la atendía en el alemán, el hizo varios viajes, la fue a buscar en avión o en auto, llevaba los vehículos al service a Buenos Aires, esa mujer estaba muy enferma y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

viajaba todas las semanas. Él iba de chofer, se hacía una changa, cobraba unos mangos y de paso se iba a Buenos Aires. Ese era el tema de la tarjeta azul.

Respecto a que lo hicieron presidente, declaró en el juicio anterior, dijo que los papeles que firmó de la venta, no leyó nada, se los dio el contador rápido, todo apurado, en la Escribanía y allí leyó que el vendedor recibía treinta o cuarenta mil Pesos y todavía los está esperando. El firmó en la confianza, pero nunca recibió ningún beneficio económico de eso.

Firmó la venta de Corretajes Group, él tiene el original guardado, el dueño de todo esto era Cuello y la mujer Nati Paulus, ellos cambiaban los soldados, cree que Ludueña era el presidente antes, no sabe, él fue en confianza de los amigos, y por ignorante puede meter la pata.

Era amigo de Fernando desde que era estudiante, de bares, han viajado juntos, asados juntos, muchos años. En aquel momento él tuvo varias etapas, primero trabajó en una fábrica de aceite, en una de cal hidratada como administración, luego como sabía de trigo con una gente de Tucumán buscaba lotes en la pampa y hablaba y tenía gente del molino Morixe de Buenos Aires, el Molino Ferri de Villa María, compraban los lotes y cosechaba, unos tres o cuatro meses que pasaba en la pampa con eso. Después volvía, y por eso andaba con ellos, era amigo. Conocía el análisis comercial del trigo, le enseñó muchísimo esa gente, menos hacer el gluten porque lleva otro proceso, y él se llevaba un porcentaje. Por ejemplo, un verano, Compañía Argentina de Granos le pagó un porcentaje por una comisión porque iban a comprar a La Pampa, y tenían que pagar un sellado para que saliera el camión. Acá no tienen esos sellados, hoy en La Pampa se debe declarar dónde va el camión, quien lo cargó y demás. Aquí es diferente, hay control, pero no es tan estricto. El hacía controles de calidad y buscaba lotes, andaba con un ingeniero agrónomo siempre. Por eso conocía la actividad de Fernando, se dedicó muchos años al cereal por el tío, eran parte de la aceitera de Tancacha, él nunca se metió con el tema del dinero. Ellos habían sido





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

criados de una forma alta, la abuela, el tío eran dueños de la fábrica de Tancacha, pero eran amigos, el siempre manejó ese tema, pero el dicente dijo que de papeles no sabe nada, los negocios de Cuello los hacía en privado, con sus contadores, él no sabía. Por eso, respecto de Corretajes, lo manejaba Malpassi, y fue él quien le dijo que era presidente, para que lo “aguante” pero le dijo que no iba a haber problema.

Ahora está haciendo trabajos en pintura de muebles antiguos, él sabe hacer cualquier trabajo.

Respecto de Corretajes, recibía unos Pesos para comer por viajar y por el tiempo, por los viajes, pero con la empresa no tenía nada que ver.

Respecto de las cédulas azules, había muchísimas, y cayó la de él, pero muchos otros tenían. Adentro de la guantera en una combi, estaba la cédula de él, como también de una moto que tenían y él no estaba enterado. Según él, solo tenía de una multivan y de una BMW y de la Mercedes también, y eso estaba bien hecho porque venía a Córdoba a hacer trámites, cree que estaba todo a nombre de las empresas.

No sabe qué era Solfi, sabía que tenía camiones, dos o tres, desde el 2008 o 2009, los fue a ver, sabe que los tenía.

Respecto de las tareas, tenía un vínculo por fuera de trasladar a su madre, era una cuestión de amistad de muchos años. No tenían relación de trabajo. A él le piden porque estaba limpio, para que fuera presidente de una empresa, piensa que la creó Malpassi, y le dijo que no la quería perder, entonces le dijo que lo iba a poner de vicepresidente, pero que no “pasaba nada”. Lo llamó el contador y le dijo que firmara ahí, que iba a ser el presidente, no le gustó mucho, pero lo calmaron y le dijeron que era para mantener, pensó que era como un monotributo que luego se cae, estuvo un tiempo y luego se vendió, estuvo en la venta. No vio movimiento, no sabe cómo se hizo la historia. Ahora está en la lucha por subsistir”





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Rolando Oscar Martín brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3283, y en dicha oportunidad se abstuvo de declarar.

En la audiencia de debate, manifestó su voluntad de declarar y afirmó: *“que tenía un lavadero de autos, después empezó a trabajar en el negocio de uno de los clientes que tenía, se hicieron amigos y empezó a trabajar, era Pablo Vitaluga, “Aval Automotores”. En ese lavadero, conoció a Cuello como cliente. Después hizo un curso de mandatario del automotor y empezó a trabajar en la concesionaria, haciéndole los papeles. Cree que él tenía una relación, algo, no sabe si iba al concesionario, por compra, no sabe. Siguieron en el trato que tenían y lo invitó a participar en el trabajo ese, ofreciéndole ganar mucho más. Su padre en esa época no estaba jubilado todavía, así que él bancaba toda la casa, entonces era una oportunidad para laburar, para generar dinero. Después entró a trabajar con Fernando, y bueno, ahí pasa lo que sucedió. Trabajaba con Cuello y ahí se enteró de todo lo que sucede cuando pasa lo que ya todos sabemos. Estaba en una empresa donde se dedicaba a hacer créditos; tomaba referencias, datos, para otorgar los créditos, a eso se lo pasaba a la señora de Fernando, Natalia. Ella veía el informe que él le pasaba, y de ahí en más, ella aprobaba o no el crédito, de acuerdo a la referencia que él le pasaba. La empresa le hizo un poder amplio de administración, que era para poder inscribir las prendas que otorgaba. La empresa se llamaba “Solfi”. Él era empleado de Natalia y de Fernando; lo que hacía era recaudar datos, hacía gestiones de prenda previa, y a eso se lo pasaba a Natalia, y ella le aprobaba o no el crédito. Entonces, una vez que ellos le aprobaban, otorgaba el crédito, de acuerdo a lo que ellos le informaban. Lo que hacían era financiar un porcentaje de la venta de un vehículo, le hacían una prenda y se financiaba. A todo ello lo decidía Natalia Paulus, la señora de Cuello. A él le pagaban entregándole mes a mes un sobre con el sueldo. Por lo general, se lo llevaba un chico de nombre Agustín o bien Natalia. Nunca tuvo cuentas bancarias a*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

su nombre, ni hizo ese tipo de operatorias. Lo único que hacía era ir a los registros del automotor a inscribir las prendas. En relación con la venta de cereales, eso era todo muy hermético. Él tenía una oficina abajo, y no sabía nada de eso. A él se le enviaba el dinero para la prenda y accedía al crédito. Se enteré después de que sucedió todo, de que se efectuaron los allanamientos. Para él era totalmente lícito, por eso también iba a los registros e inscribía. En cuanto a su relación con la empresa, era empleado y cumplía horarios todos los días. Entraba a las 9 de la mañana, salía a las 13, volvía a ingresar a las 16 y se iba a las 19 o 20 horas.”.

Ulteriormente, el acusado amplió su declaración manifestó que, en su anterior declaración estaba nervioso y que quiere dejar en claro la situación. A Fernando –Cuello– lo conoce cuando tenía un lavadero de autos, luego empezó a trabajar en una concesionaria y Fernando le ofreció trabajar con él por el doble de sueldo. En ese momento, tenía a sus padres a cargo, enfermos y sin jubilación, el trabajo le servía.

Dijo también que cuando empezó a trabajar se le asignó un lugar en una oficina en calle Mosconi, en un lugar abajo y enfrente había una chica que era la secretaria de Natalia Paulus. La gente que iba, tocaba timbre y ella los derivaba a las oficinas. Su trabajo consistía era hacer contratos de prenda, los concesionarios le pasaban el cliente, él evaluaba si estaba apto como cliente. En general, era gente que rebotaba los bancos, una vez que tenía los datos, se los pasaba a Agustín o a Natalia –Paulus– y ella aprobaba o no el crédito. Si lo hacía, se seguía con el trámite en el Registro o en la Escribanía. Si se hacía en la Escribanía, firmaba el dicente porque se le hizo un poder de administración, para firmar, por eso aparece su firma en los contratos.

Agregó también que las otras oficinas eran muy herméticas, no supo lo que estaba sucediendo, no sabía de dónde venían los fondos. Pensaba que era de una empresa de transporte, por eso declaró ante la UIF que los fondos eran de la empresa de transporte. Abajo había una oficina para Fernando Cuello, pero iba





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

pocas veces. Cumplía un horario, cobraba a veces las cuotas. Y el viernes llegaba Agustín, le tomaba una planilla Excel que había hecho Natalia y se llevaba la caja. Fernando solía estar en esa oficina y a veces le pagaba el sueldo él, o Natalia, o Agustín. Él era empleado y hacía lo que Natalia le decía.

Todo lo relatado aconteció en el año 2011, porque antes estaba en Aval y luego se fue con Cuello. Agustín quedó en su lugar cobrando cuotas. En un principio, era quien le recaudaba los días viernes lo que el cobraba. Su apellido era Maratini, era flaquito, rubio, de ojos claros. Nunca fue a un banco, no retiró dinero, era un empleado, recibía los datos para un pre-crédito, para que Paulus decidiera. Ella era su jefa y esposa de Paulus, eran ellos quienes decidían. Actualmente vive de changas, no tiene vehículo, ni casas, vive con sus padres enfermos, alquila, no está bien económicamente.

En cuanto a las características de la oficina de calle Mosconi, tenía varias oficinas, un moderno vidriado, era de dos pisos. Estima que era de Cuello o de Paulus, no sabe qué actividades se hacían en las otras oficinas. En una, estaba un chico Vega, enfrente de él estaba Maru, secretaria de Paulus. Él estaba encerrado en su oficina y si alguien iba a pedir un crédito o a pagar se lo pasaban a él. Para él, era dinero proveniente de la actividad de transporte. Él estaba en su oficina encerrado, había movimiento, pero él estaba en su oficina, eran pocos, pero él estaba en su oficina, y la gente pasaba lejos de su puerta que siempre estaba cerrada. Nunca le pidieron reserva, ni cautela.

Afirmó por otra parte que en Aval hacía gestoría y contratos prendarios, allí es donde Fernando Cuello le ofreció trabajo por el doble de lo que venía ganando y por eso aceptó. Respecto del pre-crédito, iba una persona, él le preguntaba sobre el vehículo, el porcentaje y si daba dentro de los valores que le habían permitido se lo pasaba a Natalia, y si ella daba el ok, lo llamaba al cliente. Si lo que pedía el cliente estaba dentro de la línea que le bajaban, por ejemplo, un 20 o 25 por ciento del monto del vehículo lo hacían, dependiendo también de donde trabajaba la persona.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Era un análisis informal el que él hacía, quizás Natalia después hacía otro análisis. El hacía de filtro, no hacía otro estudio. Si estaba dentro de los parámetros, el crédito pasaba, pero Natalia o Fernando armaban el crédito. El cumplía un horario, y los viernes o sábado se hacía una planilla y se la entregaba a Agustín Marini o Maratini. Él se llevaba el Excel con la plata en efectivo para dársela a Natalia, no sabe si podían depositar o transferir, el solo recibía efectivo. Maru les hacía un recibo, pero si el la cobraba anotaba en una planilla.

Natalia le hizo firmar en la Escribanía un poder de Solfi. Cuello era cliente del lavadero, se conocían del pueblo, tenía vínculos de ir a la oficina y encontrarse con Vega y Lula, y tomar un café.

Natalia Paulus era quien decidía si le daban o no los créditos. Luego Maratini se llevaba todo y si Natalia los otorgaba, lo llamaba y le decía que se los daba.

Respecto al cobro de los créditos, Maru atendía el portero, a veces ella cobraba las cuotas, no iba a cobrar a los domicilios.

Respecto de Rafael Vega, estaba en las oficinas de arriba, cree que con el tema de los camiones. Pensó que era una empresa de camiones porque cuando tuvo que hacer las declaraciones juradas en ocasión del poder, Natalia le dijo que los fondos provenían de una empresa de transporte, que las ganancias venían de allí. El poder estaba redactado y firmó bajo presión porque era su trabajo.

Como gestor, hizo dos o tres transferencias de camiones de la empresa a Swetenson, transferencia de titularidad. Solfi era donde él trabajaba, se le hizo un poder de esa empresa, pero de ahí en más no vio un camión que dijera ese nombre.

Él gestionaba cuando llegaba el cliente, el filtro para el crédito, un pre-crédito, de ahí él se lo daba a Agustín para que se lo diera a Natalia, si ella lo aprobaba se lo daban. La matrícula que él tenía era gestoría del automotor, por eso hizo transferencias de camiones y algunas hizo particular por su cuenta.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Además de esos camiones que transfirió de Solfi a Swetenson, no recuerda si hizo alguna otra transferencia. No hizo nunca gestiones bancarias, nunca fue a retirar dinero. Él recibía dinero físico, cree que los recibos los hacía Maru. Nunca tuvo contacto con autoridades del Banco Central, no tenía ni teléfono en su oficina.

Respecto de los morosos, aclaró que él no se encargaba del cobro.

La escribanía donde fue a firmar estaba ubicada en calle Bolívar. Ese poder lo otorgó apenas entró a trabajar. No recordó que hayan intervenido ni abogados ni contadores por el otorgamiento de los créditos que pre-aprobó.

Agregó finalmente que se encontró imputado, pero fue sobreseído en la anterior causa.

Jorge Ricardo Ferrer brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3478/3479, y en dicha oportunidad se abstuvo de declarar.

En el marco de la audiencia de debate, manifestó su voluntad de declarar y expresó que *“quiere negar que hayan estado en una asociación ilícita, que hayan evadido impuestos y lavado dinero. Tuvieron una empresa con su socio, comercializaban cereales, y todo el movimiento de la empresa, tanto los pagos cuanto los cobros se hicieron bancarizados por intermedio de transferencias bancarias o cheques cruzados a nombre del titular para depositar, y cuando el banco pidió requerimientos de los fondos que tenían, se presentó la documentación correspondiente. Esto se pudo hacer hasta aproximadamente el 15/11/2012; después de estar dos meses y días preso, cuando salieron, les bloquearon todas las cuentas.”*

Sergio Luis Guevara brindó declaración indagatoria en instrucción, que fue incorporada a fs. 3480/3481, oportunidad en la que manifestó: *“...vivo de mi señora y del negocio de mi señora quien tiene un negocio de insumos para el agro, de nombre “GUEVARA AGRONEGOCIOS” y además es profesora y del monotributo... que sus condiciones de vida son Regulares, normales, que gana aproximadamente*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

pesos diez y/o doce mil pesos (\$10.000/\$12.000), más el sueldo de mi esposa, que posee bienes registrables a su nombre, una camioneta Toyota HILUX, modelo 2009, dominio IBS-405 en un cincuenta por ciento, la casa donde vivo está a mi nombre y después tengo dos terrenos, uno con una casa y el otro con dos departamentos que alquilo, es una especie de casa dividida y de eso facturo el monotributo, también tengo otro terreno en Corcobado, localidad de Villa Rumipal, Departamento Calamuchita y otro en Valle Dorado, también de Villa Rumipal; que la casa en la que vive es de su propiedad...". Luego, en fecha 29/08/2018 amplió su declaración indagatoria, la que se encuentra incorporada a fs. 3560/3461 de autos, y en dicha oportunidad expresó que "La camioneta Fiat Estrada, dominio MKU-801, fue comprada por mi señora, MEINER Nancy Antonia, fue comprada en la agencia de Aldo Juan PETITTI, concesionario Oficial de FIAT de Río Tercero con fecha 12 de abril de 2013. Esa camioneta salió ciento cuatro mil Pesos (\$104.000) y se entregaron cuarenta mil Pesos (\$40.000) de los cuales treinta y dos mil (\$32.000) era parte del costo del vehículo y el resto era impuesto y partes administrativas del automotor. Esos cuarenta mil Pesos (\$40.000) eran producto de la venta de un Ford Fiesta, modelo 2004, cinco puertas, dominio ELC-353, de titularidad de mi señora MAINERI, que fue comprado en octubre de 2011 a la Señora GRASSO, Rosa del Milagro. Se vendió a fines de marzo del año 2013 en cuarenta mil Pesos (\$40.000) que fueron entregados a la agencia Pettiti. El auto fue vendido en forma particular a un señor de nombre Richard pero que no recuerda más datos y no guardó ninguna documentación. El propietario de ese auto hoy es CRACO Eber Alexis. El saldo restante de la compra del rodado FIAT se pagó en sesenta (60) cuotas a través del Banco Santander Río, de tres mil ciento quince Pesos (\$3.115) aproximadamente cada una, en sistema francés y con seguro incluido. Respecto del ingreso de mi señora, a los fines del pago de las cuotas, aclaro que es profesora del tercer ciclo de la EGB y de la Educación en el sistema Polimodal en Economía, es Técnica Superior en Administración de Empresas,





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Profesora del Nivel Medio y de la Educación Superior y trabaja en Proyectos Nacionales CAJ, Clan y tutorías en el nivel superior, ello es adicional al trabajo de profesora, siendo su ingreso mensual pesos diecisiete mil novecientos ochenta y dos (\$17.982). Fue monotributista a partir del 2005 y en mayo de 2013 responsable inscripta. Tiene comercialización de insumos, agroquímicos, fertilizantes, semillas. Se facturan comisiones por comercialización. A veces se factura directo y a veces comisiones. Se acompañan originales y copias de toda la documentación que da cuenta de lo manifestado, a los fines de que previa compulsación de las con los originales, se agreguen las fotocopias en autos”.

Asimismo, en el marco de la audiencia de debate, manifestó su voluntad de declarar y negó la asociación ilícita, la evasión agravada y el lavado de dinero. Agregó que tal y como declaró su socio, tenían una empresa de acopio de cereales, con todas sus cuentas bancarizadas y que tanto los pagos como los cobros fueron efectuados por transferencia o por cheques. Los cobros que se recibían por cheque se depositaban en su cuenta. Todos los pagos que se hacían, se hacían por cheque o transferencia. Los cheques salían a nombre de los titulares y cada vez que el banco requería demostrar los fondos, siempre se les presentó. Finalmente, refirió que la acusación señala la adquisición de un vehículo Fiat, una Strada del 2013, comprada con su esposa en lo de Juan Pettiti y que pagaron con parte de un auto que tenían, un Ford fiesta modelo 2013, que eran más o menos \$40.000. Sin embargo, como la camioneta costaba cerca de 108.000 pesos, el resto del dinero lo consiguieron mediante un crédito obtenido en el Banco Santander Río, que pagaron en 60 cuotas fijas en pesos.

Rubén Adolfo Ceva brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3484/3485, y en dicha oportunidad manifestó: “Yo me veo sorprendido por esta nueva imputación que se me atribuye de lavado de dinero, dado que estoy ajeno y no he tomado conocimiento de la maniobra que se afirma cometida. Niego categóricamente haber





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

participado en los hechos. No entiendo por qué causa, siendo mi actividad la de contador público, se me imputa que he manejado ilícitamente dinero dado que yo nunca administré ni recibí dinero ni bienes de mis clientes. Es imposible que se me impute un delito en el cual se exige obligación tributaria propia dado que yo no poseo deuda impositiva tal como lo manifiesta en el informe de inspección la AFIP, que está incorporado en el expediente madre y donde no se me atribuye ningún apoderamiento ni defraudación tributaria. Nunca he tenido una imputación delictiva por mi comportamiento por las deudas fiscales propias. Nunca confabulé con mis clientes una evasión o defraudación impositiva ni mucho menos el lavado de activos, ni tampoco lo que se le llama los actos que son endilgados como delitos precedentes. De acuerdo a lo que manifesté precedentemente yo nunca conocí ni participé en actos de lavado ni en los actos que se endilgan como delitos precedentes. Yo siempre tuve una participación profesional y en base a los elementos y documentación que me han aportado las empresas y las personas. No voy a responder preguntas y me siento con una persecución jurídica penal. Yo solamente he ejercido mi actividad profesional y no he confabulado con ningún cliente para evadir o defraudar. Ante esto, ejerzo el derecho constitucional que me asiste de no contestar preguntas.”

En el marco de la audiencia de debate, manifestó su voluntad de declarar, sin contestar preguntas, y afirmó: *“Quiero negar la acusación. Nunca he llevado a cabo un comportamiento ni de autoría ni de participación que tenga relación con el delito de lavados de activos que se investiga en esta causa. Quiero manifestar que me encuentro imposibilitado de defenderme porque no se me ha indicado, ni se me ha acreditado con grado de probabilidad comportamientos o actos que me sean atribuible y que signifiquen o que configuren un delito de lavado de dinero. Solo se indica ahí en el expediente en forma ambigua, indeterminada, y por ende, inadmisibles, que me priva del derecho de libertad, un supuesto asesoramiento. Yo quiero afirmar que mi ejercicio profesional se limitó a realizar la actividad*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

profesional dentro de los límites de incumbencia que me da el título de contador público, que me lo permite, pero nunca un exceso. Quiero manifestar que todos mis movimientos bancarios, de consumo y de adquisición de bienes, a mí me los verifico la DGI. Me abre la inspección estando yo privado de la libertad. En octubre de 2012 me abre la inspección hasta marzo de 2013, me verifican y me auditan todos los inmuebles, de los cuales ya lo he expresado en reiteradas veces en esta indagatoria; solamente me hace un ajuste de consumo, todos mis bienes están justificados, todos mis bienes vienen de fondos lícitos. Yo vengo trabajando desde los 15 años con mi padre y mi hermano y mi madre. Antes del secundario, yo vengo trabajando con mi padre, y yo lo expreso en la primera indagatoria que me hacen. Yo toda la carrera en la universidad nacional iba a la noche a la facultad, porque durante el día trabajaba en un estudio contable. Entonces, yo no he lavado activos, no he lavado dinero. Esa inspección que me hace la AFIP, me la abre en el año 2012 y comprende todos los años no prescriptos para atrás, que normalmente son 6. O sea que desde el 2012, si nos vamos 6 para atrás donde me verifican todos mis bienes, empieza en el 2006. Yo no he lavado de dinero. Solamente asesoré y con total independencia, nunca me excedí en mi asesoramiento. Eso nada más."

Walter Fabián Cabrera brindó declaración indagatoria en instrucción, sus manifestaciones se encuentran incorporadas a fs. 3506/3507, y en dicha oportunidad se abstuvo de declarar.

Posteriormente, en el marco de la audiencia de debate, manifestó su voluntad de declarar y expresó que, a la fecha del delito por el que se encuentra acusado, se desempeñaba como funcionario policial en la ciudad de Río Tercero en tareas no operativas, no portaba armas por lo que no podía hacer servicios adicionales. Agregó que entonces tenía la necesidad de tener un ingreso más por lo que habló con un señor de apellido Pelayes, que no se encuentra en la causa, y esta persona lo contactó con un sujeto de apellido González que estaba buscando gente para hacer gestiones bancarias en diferentes bancos de la ciudad.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Así las cosas, el nombrado González le extendió un poder a su nombre, donde también figuraban los imputados Di Primio y Cabral, a quienes nunca conoció, y con ese poder iba a los bancos a cobrar cheques a cambio de efectivo. A esos cheques se los entregaba González, alias “sapa”, y luego el dicente los cobraba, mientras González lo esperaba afuera en un vehículo o en un café. El dinero que sacaba se lo entregaba en su totalidad a González. Él era monotributista y facturaba en ese carácter por realizar la gestión mencionada.

Dijo también que en esa etapa tenía que mantener a su familia, que tiene un hijo celíaco, que desconocía que fuera ilícito dicho accionar, que solo tenía un poder, no conocía su origen, y aquí se lo acusa de dinero ilícito que nunca recibió, solo tuvo un poder para hacer gestiones. Culminó diciendo que está arrepentido y que nunca pensó estar en esta situación de este tipo, porque viene de una institución policial.

III. En la instancia de incorporación del material probatorio en audiencia, el **Dr. Gustavo Taranto** planteó la nulidad de las constancias obrantes a fs. 704 — correspondientes a conversaciones, primera intervención— y a fs. 707 — correspondientes a conversaciones, segunda intervención— de autos “Cuello Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación ilícita, etcétera” (Expte. FCB 62000069/2008) y se opuso a su incorporación al debate. La petición contó con la adhesión de los **Dres. José Ignacio Cabanillas y Julio Antonio Loza**.

El letrado solicitante puso de manifiesto que, si bien dicho planteo fue rechazado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba —en ocasión de sustanciarse el debate en la causa de referencia—, dado que no existe pronunciamiento firme, debe ser coherente con la postura asumida en aquella oportunidad y, así, volver a articularlo en esta instancia.

En abono de su pretensión, alegó que las intervenciones telefónicas fueron ordenadas por orden judicial y tramitadas por funcionarios designados por el Juzgado Federal, pero las constancias de las desgrabaciones no cumplen con los





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

requisitos de confección de cualquier acta, establecidos por los artículos 138 y 139 del CPPN, en relación con la indicación de fecha, nombre de funcionario interviniente, motivo, etcétera. En cambio, fueron volcadas en hojas innominadas, con omisión de mención de quién, cuándo y dónde fueron hechas.

Acerca de la primera conversación (fs. 704) comentada por el Contador Público Sergio A. Flores, consta que fueron tomadas del CD N° 1 al CD N° 30. Sin embargo, esos soportes no están reservados para la causa, es decir, no obra respaldo que brinde oportunidad a la defensa de verificar su origen y autenticidad. Respecto a la segunda desgrabación (fs. 707), el peticionante señaló que si bien cuenta con respaldo en unos TDK, donde estaría la referencia, carece de la consignación de la persona a cargo de la labor, en violación de las prescripciones formales del Código de procedimiento.

En función de ello, la defensa alegó que las actas resultan nulas de nulidad absoluta, por violación a la garantía de la defensa en juicio, y solicitó al Tribunal que no sean incorporadas como elemento de valoración. Hizo reserva de casación y recurso extraordinario.

En respuesta a la vista cursada, el Representante del **Ministerio Público Fiscal** hizo saber que la cuestión introducida por la defensa fue zanjada mediante sentencia del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba y solicitó su rechazo.

En sintonía con lo dictaminado en el proceso anterior, expresó que las constancias citadas, de fs. 704 y 707, conforman un informe emitido por personal designado por el Juzgado Federal. Añadió que, según lo considerado por el Tribunal Oral 2, no constituyen actas *per se*, sino partes de un expediente administrativo de AFIP, por lo que carecen de iguales requisitos. Por lo demás, refirió que dicho informe fue realizado por un funcionario público que no fue impugnado, como tampoco fue cuestionado el material en bruto sobre el cual se hizo el informe.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Acerca de las grabaciones que no fueron habidas, refirió que hallan respaldo en dichos informes; quedó comprobada su existencia y fue iniciada una investigación al respecto.

A su turno, la letrada de la **querella AFIP-DGI** adhirió a las consideraciones efectuadas por la Fiscalía General y solicitó el rechazo del planteo articulado.

Oídas las partes, el Tribunal por unanimidad resolvió la cuestión en los siguientes términos: “...I) **NO HACER LUGAR** a la nulidad de las constancias de desgrabaciones telefónicas obrantes a fs. 704/706 y fs. 707/721 de autos” Cuello Fernando Luis y Otros p.ss.aa Asociación ilícita fiscal” (Expte. FCB 62000069/2008/TO1) y, en consecuencia, **RECHAZAR** el planteo de excusión probatoria efectuado por el Dr. Taranto con adhesión de los Dres. Cabanillas y Loza. II) **TÉNGANSE PRESENTES** las reservas de ley efectuadas.”, y difirió los fundamentos de la decisión para la presente instancia de la sentencia.

IV.- Por fuera de dicho planteo de la defensa, hay que decir que la prueba de la causa incorporada al debate se encuentra reseñada en el acta labrada por secretaría del Tribunal, que se adjunta a la presente y a la que se remite por razones de síntesis.

V. En oportunidad de alegar sobre el mérito de la prueba, las partes efectuaron las siguientes consideraciones:

El **Dr. Claudio Ronchi**, en representación de la querella pública AFIP-DGI, limitó su alegato a explicar el motivo de participación de la querella. Según las razones dadas, dicha participación halla razón en la existencia de comunidad probatoria entre la presente causa y la ventilada ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, caratulada “Cuello, Fernando Luis y otros s/asociación ilícita fiscal” (Expte. 62000069/2008) y sus acumuladas, la identidad de hechos e identidad de la mayoría de los imputados.

Agregó que, según su entendimiento, el delito de lavado de activos, si bien es un delito autónomo, participa con los delitos tributarios de los delitos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

denominados socioeconómicos, compartiendo ambos el bien jurídico tutelado que es la integridad de los mercados; todo lo cual justifica que su representada AFIP-DGI participe en las actuaciones. Por esa razón, efectuó adhesión a las conclusiones a emitir por la Fiscalía General, así como a sus pedidos de pena.

Por último, hizo reserva del caso federal en caso de sentencia adversa a sus intereses.

A su turno, los **Dres. Carlos Gonella y Federico Mazzei**, en su calidad de representantes del Ministerio Público Fiscal, pronunciaron sus alegatos en el juicio.

El Dr. Gonella inició su exposición con una breve mención al origen de estos actuados y manifestó que esta causa es la segunda parte de la historia que comenzó hace apenas un año, el 9 de agosto del 2021, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dictó sentencia condenatoria en contra de varias de las personas aquí acusadas por los delitos de asociación ilícita fiscal y otros delitos tributarios. Al respecto, reconoció que ello conlleva pros y contras. Por un lado, los pros —desde un punto de vista estrictamente acusatorio— puesto que este Tribunal no conoce detalles ni mayores alcances del contenido de esa sentencia que dijo tener un objeto procesal y una carga argumental directamente relacionada y, por otro lado, la contra de una mayor carga de trabajo para el Ministerio Público Fiscal y mayor exigencia para exponer sus análisis a fin que este Tribunal comprenda acabadamente cómo es el objeto procesal y si se vincula directamente con la otra causa.

Recordó, tal como lo efectuara la querella, que el delito de lavado de dinero es un delito autónomo, no obstante lo cual se halla dogmáticamente relacionado con su delito precedente que, en este caso, son los delitos tributarios. Indicó que aclara ello en virtud de un posible planteo de litis pendencia ya que varios acusados en esta causa se defendieron diciendo que se los estaba juzgando por el mismo hecho por el cual ya fueron condenados. Sobre este punto, rechazó esa defensa y sostuvo que en realidad eso no es correcto, que hay una relación lógica y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

dogmática entre ambos delitos y procesos, y eso queda claro en las cuestiones que se debaten y se han debatido en esta audiencia.

Con relación a los hechos descriptos, tanto en el auto como en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, señaló que los delitos precedentes comenzaron en el año 2008. En cuanto al lavado de dinero, también explicó que se atribuyen conductas anteriores a junio del 2011, momento en el cual se incorporó el art. 303 al Código Penal, cuyos alcances con relación a su anterior regulación son diferentes.

En tal sentido, dio por reproducidos los hechos de la acusación, pero tomó como punto de partida temporal para las conductas de lavado de dinero el día 21.06.2011, fecha en la cual se publicó la Ley 26.683 y se incorporó el delito de lavados de activos al Código Penal.

Previo a ingresar al análisis probatorio, el Fiscal General refirió al trámite de las causas y expresó —respecto de la decisión de desdoblar las causas— que la cuestión fue motivo de debate entre los jueces y las juezas de Tribunales Orales, jueces de Instrucción y fiscales de la jurisdicción. Reconoció que lo deseable era que este hecho se debata y discuta junto con el hecho de asociación ilícita, en términos de concurso real, en el mismo proceso. Sin embargo, acotó “estamos aprendiendo señora jueza todos y todas estamos aprendiendo”. Dijo que, a veces, las circunstancias procesales como las que se dieron en este caso, por el grado de avance de la otra causa o circunstancias estratégicas, hay que tomar decisiones y decidir llevar a juicio lo que está consolidado, separar las causas y seguir investigando el lavado de activos. Que ello lo habla desde su experiencia, por haber tenido que diseñar la política de instrucción penal nacional contra el lavado de activos y citó el caso “Carbón blanco”, como ejemplo exitoso de división de procesos.

En cuanto a los hechos, el Dr. Gonella reprodujo lo establecido en la pieza acusatoria. Expresó que el objeto procesal de esta causa establece que, a partir de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

la actividad desplegada por los imputados en la asociación ilícita que conformaron, lograron evadir más de 57 millones de pesos, suma que inyectaron luego en la economía, a través de distintas maniobras, las que fueron descriptas en el requerimiento de elevación. Indicó cuál fue propuesta metodológica de la acusación, con una mirada que tuvo en cuenta el punto de vista criminológico del delito de lavado, diferenciando sus tres etapas: “la obtención del dinero ilícito”, “su colocación y estratificación”, y finalmente “integración y uso”.

Explicó la mecánica llevada adelante por los acusados en orden a las operaciones que realizaron mediante distintas cuentas bancarias de las empresas involucradas, los diferentes montos canalizados a través de las mismas, refirió la existencia de reportes de operaciones sospechosas y la existencia de poderes para actuar a través de dichas cuentas, todo lo cual existe como prueba obrante en autos.

Respecto a la adquisición de los bienes registrables a través de las firmas, dijo que fueron realizadas con el asesoramiento del imputado Rubén Adolfo Ceva, con el objeto de beneficiar a los verdaderos dueños, otorgándose diferentes poderes de disposición y uso de los mismos mediante instrumentos públicos.

En orden a la utilización de la empresa “Solfi S.A”, manifestó que la firma tenía como objeto declarado el transporte de carga, pero en realidad era una financiera o “cueva” en términos financieros. La firma fue utilizada por Natalia Paulus (fallecida), los imputados Cuello, Vega y Martín para poner en circulación \$599.000. Indicó la existencia de veintiséis préstamos otorgados, lo que surge de los propios contratos de prenda obrantes como prueba en autos y también de la detección de “auto préstamos” a favor de Cuello y Paulus otorgados por Solfi S.A. y la empresa Logint, en el año 2011.

Enmarcó la participación de los acusados en la etapa de “colocación y estratificación” utilizando varias cuentas corrientes en distintos bancos, para así canalizar una enorme masa de dinero que ingresó sin justificación. Luego, la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

extracción en efectivo por ventanilla y la colocación a través de la financiera y la compra de bienes. Reconoció que si bien no resulta tan compleja la maniobra lo que resulta compleja es la prueba, tanto la documental como los numerosos testimonios.

Sostuvo que los hechos se encuentran acreditados, más allá de toda duda razonable, así como la participación de los acusados, con excepción de Walter Fabián Cabrera, Rolando Oscar Martín, Horacio Omar Cismondi y Rafael Gustavo Vega —por razones que expuso y que serán reproducidas en el punto VI de este resolutorio— abogando para los nombrados el dictado de absoluciones.

Sostuvo que, en general, aún en el caso de estas absoluciones, tanto los hechos como la participación no habían sido controvertidas, salvo Cuello y Ludueña que se abstuvieron de prestar declaración indagatoria. Que los imputados que declararon esgrimieron una defensa basada en la inexistencia de tipo subjetivo. Por su parte, Ceva se defendió, sin expresarlo técnicamente, en base a una causa de justificación: ejercicio legítimo de un oficio o cargo.

Por esas razones, al no encontrarse en general controvertida la existencia de los hechos, ni la participación de los acusados (con los alcances referidos), sostuvo que no era necesario:

- profundizar en el análisis crítico de la prueba documental relacionada a la constitución de las estructuras jurídicas y a su utilización para la colocación y estratificación del dinero en el sistema financiero
- profundizar en el detalle minucioso de los números de cuentas corrientes pertenecientes a esas empresas en las instituciones bancarias
- profundizar en las referencias concretas de las operaciones financieras consistentes en depósitos, transferencias, libramiento o endoso de ch, y su respectivo cobro por ventanilla, que eso insumiría largas jornadas.

No obstante ello, hizo mención de que efectuaría algunas referencias probatorias generales en tal sentido, profundizaría con relación a los bienes





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

adquiridos y a la utilización de la empresa Solfi S.A., en la etapa de integración y uso, y refutaría las posiciones defensivas.

Tras analizar el material probatorio, dio por acreditada la existencia material de los hechos y la responsabilidad de los acusados Cuello, Ludueña, Ferrer, Guevara, Di Primio, Ortega y Ceva.

En tal sentido, el Fiscal General ratificó la calificación legal efectuada en la instrucción “lavado de dinero agravado por habitualidad y formar parte de un grupo de personas para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza” (art. 303 ap. a CP).

Valoró las pautas de mensuración de pena previstas en el art. 40 y 41 C.P., solicitó se condene a Luis Fernando Cuello como autor responsable del delito de lavado de dinero agravado y se le aplique una pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial por seis años para ejercer la profesión de licenciado en administración de empresas (art. 20 bis 3 C.P), accesorias legales y costas.

Respecto al monto de la multa explicó que, si bien el monto del lavado atribuido a los imputados es relativamente importante (\$57.232.547,49), Cuello lo puede afrontar, si se tiene en cuenta la gran cantidad de bienes existentes, tanto a su nombre como de su expareja y madre de su hijo Natalia Paulus. Por esa razón solicitó que la multa se imponga por \$114.465.094,98 que resulta de multiplicar por dos el monto lavado.

Acerca de los encartados Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara, solicitó se los condene como coautores responsables del delito de lavado de dinero agravado y se les aplique una pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de \$25.116.273,5 a cada uno de ellos.

Respecto de Rubén Adolfo Ceva, solicitó se lo condene como partícipe necesario del delito de lavado de dinero agravado y se le aplique una pena de cuatro años y seis meses de prisión inhabilitación especial por seis años para





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

ejercer la profesión de contador público (art. 20 bis C.P) y multa de \$25.116.273,5, accesorias legales y costas.

Por su parte, con relación de Diego Gastón Ludueña, Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega, solicitó se los condene como partícipes secundarios del delito de lavado de dinero agravado y se les aplique una pena de dos años y seis meses de prisión en forma de ejecución condicional, atento a la inconveniencia de su cumplimiento efectivo, y multa \$7.000.000 a cada uno de ellos, con costas.

Asimismo, solicitó el decomiso de los bienes descriptos en la plataforma fáctica (Mat. 21-000165-0170 y 21-000165-0004 correspondientes al domicilio de Olga Cossettini 1611 95, motocicleta marca BUELL, Modelo XB 12X, Dominio: 979 GEE; automóvil marca Toyota, Modelo: HILUX 4X2 Cabina Doble SRV 3.0 TDI. Pick Up. Dominio: JKW 483; automóvil marca Volkswagen, Modelo MULTIVAN 2.5 TDI. Dominio: KGT 482), en función del art. 23 CP.

Sumado a lo anterior, por aplicación del art. 305 del CP, solicitó el decomiso de los bienes que se encuentran a nombre de Natalia de los Ángeles Paulus (f), cuyas matrículas son los N° 556.029, 640.647, 640.648, 1.429.546, 1.429.547, 1.429.549, 1.429.550, 1.429.551, 1.429.552, 1.429.554, 1.429.555, 1.429.556, 1.429.557, 1.429.558, 1.429.559, 1.429.562, 1.429.563, 1.429.564, 1.429.567, 1.429.568, 1.429.569, 1.429.570, 1.429.571.

Manifestó también que, en virtud de lo dispuesto en el art. 304 CP, corresponde decomisar los bienes que se encuentran a nombre de las empresas fantasmas utilizadas para consumir los hechos, no descriptas en el requerimiento de elevación de la causa a juicio pero que figuran como titulares. Así, a nombre de *Algeciras S.A*, el inmueble cuya nomenclatura catastral es Cir: 4 Secc. SS: MZ: 119 Parc: 16 c Subp: 13, y Cir: 4 Secc. SS: MZ: 105 Parc: 3 b.; *Árbol Grande S.A*, el inmueble Matrícula N° 75-11.358 en la provincia de Santiago del Estero; en orden a la empresa *Swetenson S.A*, un inmueble en Córdoba Matrícula N° 524.768 y otro sito en calle Juana Manso N° 1631 CABA; de la empresa *EFCE*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

S.A, en la ciudad de Córdoba, inmuebles Matrículas N° 1.148.548, 1.148.550, 1.287.634, 1.293.817; finalmente de la empresa SOLFI S.A, en la ciudad de Córdoba, inmueble Matrícula N° 495.800.

Respecto de vehículos a nombre de las empresas, el Fiscal General solicitó su decomiso y aclaró que tampoco figuran en el requerimiento de elevación de la causa a juicio los siguientes rodados: BMW TODO TERRENO. Modelo 338- X3 2.5 SI. Dominio: HRQ 569. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 12/08/2009; MERCEDES BENZ CHASIS C/ CABINA. Modelo 844-I-1624. Dominio: HVU 188. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 20/01/2009; ACOPLADO CRESCENTE Modelo 221 -CU- 603. Dominio: HVU 220. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 12/02/2009; MERCEDES BENZ CHASIS C/ CABINA. Modelo 769- L1634. Dominio: IGF 587. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 18/08/2009; ACOPLADO CRESCENTE. Modelo 02- 221- CU- 603. Dominio: IHC 086. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 01/09/2009; FIAT. Modelo STRADA WORKING 1.4. Pick up – Cabina Simple. Dominio: IQP 750. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 05/02/2010; IVECO. Modelo 170E22/08. CHASIS C/ CABINA. Dominio: HKR 765. Titular: ARBOL GRANDE S.A., Fecha de titularidad: 25/08/2008; ACOPLADO CRESCENTE. Modelo 221- CU- 603/2008. Dominio: HMY 375. Titular: ARBOL GRANDE S.A., Fecha de titularidad: 17/09/2008; MERCEDES BENZ. Modelo ML 350 4MATIC. Dominio: IRN 293. Titular: SWETENSON S.A., Fecha de titularidad: 23/04/2010; FIAT. Modelo STRADA TREKKING 1.4. PICK UP - Cabina Simple. Dominio: ITQ 567. Titular: ARBOL GRANDE S.A., Fecha de titularidad: 21/05/2010; PEUGEOT. Modelo 206 Premium 1.6 3P. Dominio: GAN 332. Titular: SOLFI S.A., Fecha de titularidad: 01/08/2012.

A continuación, el Dr. Gonella pidió —como medida cautelar— la inhibición general de bienes y la traba de embargos sobre los bienes que se encuentran a nombre de los acusados a fin de hacer efectivo el pago de las multas solicitadas,





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

por configurarse los extremos que fundan dichas medidas *fumus bonis iuris* y *periculum in mora*, hasta cubrir el monto de las multas respectivas. A ese objeto, describió los bienes afectados.

Finalmente, en virtud de sanciones previstas en el art. 304 C.P., solicitó la cancelación de la personería jurídica de todas las personas jurídicas involucradas y utilizadas para consumar las maniobras investigadas.

Ante los pedidos formulados, requirió que la sentencia sea comunicada a la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

Llegado el turno de las conclusiones finales de las defensas, el Defensor Público Oficial **Dr. Jorge Perano**, en ejercicio de la defensa de los imputados *Rolando Oscar Martin* y *Horacio Omar Cismondi*, adhirió a la postura del Ministerio Público, al igual que lo hizo el representante de la querella, de no formular acusación en contra de sus defendidos.

Al respecto, hizo mención especialmente a los precedentes “Tarifeño” y “Mostacchio”, en relación a la necesidad de existencia de acusación para que el sistema penal funcione. Que, en este caso, al carecer de acusación, deviene innecesario la defensa, por lo que no queda otra solución procesal posible que la absolución de sus representados, lo que así solicitó.

Seguidamente, el letrado particular **Dr. Carmelo Fabricio Zucarello**, en representación del encartado *Walter Fabián Cabrera*, manifestó su adhesión a los alegatos realizados por el Ministerio Público Fiscal y a las manifestaciones de la querella y refirió, al igual que el Dr. Perano, que al no existir acusación contra su pupilo procesal no hay ejercicio posible de la defensa, por lo que solicitó también su absolución.

A su turno, el Defensor Público Oficial **Dr. Rodrigo Altamira**, respecto del encartado *Rafael Gustavo Vega*, se remitió a las conclusiones esgrimidas por el señor Fiscal General por ausencia de acusación.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Ahora bien, con respecto a los asistidos *Miguel Ángel Ortega y Rubén Omar Di Primio*, acusados como partícipes secundarios del delito atribuido, aclaró que no iba a efectuar valoraciones de la prueba, así como tampoco cuestionamientos académicos de complejidad —tales como si se puede o no lavar el dinero obtenido de una evasión— y se limitó a exponer y desarrollar dos planteos jurídicos:

- Violación de la prohibición de ser perseguidos dos veces por los mismos hechos, atento a sus defendidos están siendo nuevamente juzgados por los mismos hechos ya ventilados y condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, utilizando otra calificación jurídica. Por las razones que expuso, las cuales serán desarrolladas con mayor amplitud en la cuestión correspondiente, solicitó la anulación del proceso en relación a sus asistidos por violación de una garantía básica y requirió sus absoluciones.

-Atipicidad de las conductas atribuidas: manifestó que en ambos procesos fueron utilizadas palabras similares pero las conductas atribuidas a sus defendidos en este caso son atípicas y no constituyen maniobras típicas del lavado de activos por el que han sido acusados. Ello porque los depósitos que realizaron a nombre de esas sociedades, así como el retiro de los valores, no tenían como objeto ocultar el verdadero origen de ese dinero, sino que formaban parte del último eslabón necesario para concluir con la evasión reprochada y para poder, finalmente, hacerse del efectivo, pagar a los productores ocultos de granos y sacar un rédito. Es decir, que para la defensa era la etapa final necesaria para que la asociación ilícita sea rentable.

Aclaró en tal sentido, que este segundo planteo es similar al anterior pero tiene que ver con el lenguaje y consiste en sostener que los movimientos en las cuentas bancarias que fueron detallados en la acusación y el retiro por órdenes o cheques en las mismas no conforman acciones típicas tendientes a ocultar o disimular el verdadero origen de evasión fiscal sino que, como refirió, constituían un





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

eslabón más de esta empresa diseñada por los jefes de la Asociación Ilícita Tributaria para pagarle al productor oculto y para, lógicamente, hacerse del rédito o ganancia del emprendimiento. Este movimiento era la etapa final para hacerse del dinero obtenido de esta actividad ilegal obtenido de los productores ocultos, y eso surge bien claro del párrafo de fs. 362 de la sentencia del TOF N°2, en donde se dijo que el rol de FG Cereales era hacer aparecer como que compraban los granos a esas empresas apócrifas, y con ello blanqueaban el cereal y ocultaban a los verdaderos productores. En definitiva, es un eslabón más de la Asociación Ilícita Fiscal. Por ello solicitó la absolución de Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega.

Por último, en caso de no prosperar los planteos, solicitó al Tribunal no haga lugar a los embargos referentes a las multas solicitadas por la fiscalía debido a que la medida cautelar es desproporcional e irrazonable, en tanto con solo trabar embargo sobre uno de los inmuebles es suficiente para dar cumplimiento a la garantía.

A su turno, efectuaron sus consideraciones finales los **Dres. José Ignacio Cabanillas y Leonardo Monti** en representación de los encartados *Luis Fernando Cuello* y *Diego Gastón Ludueña*. En primer término, el Dr. Cabanillas refirió que no hay duda respecto a la necesidad de que exista un ilícito precedente como requisito para la configuración del delito de lavado de activos por el que se encuentran acusados sus asistidos, por lo que no es casual que la presente causa haya sido elevada a juicio inmediatamente después de la resolución en autos FCB 62000069/2008TO1, dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba.

Por otra parte, adhirió a los fundamentos esgrimidos por el Dr. Rodrigo Altamira en orden a la violación de la garantía del *non bis in ídem* y manifestó que esta causa versa sobre la misma plataforma fáctica, pruebas, personas, objeto y causa que la ventilada ante el Tribunal Oral N°2 de Córdoba en los autos supra





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

referenciados, pese a que aquí el *nomen iuris* para la misma maniobra fue la de lavados de activos de origen delictivo.

En abono a su postura, el Dr. Cabanillas manifestó que los casi 57 millones de pesos que menciona la acusación surgen de la actividad de compra y venta de cereales desplegada por los imputados que ya fuera analizada en el marco del juicio referido anteriormente, en el cual fue establecido que existió una asociación ilícita fiscal conformada por los imputados, que contó con un esquema de trabajo desplegado por las empresas reales “FG Cereales S.A.” y “Cercal S.A.”, en el cual por debajo de las mismas se encontraban un grupo de empresas denominadas “pantalla”—Algeciras S.A., Vercovir S.A., Product Tan SRL, Daniel Pelayes, Corretajes Group S.A. — que figuraban como proveedores, no obstante carecer de giro comercial por cuanto eran inexistentes y luego otras empresas —Árbol Grande S.A., EFCE S.A., Swetenson S.A., Sistemas y Control de Gestión S.A y Solfi S.A.— que eran de logística o dedicadas a la prestación de servicios de transporte, inmobiliarios o financieros, y finalmente las empresas exportadoras de granos.

Dijo también que respecto a las mencionadas empresas “pantalla”, fueron calificadas como “Apoc” por AFIP, no obstante —antes de eso— se encontraban debidamente inscriptas y con sus plantas habilitadas por el ONCCA por lo tanto en el momento en que “FG Cereales S.A.” y “Cercal S.A.”, comercializaron con ellas la operatoria estaba debidamente consignada y no necesitaban tener capacidad operativa porque su labor de intermediarias consistía en unir al acopio con el exportador, además en dicha operatoria también interviene la Bolsa de Cereales. Explicó el letrado de la defensa que normalmente cuando la empresa es Apoc no se le compra porque después se los castiga con el crédito fiscal.

Por otra parte, dijo que todo el flujo del dinero se generó comprando y vendiendo cereal por lo que la maniobra siempre fue la misma no obstante ha sido generado un desgaste jurisdiccional en orden a la tramitación del presente juicio para decir que con los mismos hechos y elementos de prueba sean juzgadas las





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

mismas personas, pero ahora por el delito de lavado de activos, tal y como fue reconocido por el propio Fiscal en su alegato.

Explicó que, a partir de la causa originaria por asociación ilícita fiscal, se derivaron siete causas más de la investigación llevada a cabo a raíz de las denuncias efectuadas por la querella y que fueron investigadas en el juzgado de instrucción de Villa María respecto de las cuales, a modo de ilustración, el letrado de la defensa nombró las causas “FG cereales - evasión”, “Farías Luis Fernando - Infracción a la ley 24769”, “Cuello Fernando y otros - evasión simple”, “Ludueña Diego Gastón - Infracción a la ley 24769, EFCE S.A - evasión simple, más la presente causa de lavado de dinero y, las de asociación ilícita, evasión y apropiación ilícita de tributos que ya fue juzgada el año pasado por el TOF N°2.

Más allá de lo referido anteriormente, el Dr. Cabanillas trajo a colación la resolución dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba en el marco del Legajo N° 30 Expte. 62000069/2008, de fecha 11 de octubre pasado, y manifestó que allí fue dispuesto el sobreseimiento a favor de los encartados Luján, Ceva, Ferrer y Guevara respecto del delito de evasión agravada y de apropiación indebida de tributos, la que se encuentra firme y respecto de la cual han solicitado le sea extendida al encartado Cuello atento a que el mismo se encuentra acusado allí como partícipe necesario. Asimismo, dijo que también han solicitado la extensión de dicho sobreseimiento respecto del delito de asociación ilícita fiscal en favor de los imputados, por lo que, en consecuencia, no existe delito precedente en orden al lavado de activos que se les achaca a sus defendidos.

Por otro lado, hizo mención que el Juez de Villa María en el marco de la mencionada causa “Ludueña”, en cumplimiento a lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones, ordenó la remisión de las actuaciones para acumulación a esta causa, poniendo fin al proceso por *non bis in ídem*. En esa resolución de abril de este año, el primer voto es del Dr. Avalos, en el que dijo que el génesis de todo esto fue generado en una causa que está englobado en la asociación ilícita y, a





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

partir de allí, hace consideraciones y dice que es muy necesario de dilucidar si las evasiones y el lavado de activos se trata de un único hecho al que se le habría dado una doble significación jurídica abiertamente incompatible, y resolvió en tal sentido haciendo mención al fallo dictado en causa “Fariña” por la Cámara Federal de Casación Penal por lo que vuelve a reiterar que este juicio no debería haberse llevado a cabo.

Agregó que todo se ve con muy poca claridad, todo está viciado, enrarecido y “agarrado de los pelos”. Criticó la manera cómo se describieron los hechos en la pieza acusatoria y alegó que ésta debe ser clara y precisa para que el Ministerio Público Fiscal pueda sostenerla, los defensores puedan conocer respecto de qué deben defenderse y el tribunal pueda resolver. Sostuvo también que existen muchas litis pendencias, muchos planteos que aún están sin resolver que se relacionan íntimamente con los presentes actuados y que esto no hace más que ratificar lo que ha venido sosteniendo en orden a que existe peligro de sentencias contradictorias.

Por otra parte, hizo manifestaciones en orden al volumen de los negocios realizados en el marco de las actividades desplegadas por los imputados y las ganancias obtenidas en consecuencia cuestionó la labor de AFIP. Dijo que, en el afán de lograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias, avasallan al contribuyente. Agregó que puntualmente en esta causa la AFIP se transformó en una denunciadora serial, pero nunca refirió a los millones que cobró y que efectivamente fueron abonados por los acusados.

Refirió también el Dr. Cabanillas que, a fs. 1679 y a fs. 1710 y siguientes de autos, fue acompañada en autos numerosa documentación referente a las empresas FG Cereales, Árbol Grande S.A., Solfi S.A y Swetenson S.A por parte de quien era el abogado defensor del imputado Cuello en aquel momento, el Dr. López Peña, y por su Contador Malpassi. Dicha prueba documental consiste en los estatutos societarios, libros accionarios y las actas de donde surgen los aportes que





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

hicieron los socios y declaraciones juradas hasta agosto de 2012. De esos libros y pruebas acompañadas ha quedado acreditado que Ludueña se acogió a la ley de blanqueo en el año 2008 y que con su socia Natalia Paulus pagaron todo lo que AFIP determinó a fin de obtener el beneficio, lo que redundó en una suma de casi nueve millones de pesos, por lo que al dólar de ese momento blanquearon más de dos millones y medio de dólares. Todo ese dinero fue aportado a sus compañías y a partir de allí está justificado el origen de los fondos y debidamente tributado.

Respecto de Solfi S.A, el Dr. Cabanillas dijo que si bien el Fiscal General sostuvo que se trataba de una empresa de transporte que no estaba autorizada a otorgar créditos, ello es un error porque surge de los estatutos que fue ampliado su objeto social para hacer operaciones financieras, lo que también surge del informe que acompañó en el marco del debate el Dr. Altamira donde dice que Solfi S.A. estaba autorizada a prestar dinero con fondos propios no tomados de terceros, y en ese marco se encontraba inscripta ante AFIP, con esa actividad societaria. Además, dijo que todos los testigos ratificaron haber tomado un crédito y la veracidad de los préstamos, algunos con confusión por haber adquirido vehículos en la concesionaria "Petitti", que es una agencia con más de 60 años de trayectoria, y en ese nivel de créditos la mayoría de quienes compraban no estaban bancarizados por ello lo hacían en Solfi S.A. Todos describieron que el imputado Oscar Rolando Martin los recibía, que Natalia Paulus autorizaba los créditos y la mecánica para el otorgamiento de los mismos, y reiteró que dicha empresa se encontraba autorizada para hacerlo por ello la acusación en tal sentido no puede sostenerse.

Agregó, asimismo, que en el año 2016 se dictó la ley 27.260 que es otra ley de blanqueo, a cuyos beneficios se acogieron la nombrada Natalia Paulus (f) y los encartados Cuello y Ludueña, y en ese marco se adhirieron consolidando una deuda que determinó la AFIP por un monto que no pudo ser cuestionado, de 17 millones de pesos con todos los beneficios de esta ley en donde se pagó el 50% de contado para ingresar y el resto en cuotas y el plan está al día por cada uno de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

estos contribuyentes, en conclusión el letrado defensor refirió que el monto de dinero establecido en la acusación no es real.

Respecto al tema del pedido fiscal de penas accesorias de multa, decomiso y de cancelación de la personería jurídica de las empresas involucradas, el Dr. Cabanillas manifestó que en el año 2018 se dictó la ley 27.401 de responsabilidad penal de la persona jurídica, en la que se equiparó la persona jurídica a la persona humana para defenderse en juicio y ejercer sus derechos atento que puede ser condenada con penas económicas. En tal sentido, expresó que las mismas no han sido imputadas en el presente juicio por lo tanto no han podido ejercer defensa alguna, por ello no corresponde el pedido de condena efectuado por la fiscalía y, en consecuencia, solicitó la nulidad absoluta en orden a dicho pedido.

Para cerrar, agregó que Natalia de los Ángeles Paulus falleció el 10.07.2021 en pleno proceso del otro juicio, por lo cual el TOF N°2 dictó su sobreseimiento total y definitivo respecto de los delitos por los que se encontraba acusada. Sin embargo, el Fiscal solicitó el decomiso de numerosos bienes a su nombre y no tuvo en cuenta tampoco que además la señora Paulus era soltera, que tenía un hijo con el imputado Cuello y que se llevó adelante la declaratoria de herederos respectiva donde fue declarado como único heredero el hijo de los nombrados y nunca se pidió la intervención del asesor de menores. Por todo ello, solicitó también la nulidad absoluta respecto del mencionado pedido respecto de Paulus.

Por otra parte, el Dr. Cabanillas manifestó que Diego Gastón Ludueña nunca fue imputado ni condenado por el delito de evasión y apropiación indebida de tributos en ningún carácter, tampoco las empresas que ha representado. Agregó que fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión en calidad de partícipe secundario del delito de asociación ilícita fiscal, y solicitó su absolución total en orden al delito que se le enrostra en los presentes actuados.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Respecto de Luis Fernando Cuello, expuso que si bien fue juzgado y condenado por el delito de asociación ilícita fiscal en carácter de jefe organizador, respecto de su imputación como partícipe del delito de evasión y apropiación de tributos ya refirió que fue solicitada la extensión del sobreseimiento dispuesto en los autos “Ludueña” supra referenciados, por lo que a su respecto tampoco existiría un delito penal precedente del lavado de activos. En consecuencia, solicitó su sobreseimiento y la nulidad de las penas accesorias.

En orden a los bienes objeto de decomiso, el propio Fiscal dijo que se trataba de aquellos adquiridos con posterioridad al año 2011 en que fue incorporado el art.303 al CP. Así, refirió el letrado de la defensa que existe un departamento en Puerto Madero que fue escriturado en el año 2012, pero que fue adquirido mucho antes a un vendedor extranjero por lo que pudo escriturarse posteriormente y que, por esa operación, Cuello pagó 144 mil dólares provenientes o con origen en fondos propios recibidos mediante herencia de su familia. Agregó que el imputado Cuello pertenece a una familia de buen pasar económico, es nieto del fundador de la firma Bunge, una de las principales exportadoras del país, por lo que no tiene por qué mentir en orden a su patrimonio y solicitó que el referido inmueble tampoco sea objeto de decomiso.

A su turno el **Dr. Leonardo Monti**, en representación de los encartados Cuello y Ludueña, dividió su alegato en dos partes. Por un lado, manifestó que existe una clara y palmaria violación a la garantía del non bis in ídem y, en segundo término, expuso que en el supuesto de que no sea de recibo la solicitud de absolución de sus defendidos por violación a dicha garantía, debe atenderse a la atipicidad de la conducta de lavado de activos enrostrada a sus defendidos.

Respecto a la violación a la garantía del non bis in ídem, hizo mención de sus características, los requisitos de triple identidad de sujeto, objeto y causa y sostuvo que esta garantía ha resultado conculcada en este debate. Así, trajo a colación el alegato de clausura del Ministerio Público Fiscal en orden al análisis de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

las conductas que le han sido atribuidas a los imputados Cuello y Ludueña y que, según indicó, se trata de las mismas por la cuales fueron ya juzgados los nombrados mediante pronunciamiento judicial de fecha 9/08/2021 del Tribunal Oral N°2 en el juicio anterior. Señaló además son conductas que nada tienen que ver con aquéllas tendientes a generar una apariencia de licitud respecto de activos que tienen un origen delictivo descriptas por el art. 303 del CP.

Asimismo, hizo alusión a lo expuesto por sus colegas, Dres. Cabanillas y Dr. Altamira, en cuanto expresaron que las conductas desplegadas por los imputados eran propias del ejercicio de intermediarios en el comercio granario, por cuanto los depósitos y retiros de dinero eran parte de una cadena de comercialización en el ejercicio de una actividad lícita y no eran maniobras de ensombrecimiento o maquillaje tendientes a generar una apariencia de licitud respecto de activos con un origen delictivo. Asimismo, sostuvo que no eran personas que tenían por finalidad el lavado de activos, y el yerro puede provenir del desconocimiento de la propia actividad de intermediación en el comercio de granos, en la que lo único necesario para trabajar es un celular para conectar a las partes y ni siquiera es preciso contar con un gran capital para hacerlo.

Asimismo, manifestó que existe una falta de cumplimiento de elementos fijativos del hecho en la pieza acusatoria respecto de las conductas que se les achacan a los imputados que les impidió dilucidar en que consistían las supuestas órdenes que daba el imputado Cuello, todo lo cual viola su defensa en juicio. No ha sido clara y específica la acusación en tal sentido.

Respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, remitió a los dichos del Dr. Cabanillas y agregó que existió una causa denominada "Mcain Argentina S.A", ventilada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en la que el Fiscal General hizo mención al art. 72 del CP y dijo que cuando el Código refiere al término persona incluye tanto a la persona de existencia física como a la de existencia ideal. Ambas pueden comparecer a juicio y deben tener el





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

mismo derecho de defensa. En tal sentido, entendió que no hay excusa para que la persona jurídica no sea citada a juicio para ejercer su defensa, lo que no ha ocurrido en autos. En función de ello, solicitó que se dejen sin efecto las medidas que oportunamente solicitó el Ministerio Público Fiscal en orden a la cancelación de personerías jurídicas, decomisos y embargos.

Asimismo, reiteró lo manifestado por el Dr. Cabanillas en orden a la solicitud de extensión de la resolución de sobreseimiento en favor de sus asistidos y dijo que la naturaleza jurídica de estas leyes de blanqueo implica sin dudas una amnistía fiscal. Se trata de un acto del Congreso, con efecto de extinción de la acción penal, borrando la criminalidad del hecho y volviendo atípico el acto. Por ello, en este caso no existe delito precedente.

De manera residual, dijo que en orden al delito de Asociación Ilícita Fiscal por el cual fueron condenados sus asistidos y atento a que los delitos tributarios que son su sustento se encuentran extintos, entiende que debe ser extendido dicho resultado a aquella figura penal. Explicó que, si bien se trata de delitos autónomos, no son independientes, y una decisión en contrario iría en contra de los principios de la lógica.

Por ello, entendió que el delito de Asociación Ilícita fiscal debe ser alcanzado por la amnistía fiscal. Caso contrario, si así no se entendiera, dijo que de ningún modo puede ser considerado como delito precedente porque no es susceptible de generar activos que puedan ser objeto de lavado de activos. En definitiva, entendió que nos encontramos frente a una atipicidad por inexistencia de delito precedente y no puede existir condena por lavado de activos sin que exista un delito precedente porque forma parte de la estructura del tipo objetivo del art. 303 del CP.

En síntesis, solicitó la anulación del proceso y la absolución de Luis Fernando Cuello y de Diego Gastón Ludueña, por violación a la garantía del non bis in ídem y de manera subsidiaria, por atipicidad de sus conductas. En ambos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

supuestos, solicitó asimismo se dejen sin efecto las sanciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal a las personas jurídicas. Hizo reserva de casación y del Caso Federal.

A su turno, el **Dr. Gustavo Taranto**, en ejercicio de la defensa de los imputados *Jorge Ricardo Ferrer* y *Sergio Luis Guevara*, formuló su alegato final exponiendo en primer lugar que los hechos investigados, tanto en el presente juicio como en el proceso ventilado ante el TOF N°2 en autos FCB 62000069/2008/TO1, tuvieron su origen en una investigación que inició en el año 2008 y fue un largo proceso en el cual los mismos tuvieron diferentes calificaciones legales como asociación ilícita fiscal, evasión, apropiación indebida de tributos y finalmente la de lavado de activos de origen delictivo, establecida en el art. 303 del CP.

Por otra parte, el letrado de la defensa solicitó la nulidad del proceso por aplicación del principio del non bis in ídem. Citó normativa aplicable (CADDHH y Pacto DCyP) y argumentó su postura diciendo que la acusación en autos establece que desde el año 2008 existió una asociación ilícita tributaria conformada por los imputados mediante la cual fueron cometidos concretamente delitos de evasión y apropiación indebida de tributos.

En tal sentido, sostuvo que en la descripción de los hechos de autos se hizo mención al ilícito penal precedente y el Fiscal General se ocupó de describir los hechos que produjeron los 57 millones de pesos referentes a las evasiones ya juzgadas en la denominada causa "Cuello I". Pero la circunstancia de haber sido tramitados dichos hechos en dos procesos distintos ha generado numerosas dificultades, reconocidas incluso por el propio Fiscal. Al respecto, dijo que existían dos alternativas: o que se realizara un proceso por todo, o una segunda opción era la de aguardar hasta que exista sentencia firme respecto de las acusaciones por asociación ilícita fiscal, evasiones y apropiación indebida de tributos para poder dar comienzo al presente juicio por lavado de activos, ya que la acusación establece





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

que el ilícito precedente sobre el cual versan los hechos resultan ser aquéllos sobre los cuales aún no existe sentencia firme.

Agregó que todo ello fue desafortunado y generó las dificultades apuntadas, pero que ello no es responsabilidad de los imputados y no pueden cargar con las consecuencias de tales decisiones. Manifestó también que sus defendidos han debido defenderse dos veces, en dos tiempos históricos distintos y en dos juicios por los mismos hechos. Ello se evidencia cuando manifestaron que no han formado parte de ninguna asociación ilícita fiscal, que no han evadido tributos y mucho menos que lavaron dinero.

En tal sentido, citó el letrado defensor tanto el art. 18 de nuestra Carta Magna como el fallo “Díaz Bessone”, en el que la presunción de inocencia tiene valor casi de presunción moral, dado que una sentencia firme es lo único que determina la culpabilidad. Agregó que probablemente la piedra angular del derecho como lo es el principio de inocencia, puede verse afectado aquí en este proceso porque desde el comienzo del presente juicio sus defendidos, Ferrer y Guevara, son inocentes y es necesario que este Tribunal declare la nulidad del proceso ante la evidente violación a la garantía del non bis in ídem.

Como segundo planteo, sostuvo que se ha violado la garantía de plazo razonable del proceso. Citó normativa y jurisprudencia e hizo referencia a que la razonabilidad del plazo se encuentra sujeta a varias cuestiones como la complejidad de la causa, pandemia, etcétera. Expuso que, en ningún caso, el ejercicio de la defensa puede ser considerado como actos de dilación y, en cualquier caso, diez años de un proceso, donde fue inhibida una empresa, luego tuvo que cerrar y despedir a sus empleados, también se clausuraron cuentas bancarias y donde el dinero que tenían en ese momento sus defendidos aún hoy lo tiene el banco, con la consiguiente destrucción comercial de las personas, no resulta razonable.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Por otra parte, el letrado defensor manifestó que en el caso existe una suerte de atipicidad sobreviniente, siendo que al momento de comenzar este proceso sus representados se acogieron a los beneficios de la ley 27.653 y solicitaron su sobreseimiento ante la cancelación del monto total determinado por AFIP, con expresa conformidad tanto del Fiscal General cuanto de la querella AFIP-DGI. Al respecto, analizó los elementos normativos del tipo establecido por el art. 303 del CP. y dijo que aquí estamos haciendo un proceso de subsunción y la acusación dice que los ilícitos penales que señala la norma en cuestión no son cualquiera, sino que son aquellos 27 hechos de evasión por los cuales sus representados resultaron sobreseídos mediante la resolución de octubre del corriente año dictada por el Tribunal Oral N° 2 en autos “*Legajo N° 30 – IMPUTADO: CUELLO, FERNANDO LUIS Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION*” Expte. 62000069/2008, el que se encuentra firme atento no haber sido objeto de recurso alguno.

Agregó asimismo que la Ley 27.653 establece un plazo excepcional para que los contribuyentes paguen sus obligaciones y acarrea como consecuencia la extinción de la acción penal, es decir que opera una suerte de amnistía fiscal con un nuevo plazo de cumplimiento. Por lo tanto, al haber pagado el total en el plazo que establece la ley, se ha extinguido la acción y se han vuelto atípicos cada uno de los hechos de la acusación anterior. Por ello, solicitó la absolución de sus defendidos.

Al respecto, en caso de que el Fiscal General o la querella al efectuar sus réplicas no tuvieran en cuenta esas circunstancias y sostuvieran la acusación en iguales términos, solicitó que afronten las costas del proceso, en caso de absolución de sus defendidos.

Por su parte y para el caso de que el Tribunal no acoja los planteos expuestos, el letrado pasó a analizar las conductas que se les achacan a sus defendidos. Expresó que la acusación menciona a Ferrer y a Guevara en dos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

tramos de movimientos bancarios, por un lado, el período comprendido entre septiembre del año 2012 y enero 2013 por Tres millones de pesos, y en otro tramo, que va desde enero 2012 y febrero de 2014. Al respecto, el letrado aclaró que los nombrados fueron liberados en noviembre de 2012 por instrucción del juzgado de Villa María, y previamente ya había sido decretada la inhibición de FG Cereales S.A y bloqueadas sus cuentas bancarias, por lo que difícilmente hayan podido existir movimientos bancarios en ese período. Reiteró que incluso quedó un saldo de dinero depositado de propiedad de los mismos, que nunca les fue devuelto.

Añadió que hay un hecho en la acusación referente a un vehículo Fiat Strada de bajo valor que compró la esposa de Guevara, respecto del cual el propio Fiscal manifestó que no iba a mantener la acusación, por lo que nada agregó sobre eso.

Refirió que este proceso presenta la dificultad de que existen cuestiones relacionadas con el movimiento de granos y de los fondos de dinero que fueron extensamente tratadas en el marco de la causa “Cuello I” y, al respecto, brindó una explicación sobre cómo se desarrolló la operación granaria. Citó testimonios rendidos en el marco de aquella causa y sobre el recorrido del dinero que se generaba en dichas operaciones. Dijo que el mismo estaba poco tiempo en las cuentas porque tenía que girar atento las propias características de dicho mercado y remarcó que sus clientes no tuvieron participación en el momento en el que la acusación señala que se produjo el delito.

Por otra parte, manifestó el Dr. Taranto que el Fiscal se equivocó al establecer el monto del perjuicio fiscal del delito en relación a los montos de las multas que solicitó. Lo concreto es que lo único probado es el monto que enuncia la acusación en orden a la actividad de la empresa financiera “Solfi S.A.” y, al respecto, dijo que si el tribunal entendiera que el origen de esos fondos no se encuentra individualizado, deberá tener presente que tampoco fueron establecidos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

los montos de las propiedades que afirma el fiscal que se compraron como parte de las maniobras del lavado.

En definitiva, sostuvo que los extremos de la acusación no fueron probados y solicitó la absolución de ambos imputados. Hizo reserva de casación y del caso federal.

El **Dr. Julio Antonio Loza**, en representación del imputado *Rubén Adolfo Ceva*, efectuó oportunamente sus conclusiones finales y manifestó, como primera medida, que este Tribunal ha perdido jurisdicción ante la duración irrazonable del proceso. Estamos ante una investigación que duró catorce años y la mentada garantía hace referencia a la extensión en el tiempo de la facultad que tiene el estado para investigar un hecho. Agregó que, al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado y ha ido clarificando sus alcances. Agregó que en este caso los únicos planteos efectuados por la defensa han sido los ordinarios, por lo que no le pueden ser achacadas las dilaciones producidas por los mismos.

Señaló que defiende a una persona que se recibió de contador hace cuarenta años, que ha ejercido la profesión independiente para adquirir su patrimonio y que, en el desenvolvimiento de su actividad profesional, se desempeñó en Río Tercero y trabajó con algunas de las empresas aquí involucradas, pero que nunca se excedió en los límites de su ejercicio.

Refirió que AFIP realizó una investigación administrativa sobre el patrimonio de su representado cuando el mismo se encontraba preso por lo que no tuvo oportunidad de defenderse. No obstante, ello concluyó en que su patrimonio no se incrementó ningún modo. Es decir, que la propia AFIP le dio una suerte de “certificado” de buena conducta en dicha investigación y señaló que las reglas de la sana crítica racional dicen que una persona en este tipo de delitos al menos debería tener una ganancia, lo cual respecto de su asistido no existió porque la propia AFIP estableció que el patrimonio del acusado Ceva es legítimo.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Por otra parte, el letrado de la defensa planteó la nulidad del proceso por violación a la garantía del non bis in ídem y citó el voto del Dr. Mahiques emitido en el fallo de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Fariña”. Al respecto manifestó que nos encontramos ante un errático derrotero judicial, ya que esta causa como el propio fiscal admitió debió tramitarse de manera conjunta con el proceso por Asociación Ilícita.

Además, refirió que AFIP no debería estar en calidad de querellante en este proceso en el que se investiga el lavado de activos, ya que el organismo legitimado para hacerlo es la UIF, la que no está ni estuvo en el presente. Sostuvo que toda la actuación de AFIP está viciada de nulidad y así lo solicitó al Tribunal.

Recordó que el Fiscal en su alegato manifestó en dos oportunidades que en el marco de este proceso *estamos aprendiendo*, por lo que pareciera que el Estado va corrigiendo los errores que se cometen en los procesos judiciales, lo que no puede ser cargado a los imputados, ni tener consecuencias para las personas que están sometidas a proceso.

Por otra parte, manifestó que esta causa es nula por indeterminación de la conducta atribuida al encartado Ceva. En tal sentido, refirió que su defendido no sabe aún de qué se lo acusa ya que la supuesta conducta ilícita que se le achaca consiste en haber asesorado en el marco de su profesión como contador, pero no se establecen las circunstancias de tiempo, lugar y personas a quienes habría asesorado, tampoco respecto de qué hechos habría versado dicho asesoramiento. Mencionó que el art. 347 del CPP establece los requisitos de la acusación en orden a la exigencia de que la misma debe ser clara, precisa y circunstanciada, todo lo cual no existe en el caso de Ceva.

Por otra parte, mencionó el Dr. Loza que, al momento de alegar, el Fiscal dijo que no se lo imaginaba a Ceva tomando decisiones por lo que, de manera sorpresiva, cambió su acusación en orden al grado de participación del nombrado, lo que consideró también como una afectación del derecho de defensa y en





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

definitiva como nulo. Citó la elaboración doctrinaria a partir de lo dispuesto por el art. 401 del CPPN, a la luz del fallo “Fermín Ramírez”, en el entendimiento de que los cambios de calificaciones legales conllevan un cambio de conducta y ello debe ser advertido tanto por el Ministerio Público Fiscal como por el tribunal al imputado.

Por otra parte, manifestó que existe una violación a la garantía del non bis in ídem, atento no existir duda de que se trata del mismo hecho que debió ser juzgado en una misma causa y que, respecto de Ceva, también se trata del mismo objeto procesal en ambos procesos.

Respecto a la adhesión por parte de los imputados a las leyes de blanqueo, refirió que la propia ley indica que se ha extinguido la acción penal respecto de esos delitos. Así, entendió que se ha perdido tipicidad en esta causa y no existe duda respecto del alcance y naturaleza jurídica de ese pago habiendo operado la extinción la acción penal por el efecto de la amnistía que generó dicho pago la que ha hecho desaparecer al delito de lavado. Ese es el efecto de una amnistía fiscal. Así las cosas, siendo el delito precedente la evasión y habiéndose extinguido, el lavado ha devenido en atípico, y no se dan las condiciones del art. 303 del CP.

Por último, de manera subsidiaria, respecto a la prueba ventilada en este proceso sobre el asesoramiento que se le imputa al contador Ceva, dijo que las únicas referencias en las conclusiones fiscales del Fiscal sobre este punto remiten a pruebas que ya han sido valoradas en el marco del proceso por asociación ilícita tramitado ante el Tribunal Oral N° 2. Aquí, se ha vuelto a decir que las pruebas que acreditan con certeza la participación de Ceva son las intervenciones telefónicas, los mails, facturas de honorarios profesionales emitidas a nombre del imputado Cuello y de FG Cereales, y también según el requerimiento de elevación a juicio existía prueba contenida de la caja n°4, la cual fue objeto de examen por esta defensa y no se encontró referencia alguna que pueda acreditar la intervención de Ceva en estas conductas de lavado que se le atribuyen.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Además, mencionó que debe quedar en claro que el contador de estas empresas era Malpassi, no Ceva. Tan es así que en la causa por Asociación Ilícita el propio Ministerio Público Fiscal pidió que se remitieran los antecedentes de Malpassi para su investigación. Surge de las propias constancias de la causa ventilada ante el Tribunal Oral N°2, que compareció el nombrado contador Malpassi junto con el Dr. López Peña y acompañaron toda la documentación de las empresas involucradas.

Agregó que el imputado Di Primio dijo además que el proceso por el cual fue convocado para ser presidente de una de las empresas estuvo a cargo del contador Tallarico, otro ausente en este proceso. Además, Di Primio relató cómo se trabajaba y dijo que era Tallarico quien armaba las sociedades para dárselas a Cuello y también el que le pagaba por sus servicios, en ningún momento aparece Ceva en todo ese circuito.

Finalmente, el letrado de la defensa manifestó que debe ser tenido en cuenta que el encartado Cuello se formó en administración de empresas por lo que no necesitaba asesoramiento alguno. A la par, hay dos contadores más que intervenían en la formación de las empresas, por lo tanto respecto a Rubén Adolfo Ceva no se ha sido acreditado aquel asesoramiento que menciona la acusación. La mayor prueba es la omisión de haber informado las operaciones sospechosas lo que en todo caso configura una falta administrativa, por todo ello solicitó su absolución.

Al ejercer su derecho de réplica, el Fiscal General **Dr. Carlos Gonella**, hizo una aclaración con respecto al pedido de decomiso sobre una gran cantidad de bienes inmuebles en relación al acusado Ortega, pedido que dejó sin efecto en razón de que ha verificado que dichos bienes pertenecen a un homónimo.

A continuación, como cuestión general, manifestó que lo ideal hubiese sido el trámite conjunto en la celebración de un debate por ambos hechos y también explicó algo que fue objeto de una interpretación singular por la defensa, que es





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

que “están aprendiendo”, que no es una mera cuestión semántica lo que hay detrás, sino que con esa frase quiso poner en evidencia lo referente a la existencia de una política criminal de persecución de los delitos económicos de lavado de activos lo que conlleva la necesidad de optar decisiones estratégicas.

Dijo también que en la investigación por el delito de lavado de activos se comienza con el sistema de prevención contenido en la Ley 25.246, con los reportes de operaciones sospechosas y la UIF que judicializa, entonces ante una hipótesis de delito de lavado tenían que ir al delito precedente y a partir de investigaciones patrimoniales se empieza a generar la imputación por lavado que es lo que ocurrió en esta causa, ya que con esta hipótesis, tienen que tomar la decisión de retrasar el trámite del proceso por el delito base para poder generar imputaciones paralelas o seguir adelante a juicio con lo que está consolidado procesalmente y remitir la imputación por lavado, son decisiones estratégicas que quien investiga un delito tiene que tomar. En ese sentido, el Fiscal expresó que lo ideal hubiese sido tener el delito precedente y el delito de lavado de activos en el mismo proceso, pero no se pudo por una cuestión estratégica.

Seguidamente, procedió a responder una a una las cuestiones que, según su criterio, merecían réplica. Así, en primer lugar, dijo que prácticamente todos los defensores han mencionado la cuestión en torno a la violación del principio del ne bis in ídem, defensa que no debe ser acogida y rechazarse. En tal sentido, mencionó que los letrados han argumentado su pedido manifestando que el requerimiento de elevación a juicio de esta causa menciona o contiene partes del requerimiento de la causa “Cuello I” y también de la sentencia de dicha causa. Asimismo, han expresado que ésta es la misma maniobra que ya fue juzgada, por lo tanto, se los juzga aquí por el mismo hecho en dos procesos con calificaciones jurídicas distintas. No obstante, en el presente caso no se da la triple identidad porque si bien tenemos las mismas personas, los hechos y las calificaciones jurídicas son distintas, por lo cual tenemos objetos y causas diferentes.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En tal sentido, refirió que en los juicios por lavado de activos se describe la maniobra del delito precedente porque es una exigencia típica de la figura delictiva del art. 303 del CP cuando refiere a que es proveniente de un ilícito penal. Entonces, la base fáctica de una acusación por lavado de activos tiene que remitir al delito precedente, si no constara descripta sería atípico.

Así, el Dr. Gonella manifestó que no iba a volver a referirse a la descripción de los hechos porque era una cuestión muy clara y agregó que en la causa ante el TOF N°2 se juzgó la existencia de una asociación ilícita y de hechos particulares de fraude fiscal, es decir, una estructura armada con la finalidad de facilitar la evasión de tributos nacionales. Acá, en cambio, se trata de las tres etapas por las que los activos generados por aquella asociación ilícita ingresaron al mercado. Agregó que la división en las tres etapas mencionadas en el requerimiento refiere a cuestiones metodológicas para describir los hechos y elaborar la prueba, como son la colocación de los activos, la estratificación de estos y la integración. Calificó en tal sentido como impecable desde el punto de vista técnico y metodológico la plataforma fáctica establecida en la acusación y reiteró que no existe violación al principio de *ne bis in ídem*. No hay triple identidad y dijo que esa defensa debe ser descartada.

En segundo lugar, manifestó que la atipicidad fue planteada por todos los defensores con distintos alcances, mientras que los Dres. Altamira y Monti se basaron en una posición común. El Dr. Altamira dijo que los movimientos bancarios están descriptos en los hechos no tenían por objeto disimular el origen del dinero producto de las evasiones, sino que constituían el último eslabón de la cadena diseñada por los líderes de la asociación para hacerse del dinero oculto y a su vez, era el margen de ganancia que quedaba por la actividad ilegal.

Al respecto, el Fiscal dijo que es interesante esta cuestión porque es una especie de superposición en este tema. La última etapa de la maniobra de asociación ilícita es la primera etapa del lavado de activos, la colocación del dinero





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

en el sistema financiero, pero hay que fijarse que la última etapa que describe el Dr. Altamira no es una exigencia típica del delito de asociación ilícita. En todo caso, forma parte de lo que es el agotamiento del delito pero es una circunstancia extra típica y no es constitutiva de la asociación ilícita, tratándose al mismo tiempo de la primera etapa de lavado de activos. Por lo tanto, no hay una superposición típica, no hay identidad de causa y tampoco hay atipicidad.

Por otra parte, en relación con el planteo efectuado por los Dres. Cabanillas y Vezzaro, retomado por el Dr. Monti al solicitar la extensión del sobreseimiento por evasión, apropiación indebida por acogimiento al blanqueo de los autores y sobreseimiento por inexistencia de la asociación ilícita al haberse extinguido la agravación, dijeron que, si no hay delito precedente, tampoco hay lavado. A su vez, los Dres. Taranto y Loza en la oportunidad de efectuar sus alegatos, hicieron consideraciones similares, y refirió que la exposición sobre este punto ya había sido esgrimida por la Fiscalía en esta causa respecto al alcance de la asociación ilícita en la norma 27.653 tema que ya fue zanjado por el Tribunal Oral que juzgó en la llamada causa "Cuello I", de manera tal que es una cuestión dirimida. Lo que tenemos que discutir ahora es si el lavado está o no alcanzado por esta norma, y claramente no.

Los problemas del mal llamado blanqueo, en orden a la exteriorización de divisas voluntarias, de tenencias, es que son legislaciones que surgen como una necesidad de política económica de los gobiernos para mitigar el gran problema de la evasión fiscal, en razón de ello es que se dictan las amnistías pero sólo y exclusivamente en relación a la hipótesis de fraude fiscal, no así con respecto a otros delitos y está bien que así sea sino se generarían problemas de impunidad graves, de manera tal que entonces está claro que el delito de lavado de activos no se encuentra alcanzado por esa locución de delitos vinculados y la asociación ilícita tampoco, en este sentido la jurisprudencia está consolidada y el propio Tribunal Oral N°2 que juzgó la causa de "Cuello I" lo ha resuelto en ese sentido.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Con respecto a la consideración efectuada por los Dres. Taranto y Monti, en tanto que el delito tributario o la asociación ilícita fiscal no pueden ser delito precedente de lavado, son posiciones u opiniones. Lo cierto es que la jurisprudencia unánimemente considera al delito tributario como precedente del lavado, esa es la tesis de la Fiscalía y la posición opuesta en la que se enrola el Dr. Taranto es minoritaria de la doctrina. Expresó el Fiscal que no iba a discutir cuestiones que tienen que ver con los modelos legislativos del lavado, hay países que tienen un número clausus de delitos que pueden ser precedentes lavado, en algunos dentro de ese catálogo no está el fraude tributario fiscal, en nuestro país sí. Siguiendo una recomendación de la GAFI que considera a partir del año 2012 que el fraude fiscal es delito precedente de lavado a partir de la incidencia negativa que tiene para las economías y el sistema financiero fiscal, el delito de fraude fiscal, los paraísos fiscales, todos los esfuerzos de los acuerdos de cooperación y de intercambio de información, hay una línea global que sugiere esto y por eso es que Argentina se enrola en este modelo de número apertus. Así, para nuestro país cualquier delito puede ser precedente y existen sentencias en nuestro país que lo indican en ese sentido.

En cuarto lugar, se invoca la cuestión del plazo razonable y se mencionaron los catorce años que duró este proceso, lo que en realidad no es así ya que en el año 2013 se comenzó la investigación por lavado de activos, como consecuencia del análisis de la documentación secuestrada en el domicilio de Cuello. No hay afectación a esta garantía, el procesamiento, la elevación a juicio en el 2021, el hecho de que se trate de una causa compleja, con muchas partes, donde hay mucha documentación que relevar, no hay desidia judicial, ni baches que puedan verse en el trámite de esta causa que es uno de los aspectos esenciales que según la jurisprudencia de la Corte se tiene en cuenta para ver si hay una afectación a la garantía del plazo razonable, por lo cual este planteo debe ser descartado.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Asimismo, en referencia al planteo del Dr. Loza, sobre la nulidad de la intervención de AFIP, sin perjuicio de que le corresponda a ésta responder y argumentar, para el Fiscal General goza de legitimidad para estar en este proceso por el delito precedente.

Respecto a la nulidad en el requerimiento por indeterminación de la conducta atribuida al imputado Ceva, dijo que no hay agravio al respecto ni afectación al derecho de defensa. El requerimiento de instrucción claramente atribuye al imputado nombrado el participar de la maniobra como asesor contable e impositivo del grupo, su participación está definida en los hechos como también en la prueba y en los fundamentos del requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, ello debe interpretarse en un sentido integral. En dicho requerimiento se establecieron los fundamentos y en el juicio oral ha quedado claro a partir de las escuchas, la documentación y del intercambio de mails cual fue su aporte, y de hecho Ceva se defendió con base en que se mantuvo dentro del límite del ejercicio profesional de contador, entonces si la imputación hace referencia a que como contador asesoró a este grupo en maniobras delictivas y él se defiende diciendo que no se extralimitó dentro de las normas de su profesión, claramente esto nos indica que entendió de qué se trató la imputación y pudo ejercer de manera amplísima su defensa que es lo único que se tiene que ponderar, si una persona no se puede defender porque no sabe que se le atribuye sería grave, pero no es lo que sucedió en este caso y por eso esta nulidad de la defensa debe ser rechazada.

En orden al planteo de nulidad por cambio de calificación legal en la intervención del imputado Ceva, dijo que en el requerimiento se le atribuye la coautoría y la Fiscalía en sus conclusiones finales le imputó el rol de cooperador necesario. Sostuvo que no está de acuerdo con el tipo de participación que se le atribuye en el requerimiento porque tal como se encuentran descriptos los hechos es el típico aporte de un corte necesario, el asesoramiento es un típico aporte de cómplice, entonces no hay ninguna modificación fáctica y el cambio en el tipo de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

atribución, de participación, no tiene consecuencias jurídicas más gravosas, resultando más acorde a los hechos tal y como están descriptos, por lo tanto este planteo de nulidad también debe ser descartado.

Luego, respecto a la solicitud efectuada por los Dres. Cabanillas y Monti en orden a que no se aplicara la sanción que pide la Fiscalía en contra de las personas jurídicas porque no fueron imputadas y en consecuencia no ejercieron el derecho de defensa, dijo que en realidad aquí se aplica el art. 304 del Código Penal, en cuanto establece que cuando los hechos delictivos previstos en el artículo precedente (se refiere al lavado) hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad sanciones conjuntas o alternativamente, con lo que se está haciendo referencia a un aspecto instrumental de la maniobra, cuando la persona física acusada utiliza una persona jurídica se aplican estas sanciones en contra de ella, pero acá no estamos hablando de una imputación en contra de la persona jurídica y por ello que no hay que citarla, sino que es una consecuencia jurídica prevista en la ley cuando la persona física utiliza la persona jurídica para consumar sus maniobras, de manera tal que ratifica las sanciones que solicitó la Fiscalía en contra de estas.

Por otra parte, en orden a lo solicitado por el Dr. Cabanillas respecto de los bienes de Natalia Paulus, que son objeto de la sucesión y en la que hay un hijo declarado heredero, dijo que si en el art. 305 se autoriza el decomiso anticipado antes de la sentencia condenatoria, tanto más lo puede hacer el Tribunal al dictar sentencia cuando se concluye el proceso y se encuentre acreditado mínimamente la existencia de una maniobra de lavado de activos aunque se dé la hipótesis de muerte de la persona, por lo que no habría ningún impedimento ni lógico ni jurídico para que se declare el decomiso sobre esos bienes.

Finalmente, refirió que en los actuados de ninguna manera han existido circunstancias poco claras o enrarecidas como manifestara en su alegato el Dr.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Cabanillas. Entiende que dichas manifestaciones son recursos que tiene el defensor para ilustrar la crítica sobre por qué este proceso, junto con el otro no se llevó a cabo de manera ideal, pero no corresponde debatir sobre eso con lo que dio por concluidas sus réplicas.

A su turno, el **Dr. Claudio Ronchi**, representante de la querella, manifestó que es cierto que hoy debería estar es este proceso la UIF como representante del bien jurídicamente protegido del delito de lavado de activos, a su vez, no menos cierto es la correlación que existe entre este delito autónomo, a partir de la creación del Título XIII del Código Penal con los delitos precedentes los que si son patrimonio de su institución como ente recaudador. Asimismo, indicó que existe una comunidad probatoria tanto de los delitos precedentes cuanto del delito que hoy se juzga en este Tribunal y, esa comunidad probatoria ha quedado evidenciada a través del paso de las audiencias y ha sido lo que ha motivado que la querella estuviese presente, como también el parentesco que existe entre el bien jurídicamente protegido del lavado de activos y la hacienda pública, delitos que protegen el orden socioeconómico general.

El Dr. Ronchi, aprovechó esta instancia para expresar que es cierto que los imputados han extinguido la acción penal respecto de varios de los delitos precedentes como son la evasión y la retención indebida de tributos, pero invitó a este Tribunal a remitirse a la ley que origina los planes de pago y que le da las facultades de extinción de la acción penal no borrando la ilicitud del tributo. Lo que se ha hecho es extinguir la acción penal simplemente con el pago tanto de las retenciones no ingresadas cuanto de la evasión.

Asimismo, las defensas formularon sus **dúPLICAS**.

Así, el **Dr. Julio Antonio Loza** dijo que el Fiscal General hábilmente se había metido en el fondo de la cuestión cuando habló de tipicidad, en razón de que volvió a referirse a cuestiones que son de fondo y que no tienen relación con ningún planteo. Respecto de la exposición y del planteo de nulidad de la intervención de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

AFIP como querellante particular, la réplica efectuada por el representante de dicho organismo, no hace más que ratificar que no tiene legitimación tras reconocer que la era la UIF la que tenía que estar. Además, cuando se habló de un delito autónomo, quedó claro que no pueden ser querellantes en esta causa. No se trata de una cuestión de parentesco jurídico, sino de legitimación basada en la ley y en función de los delitos que se investigan.

El abogado defensor, sobre la extinción de la acción penal de los delitos de evasión, sostuvo que basta referir lo que dice la ley, la elaboración doctrinaria y jurisprudencial y sostuvo que no se trata de una extinción lisa y llana, sino de una amnistía fiscal con todos los requisitos que esta significa, lo dice la doctrina emanada del análisis de la ley y el voto de la minoría en la resolución dictada ante el Tribunal Oral Federal N°2, al pronunciarse sobre este tema explícitamente, se trata de una amnistía fiscal que hace desaparecer el delito.

Seguidamente, el **Dr. Felipe Otero Berger**, Defensor Público Coadyuvante, en representación de los imputados Vega, Di Primio y Ortega, adhirió a lo planteado por el fiscal general respecto al decomiso de bienes solicitado en sus alegatos, y solicitó expresamente que se deje sin efecto el decomiso sobre su asistido Miguel Ángel Ortega.

Por último, el **Dr. Gustavo Taranto** explicó que, si bien lo que tenía que decir la defensa ya lo había hecho, el espíritu del debate es que la defensa tenga la última palabra por eso esta suerte de dúplica.

A continuación, pasó a responder al Fiscal General tras haber hecho mención a la llamada “Ley de blanqueo”. Manifiesta el abogado defensor que, el Dr. Gonella puso en discusión en realidad la posibilidad de que el ilícito penal precedente, que señala el art. 303 CP sea cualquier delito y no necesariamente éste. Si bien manifestó que ya lo había dicho antes, lo volvió a rectificar, que es una discusión en abstracto, correcta y que puede ser cierta, pero no es el caso de este debate, el Fiscal debe reconocer que en la pieza acusatoria no habla de cualquier





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

delito, sino de los veintisiete delitos de evasión y apropiación y que el dinero que se lavó, fueron esos cincuenta y siete millones de pesos y no de otra cosa por lo que, en este caso, es dirimente el sobreseimiento sobre esos hechos.

A su vez, remarcó que no habla la acusación de la que se vinieron a defender, ni siquiera de la asociación ilícita, habla de esos delitos que no están probados y que sus clientes son aún inocentes, por lo que necesariamente el Tribunal deberá resolver teniendo en cuenta este aspecto exclusivamente. Señaló que haber entendido bien la posición de la querella, porque lo que dice supone una discusión sobre la naturaleza jurídica, dice que extingue la acción penal pero no la ilicitud del delito, pero si extingue la acción penal, no va a haber proceso, ni declaración de culpabilidad. El Dr. Taranto expresó que no se basó en la discusión sobre la naturaleza jurídica solamente y exclusivamente sobre lo que decía la ley. Expresó que adhiere al voto de la minoría. Explicó que el origen de los delitos tributarios es de naturaleza administrativa, la acusación anterior fijaba el hecho por el incumplimiento de pago después de los treinta días de vencido el plazo y lo que ha hecho esta ley es fijar un nuevo plazo, se pagó, se extinguió y, en consecuencia, se convirtieron atípicas aquellas conductas, no hay responsabilidad.

VI. En ocasión de escuchar la última palabra, previo al dictado de sentencia, los imputados no hicieron uso de dicho derecho, a excepción de Rubén Adolfo Ceva, quien manifestó su interés de reiterar al Tribunal que —a lo largo del juicio— no ha sabido de qué se lo acusa y, por ello, solo pudo alegar que no cometió ningún acto de lavado de dinero, ni asesoró a alguien para que pueda realizarlo.

VII. Sintetizada la estrategia defensiva de los acusados, enumerada la prueba colectada y resumidas las conclusiones de las partes, conforme el orden de votos establecidos, el Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: **PRIMERA:** ¿Qué razones avalan la decisión adoptada por el Tribunal durante el desarrollo de la audiencia de debate de rechazar la petición del Dr. Gustavo





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Taranto —al que adhirieron los Dres. José Ignacio Cabanillas y Julio Antonio Loza — de anulación y exclusión probatoria de las constancias obrantes a fs. 704 (correspondientes a conversaciones, primera intervención) y a fs. 707 (correspondientes a conversaciones, segunda intervención) de expediente “Cuello Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación ilícita, etcétera” (FCB 62000069/2008)?

SEGUNDA: ¿Es procedente el planteo de nulidad de la intervención de la querella particular AFIP-DGI en la causa, formulado por la defensa a cargo del Dr. Julio Antonio Loza?

TERCERA: ¿Es procedente el planteo de insubsistencia de la acción penal por violación de la garantía de juzgamiento plazo razonable efectuado por las defensas a cargo de los Dres. Gustavo Taranto y Julio Antonio Loza?

CUARTA: ¿Es procedente el pedido de absolución fiscal y de la querella particular AFIP-DGI de los imputados Rolando Oscar Martín, Horacio Omar Cismondi, Walter Fabián Cabrera y Rafael Gustavo Vega?

QUINTA: ¿Es procedente la nulidad del proceso por violación de la garantía de prohibición de doble enjuiciamiento —*ne bis in ídem*— formulado por las defensas a cargo de los Dres. Rodrigo Altamira (Defensor Público Oficial), José Ignacio Cabanillas, Gustavo Taranto y Julio Antonio Loza?

SEXTA: ¿Es procedente la nulidad de la acusación por indeterminación de la conducta atribuida al imputado Rubén Adolfo Ceva, deducida por el Dr. Julio Antonio Loza?

SÉPTIMA: ¿Se encuentra acreditada la existencia de los hechos investigados y la participación criminal de los imputados en su comisión?

OCTAVA: En su caso, ¿Qué calificación legal y grado de participación criminal les corresponde?;

NOVENA: En su caso ¿Cuál es la sanción a aplicar y procede la imposición de costas?

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZA DE CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:

De acuerdo a la relación de causa, en instancia de incorporación de las pruebas al debate, el **Dr. Gustavo Taranto** planteó la nulidad de las constancias obrantes a fs. 704 —correspondientes a conversaciones, primera intervención— y a





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

fs. 707 —referidas a conversaciones, segunda intervención— de autos “Cuello Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación ilícita, etc.” (Expte. FCB 62000069/2008) y se opuso a su incorporación al debate.

La petición contó con la adhesión de los **Dres. José Ignacio Cabanillas y Julio Antonio Loza** y con dictamen negativo del Ministerio Público Fiscal y la querrela AFIP-DGI.

La consideración de las posiciones adoptadas por las partes en la audiencia de debate condujo al Tribunal a optar por el rechazo del planteo articulado. Y dado que la comunicación de los fundamentos de dicha decisión fue diferida para ocasión de la sentencia, corresponde —en la presente cuestión— explicitar las razones que dieron sustento al temperamento del Tribunal.

A ese objeto, se impone primeramente consignar que la petición de las defensas fue motivo ya de análisis en el marco del proceso “Cuello Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita fiscal” (Expte. FCB 62000069/2008) y obtuvo resultado adverso en sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba: No obstante, dadas las garantías constitucionales en juego y por arecer de firmeza dicho decisorio, su tratamiento y decisión en autos no puede ser obviado.

Con esa aclaración, el origen de las constancias de fs. 704/706 y 707/721 que se cuestionan debe situarse en el marco del sumario que investigaba conductas reñidas con la Ley 24769, en cuyo marco el Juez Federal de Villa María Dr. Mario Garzón dictó auto interlocutorio N° 19/2011 de fecha 4 de agosto de 2011, por el que dispuso la intervención de las comunicaciones de las líneas telefónicas N° (03571) 423457, N° (03571) 15690534 y N° (03571) 15608030 (fs. 615/616).

Con fecha 19 de octubre de 2011, fue recibida en secretaría de la Fiscalía Federal de Villa María nota del Jefe de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Córdoba” de Gendarmería Nacional, con elevación de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

los CDs de los abonados intervenidos junto al CD que contenía las transcripciones efectuadas e informe producido por personal de esa Unidad Especial (fs. 638/641).

El 20 de octubre de 2011, el Fiscal Federal ordenó la remisión de las transcripciones de las escuchas en CD y las cintas correspondientes a la DGI Río Cuarto, a los fines del análisis e interpretación de todo el material, en razón de la especialización requerida al objeto (fs. 642).

Mediante nota reservada 145/12 (DV IRCU), de fecha 16/04/2012, el Contador Público Sergio Aníbal Flores efectuó análisis de los datos colectados de los abonados N° (03571) 423457, N° (03571) 15690534 y N° (03571) 15608030 y citó distintas expresiones que abonan las conclusiones expuestas y, dado su contenido y a efectos de proseguir con la investigación, se solicitó la intervención de los teléfonos que utilizaría el Contador Rubén Adolfo Ceva (fs. 648/653).

Con fecha 25 de abril de 2012, a petición de la Fiscalía Federal, el Juez Federal dictó auto interlocutorio N° 14/2012, por el que ordenó la intervención de las comunicaciones de las líneas telefónicas N° (03571) 423457, N° (03571) 15690534, N° (03571) 422785 y N° (03571) 15540206 (fs. 659/660).

Por su parte, a fs. 669/681, obra presentación de AFIP-DGI por la que se puso en conocimiento del Juez Federal las tareas de investigación llevadas a cabo por la Dirección Regional Río Cuarto de dicho organismo y, en ese marco, adjuntaron cuerpo de pruebas en 84 fojas, con la documental indicada. Así, obra incorporada nota de fecha 16/08/2012, elevada por el Contador Público Sergio Aníbal Flores, con el análisis y conclusiones finales emitidas (fs. 694/777). En dicho informe, se dejó constancia de que en cuerpo separado se transcribían las principales conversaciones de interés, obrantes a fs. 704 a 721.

Pues bien, las desgrabaciones que cuestiona la defensa se encuentran transcriptas tanto en la nota reservada 145/12 (DV IRCU) —que sirvió de base para el dictado del segundo auto interlocutorio de intervención telefónica (fs. 659/660)—, como en la nota de fecha 16/08/2012 (fs.694/777), ambas confeccionadas por el





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Contador Público Sergio Aníbal Flores, Jefe (Int.) de la División Investigación de la Dirección Regional de Río Cuarto.

Según se observa, tales constancias son transcripciones realizadas por personal de una fuerza de seguridad (Gendarmería Nacional), designado por el Juzgado Federal interviniente, y valoradas en los informes elaborados por personal especializado de AFIP.

En función de ello, y en consonancia con las consideraciones vertidas por el Tribunal en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba, las constancias de fs. 704/706 y 707/721 no pueden ser equiparadas a actas, en los términos previstos por el art. 138 del CPPN y, por tanto, la inobservancia de las prescripciones del artículo 139 del Código de rito no puede acarrear sanción de nulidad.

Por su parte, la legitimidad de las medidas ordenadas por el magistrado actuante no fue objeto de cuestionamiento por las partes. Las intervenciones telefónicas fueron dispuestas por juez competente, cuyos fundamentos y formalidades cumplen los requisitos de los arts. 236 y 123 CPPN, por lo que el contenido de dichas desgrabaciones será objeto de valoración en conjunto con el resto de la prueba incorporada al proceso, según las reglas de la sana crítica racional.

Sumado a ello, las cintas originales que respaldan las conversaciones obrantes a fs. 707/721 fueron elevadas por el Juzgado Federal al Tribunal Oral N°2 de Córdoba, se encuentran reservadas en secretaría y estuvieron a entera disposición de las partes, lo que habilitó —desde el inicio— el control de la exactitud de su contenido por parte de las defensas.

Con relación a las cintas que respaldan las conversaciones referidas a fs. 704/706 (CD 1 a 30), el Tribunal Oral N° 2 de Córdoba determinó que no fueron remitidas por el Juzgado Federal, al elevarse la causa a juicio. Sin embargo, obra registro de su existencia, en tanto fueron remitidas por Gendarmería Nacional a la Fiscalía Federal de Villa María (fs. 638), recibidas en secretaría y posteriormente





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

remitidas a AFIP, Dirección Regional de Río Cuarto, para su análisis (fs.643/643vta.).

Por su parte, el resto de conversaciones fueron conservadas y preservadas en forma debida por AFIP y luego remitidas al Juzgado Federal (fs. 1076).

En definitiva, es claro que los informes realizados por un funcionario del organismo público a partir de la consideración de los elementos probatorios ahora faltantes, fueron remitidos en forma debida al Juzgado Federal.

Por las razones expuestas, no se advierte violación a las garantías de constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, lo que —de plano— justifica el rechazo de la petición de nulidad y exclusión probatoria de las constancias de desgrabaciones telefónicas obrantes a fs. 704 y fs. 707 de autos “Cuello Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación ilícita fiscal, etcétera” (Expte. FCB 62000069/2008/TO1) formulada por la defensa.

Sin perjuicio de ello, no puede soslayarse la mención de la gravedad del hecho de la ausencia de los CD N° 1 a N° 30, en tanto supone la desaparición de material probatorio que se hallaba en custodia y depósito de un organismo público (AFIP), lo que justifica enfatizar en la imperiosa necesidad de su investigación y esclarecimiento. Dejo así explicitados los fundamentos que abonaron el rechazo al planteo defensivo y, por ende, contestada la presente cuestión.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se pronuncia de igual modo.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia de igual modo.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZA DE CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:

I.- Corresponde analizar, en segundo término, el planteo de nulidad de la intervención la querella particular AFIP-DGI en la causa, formulado por el abogado defensor **Dr. Julio Antonio Loza**, conforme a los fundamentos y conclusiones vertidas al momento de emitir sus alegatos finales.

Así, tras calificar el trámite de esta causa como un “*errático derrotero judicial*” —a propósito de una cita del Dr. Carlos A. Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en autos “*Fariña*”—, el letrado cuestionó la intervención de AFIP-DGI como querellante en este proceso y alegó que el organismo carece de facultad para ser parte en esta causa, en la que se investiga la comisión de un delito de lavado de activos. En este marco, sostuvo que AFIP-DGI debió ser excluida de oficio por el Tribunal.

Argumentó que AFIP solo pudo actuar en el primer proceso —cuyo objeto fue la investigación y el juzgamiento de delitos asociación ilícita fiscal y evasión tributaria—, de acuerdo con la facultad y legitimación que le concede el artículo 23 de la Ley 24.769, pero de ninguna manera estaba legitimada para ser parte en el proceso de autos. A ese objeto, señaló que el organismo estatal que en todo caso debió intervenir en la presente causa es la Unidad de Información Financiera (UIF) según lo previsto en el Decreto N° 2226/2008 del Poder Ejecutivo Nacional.

Conforme lo expuesto por la defensa, pese a las facultades legalmente acordadas, UIF estuvo ausente en el desarrollo del proceso, razón por la cual concluyó que la actuación e intervención de AFIP-DGI en autos se halla viciada de nulidad y solicitó al Tribunal que así lo declare en sentencia.

II.- En ejercicio de la facultad de réplica, el Fiscal General **Dr. Carlos Gonella** expresó que, si bien —de manera estricta— atañe a la querella responder y argumentar sobre este punto, en su opinión AFIP-DGI goza de legitimidad para





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

actuar en el proceso, en calidad de querellante por el delito precedente del que aquí se juzga.

A su turno, el **Dr. Claudio Ronchi**, en representación de la querella AFIP-DGI, exteriorizó su oposición al planteo formulado por la defensa. En abono de su rechazo, el letrado expuso que, más allá de reconocer que en este proceso debió estar presente la UIF, como representante del bien jurídicamente protegido del delito de lavado de activos investigado y juzgado, la intervención de AFIP-DGI halla justificación en la correlación existente entre el delito autónomo que se juzga, a partir de la creación del Título XIII del Código Penal, y los delitos precedentes; en tanto éstos conforman patrimonio de la institución que representa como ente recaudador.

A la par, sostuvo que se asiste a una situación de comunidad probatoria entre los delitos precedentes y el delito juzgado por este Tribunal. En términos de la querella, dicha comunidad probatoria quedó evidenciada en el curso de las audiencias y ello pone de manifiesto, un poco, el motivo de su presencia en este juicio.

Por último, señaló que existe una conexión, “un parentesco”, entre el bien jurídicamente protegido por el delito de lavado de activos y la hacienda pública, en tanto ambos delitos protegen el orden socioeconómico general.

III.- A la luz de las posiciones asumidas por las partes, corresponde establecer si AFIP-DGI goza de legitimación para intervenir en la presente causa en su rol de querellante particular y si su participación afectó de manera directa principios constitucionales, en tanto —según es sabido— la naturaleza, origen y legitimación de actuación de cada uno de los intervinientes del proceso tiene incidencia en la garantía del debido proceso.

En forma liminar, es preciso consignar que el planteo de la defensa procura transitar el carril de las nulidades de orden general, reguladas en la norma del artículo 167 del Código Procesal Penal de la Nación, por la alegación de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

inobservancia de las disposiciones concernientes a la intervención del Juez, Ministerio Fiscal y querellante en el proceso (inciso 2°).

Ciertamente que, al establecer tales supuestos, la finalidad del legislador ha sido atender a una correcta conformación e intervención de los principales sujetos del proceso penal, aunque con el límite de su trascendencia en orden a una válida resolución sobre las cuestiones de fondo que atañen al proceso (TORRES, Sergio Gabriel; *Nulidades del proceso penal*, 5° edición, Ed. Ad Hoc, 2009, p.182). El examen que se impone respecto de la actuación de AFIP-DGI se ceñirá, pues, a los límites dados por ese marco estricto.

En concreto, el artículo 82 del CPPN regula la calidad que debe reunir el acusador para obtener legitimación activa y establece a ese efecto que la solicitud de investirse de tal carácter debe provenir de la persona *“particularmente ofendida por un delito de acción pública”*.

Al objeto del análisis, conviene recordar que el presente legajo constituye un desdoblamiento de la causa principal, o “madre”, caratulada “CUELLO, Luis Fernando y otros s/ Asociación ilícita fiscal, etcétera” (Expte. 62000069/2008), en la que se investigó y, al cabo, juzgó el accionar de un grupo de personas acusadas de haber integrado una asociación ilícita fiscal, destinada a la creación de sociedades comerciales carentes de actividad económica real y asentadas meramente en sus actos constitutivos, o con registros de actividades inexistentes, sin capacidad para ejecutar la actividad económica declarada y utilizadas —en definitiva— como medio para generar facturas falsas, a partir de las cuales se habría logrado la comisión de delitos de evasión y apropiación indebida de tributos.

Por su parte, el proceso de autos tiene por objeto el juzgamiento de ese mismo grupo de personas, a quienes se acusa de poner en circulación en el mercado formal, a través de maniobras diversas, el dinero proveniente de las actividades ilícitas tributarias antes dichas, esto es, un obrar de lavado de dinero agravado, en los términos del artículo 303, apartado a), del CP.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

El contenido y alcance del bien jurídico tutelado por el citado delito de lavado de activos ha merecido particular tratamiento y variadas interpretaciones por parte de la doctrina autorizada. Sin ánimo de ahondar aquí en dicho debate, valga una mención a la postulación de que se está en presencia de un delito pluri o multi-ofensivo, que procura la defensa de diversos bienes jurídicos, lo que abarca el propio y el del ilícito previo. En la línea de una noción amplia, comprensiva —en definitiva— de multiplicidad de bienes jurídicos, se ha desatacado: *“el bien del delito precedente, la administración de justicia, los dos anteriores, el orden económico y financiero, pero también el orden público, la seguridad interior (porque se trata en última instancia de estrategias para la prevención y represión de la criminalidad organizada) y la función preventiva de la pena prevista para los delitos graves previos de los que proceden los bienes cuyo origen ilícito se pretende ocultar”* (CÓRDOBA, Fernando; *Delito de lavado de dinero*, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pp. 22-23 —con cita de varios autores—; en igual sentido, BALCARCE, Fabián; *Lecciones de Derecho Penal – Parte Especial*, Ed. Ipso, Córdoba, 2016, p. 730)

Con ello en vistas, es fácil advertir —sin mayores reparos— que AFIP-DGI, como órgano estatal recaudador, era el particular ofendido de los delitos tributarios investigados y juzgados en la causa principal. Al escindir la instrucción de la presente causa en relación con hechos de lavado de dinero, su indagación tramitó en un legajo independiente, con los alcances y los límites propios del nuevo delito motivo de persecución.

A juicio de la suscripta, la consideración de la intervención de la AFIP-DGI como querellante en este proceso no puede prescindir del dato de dicho derrotero procesal, en tanto —según lo enunciado— la conformación de las presentes actuaciones halla razón en el impulso o devenir de la anterior, la causa principal “Cuello Luis Fernando y Otros s/ Asociación ilícita fiscal, etcétera” (Expte. FCB





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

62000069/2008), en la que se investigaron y juzgaron a los mismos imputados por delitos estrictamente tributarios.

De acuerdo con ello, es claro que el único interés jurídico que atañe a AFIP-DGI en el proceso halla razón en los ilícitos precedentes del lavado de activos (en concreto, los de asociación ilícita fiscal, evasión y apropiación indebida de tributos que le fueron achacados en el expediente anterior). Allí, el límite y justificación de su intervención como querellante particular en la presente causa, en sintonía con las prescripciones que derivan de los artículos 82 y concordantes del CPPN y 23 de la ley 24.769.

En este punto, no ignoro ni soslayo la discusión que ha merecido en doctrina y jurisprudencia la cuestión de la factibilidad de que el delito de evasión pueda ser ilícito previo en la comisión del delito de lavado de activos; ni tampoco el extremo de la adhesión de alguno de los imputados al Régimen de alivio fiscal para el sostenimiento económico, establecido por Ley 27.653, por su indudable incidencia en la definición de la cuestión de fondo que atañe al presente proceso.

Es que, en rigor de verdad, el delito juzgado en el marco de este expediente —lavado de activos— ameritaba la actuación de un ente diverso: la Unidad de Información Financiera, como órgano autárquico del Estado, con facultades propias y específicas para intervenir en calidad de querellante. Nótese que, como bien señala el nulidicente, mediante Decreto N° 2226/2008, el Poder Ejecutivo Nacional autorizó la intervención de la UIF como parte querellante en procesos penales en los que se investiga la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246, en la medida de su gravedad.

En sintonía con ello, una revisión de las constancias de autos da cuenta de que, previo a desdoblar los procesos, el Juez Federal dispuso justamente dar intervención a la citada Unidad de Información Financiera (UIF) en el proceso “Cuello Luis Fernando y Otros s/ Asociación ilícita fiscal, etcétera” (Expte. FCB 62000069/2008), a fin de promover su auxilio en el curso de la instrucción. Sin





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

embargo, dicho organismo no se presentó a ese objeto en el marco de las actuaciones, quizás —no es posible aventurar una hipótesis— por falta de noticia sobre la conformación de un legajo diverso, tendiente al esclarecimiento de supuestos hechos de lavado de activos.

En esos términos, encuentro razonable cierta sorpresa o inquietud por la ausencia —de su participación en calidad de querellante— del organismo especializado en la materia en un proceso penal en el que se ventila la presunta comisión de un conjunto de operaciones financieras y comerciales tendientes a legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas, por la suma de Pesos 57.232.547,49.

Por fuera de esa curiosidad, que en absoluto resuelve la controversia aquí planteada, estimo —en definitiva— que el interés jurídico de AFIP-DGI en la presente causa halla base, así como límite, en la cuestión de los ilícitos tributarios precedentes del lavado de activos. Y, a partir del reconocimiento de dicho interés, entiendo que la habilitación de su rol en calidad de querellante no ha lesionado, ni afectado de manera directa los principios constitucionales del debido proceso.

En cualquier caso, y aclarado el punto, no dejo de observar que la objeción de la defensa se ha sustentado en una postulación meramente formal, concerniente a la falta de facultades de AFIP-DGI para intervenir en este juicio. En cambio, la parte ha omitido mencionar, y acreditar, el perjuicio real y concreto que su actuación le ha supuesto, de modo de justificar la pretendida declaración de invalidez de los actos procesales cumplidos.

Y ello no es un aspecto menor, dado que en nuestro sistema jurídico cualquier nulidad —de naturaleza relativa, de carácter absoluto y de orden general— solo puede proceder en la medida en que —de manera previa— se haya constatado un perjuicio que deba ser reparado (v. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa N° 3851 “Benítez, Julio s/ recurso de casación”, resuelta el 6/6/2002, Sala I causa N° 261 “Barbieri, Claudio s/recurso de queja” resuelta el





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

10/11/1994, Sala III, causa N° 3561 “Alto Palermo Shopping s/recurso de casación”, resuelta el 12/8/2002 y Sala V, causa N° 3211 “C,G,F, s/recurso de casación”, resuelta el 27/5/2002, en: AA.VV.; *Código Procesal Penal de la Nación, anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal*, Ed. Ad-Hoc, 2007, p.223).

De otro modo, en materia de nulidades se impone una interpretación restrictiva, siendo condición esencial para su declaración, no sólo su previsión legal mediante sanción, sino que quien la alegue tenga un interés jurídico en la nulidad y que no la haya consentido, de manera expresa, ni tácita. Así, los principios de conservación y trascendencia impiden que se aplique la nulidad si el acto atacado logró su finalidad y no se verifica un perjuicio que deba ser reparado. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, aun en el caso de nulidades absolutas, la nulidad procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley importa un manifiesto exceso ritual, no compatible con el buen servicio de justicia (*Fallos*: 295:1413; 311:2337).

Sobre el tema, por su parte la doctrina advierte que, incluso en el caso de nulidades declarables de oficio (características de las absolutas), estas no pueden serlo en el solo beneficio de la ley. Se exige la concurrencia de un perjuicio real y concreto, aunque no sea actual, ya que puede admitirse el perjuicio potencial siempre que tenga cierto grado de verosimilitud. Dicha calidad debe ser alegada y probada por la parte, así como valorada por el juez de la causa (TORRES, Sergio; op. cit., pp. 35-39). Ya respecto de la valoración del interés y el consiguiente perjuicio de las nulidades, se ha postulado que quedan dentro del marco discrecional del magistrado, desde que la sustancialidad del proceso prevalece sobre el formalismo (ibídem, p. 190).

Como consecuencia de lo expuesto, una declaración de nulidad por la nulidad misma resulta algo ajeno a nuestro sistema procesal: tanto el perjuicio





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

sufrido como el interés de quien procura obtener la declaración deben ser fehacientemente probados, sin que baste al efecto la mera enunciación de supuestos derechos constitucionales vulnerados, que —en términos meramente teóricos— lo haya colocado en estado de indefensión procesal. Sostener lo contrario supone adscribir a un criterio absolutamente formalista, que —lejos de favorecer alguna garantía— la desmerece, al entorpecer o condicionar su debido resguardo.

Es que, si bien se aprecia, desde la óptica procesal la querella tuvo un rol activo en la contestación de la vista que le fuera conferida por la instrucción en los términos del art. 346 del CPPN, al solicitar la elevación de la causa a juicio respecto de los aquí imputados como responsables del delito de lavado de activos agravado (art. 303, ap. a, CP), pero —en términos generales— asumió un ejercicio muy acotado de sus atribuciones legales en el curso del proceso.

A modo ilustrativo, se consigna que, durante la instrucción, AFIP-DGI no requirió la adopción de medidas de prueba, ni aportó elementos de convicción en abono de la hipótesis delictiva. Luego, al elevarse la causa a juicio, tampoco ofreció prueba en oportunidad del artículo 354 CPPN. Y, ya en instancia del debate, prescindió de interrogar testigos e incluso de argumentar sobre el mérito de la prueba, limitando sus conclusiones finales a una adhesión a las formuladas por el Ministerio Público Fiscal.

A ello se añade la circunstancia de que las defensas no opusieron reparo alguno a su intervención a lo largo del proceso y a medida que se avanzaba en sus diversas etapas, lo que —a las claras—debe ser leído en términos de consentimiento a su intervención.

Incluso, el pasado 26 de julio, previo a celebrarse el juicio oral y público, este Tribunal puso en conocimiento de las partes la presentación promovida por Dr. Claudio Ronchi, apoderado de AFIP-DGI, en la cual informaba que la Dra. María Lucía De Benedetti ejercería el patrocinio letrado de la querella, lo que no motivó





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

manifestación alguna por parte de las defensas, ni de la Fiscalía (en su rol de control de legalidad, art. 120, CN). Sumado a ello, abierto ya el debate y consultadas las partes por la formulación de cuestiones preliminares en los términos propiciados por el art. 376 CPPN, tampoco se objetó su intervención.

Y ello no es menor, si se advierte que la vía intentada por la defensa procura la invalidez de un acto producido durante la etapa de instrucción, lo que implica que debió ser opuesta —bajo pena de caducidad— durante aquella etapa del proceso o en el término de citación a juicio; en virtud de lo dispuesto por los artículos 170 inciso 1 y 354 del CPPN.

Cabe recordar, pues, que es en instancia de debate oral cuando el principio de contradicción adquiere mayor fuerza en nuestro sistema procesal —por el control del ingreso de la prueba, la interrogación a testigos y la argumentación sobre valor conviccional de la prueba en orden a los hechos contenidos en la acusación y las consecuencias jurídico-penales de todos ellos— y, por dicha razón, es clave que, al iniciarse, estén ya definitivamente fijados los sujetos actuantes.

En consecuencia, desestimada —por las razones dadas— la comprobación de cualquier vulneración a las normas del debido proceso y habiendo operado el instituto procesal de la preclusión, estimo que la pretensión de la defensa debe ser rechazada (cfme. artículos 166, 167 inc. 2 CPPN *a contrario sensu* y 170 del CPPN). Doy por contestada así la presente cuestión.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se pronuncia de igual modo.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA, DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU, DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones a las que arriba la señora Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia en igual forma.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZA DE CÁMARA CAROLINA PRADO DIJO:

I.- De acuerdo a la relación de causa, los defensores particulares de los encartados Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara y Rubén Adolfo Ceva, **Dres. Gustavo Taranto y Julio Antonio Loza**, solicitaron —en sus conclusiones finales— la declaración de insubsistencia de la acción penal, por violación a la garantía de juzgamiento en plazo razonable. Con base en la cita de jurisprudencia, pusieron de manifiesto el conjunto de pautas que orientan la estimación del incumplimiento del citado principio de plazo razonable y los extremos que evidencian que ello ha operado en el caso de autos. Hicieron reserva de recurrir en casación, así como del caso federal.

En concreto, el Dr. Taranto hizo mención a que la razonabilidad del plazo supone considerar cuestiones diversas —complejidad de la causa, la pandemia, entre otras— y que, en ese contexto, el ejercicio de la defensa no debe ser asociado a actos de dilación, en tanto dicho ejercicio de un derecho tiene lugar en los márgenes dados por plazos procesales que son fatales.

El letrado refirió a los perjuicios sufridos por sus representados por más de diez años de tramitación de la causa: inhibición de la empresa, clausura de las cuentas bancarias e indisponibilidad del dinero existente al momento, aún hoy depositado en el banco. Añadió que la empresa cerró y debió despedir a los empleados, con las inevitables consecuencias de su destrucción comercial.

A su turno, el Dr. Loza sostuvo que el Tribunal perdió jurisdicción por la duración irrazonable del proceso. En orden a la facultad propia del Estado para investigar un hecho y su extensión, adujo que la sustanciación de estos actuados durante catorce años ha resultado excesiva y no puede considerarse como razonable. Señaló que la Corte Suprema estableció el alcance de esta garantía, al decir que la duración del proceso debe abarcar los términos que insuma la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

resolución de los recursos planteados. En definitiva, solicitó la nulidad de proceso por violación a la garantía invocada.

II.- En ejercicio del derecho de réplica, el Fiscal General **Dr. Carlos Gonella** solicitó el rechazo del presente planteo. En abono de su posición, adujo que en el caso no concurren los requisitos que habilitan su procedencia. Señaló que las constancias de la causa dan cuenta que contó con el debido impulso procesal, sin baches ni desidia en el trámite del expediente.

Puso énfasis en la complejidad de la causa, a la luz del número de imputados involucrados, de la extensión de las actuaciones y de la voluminosa prueba rendida e incorporada.

III.- En orden al planteo de las defensas de insubsistencia de la acción penal por violación de la duración razonable del proceso, debo puntualizar que dicha causal de extinción de la acción penal no se halla contemplada de manera expresa por el Código Procesal Penal de la Nación, sino que resulta una creación doctrinal y jurisprudencial, desarrollada con el objeto de proteger la garantía del imputado de ser juzgado dentro de un plazo razonable; prerrogativa incorporada por los Tratados de Derechos Humanos integrados al bloque constitucional a través del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1 y 7.5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14.3).

A diferencia del instituto de la prescripción, donde la prosecución de la acción penal depende de que no hayan transcurrido los términos legalmente estipulados, en la causal invocada por las defensas la vigencia de la acción halla base en el hecho de que el proceso no se haya prolongado de manera indebida, “irrazonable”. Por ende, estas hipótesis de extinción de la acción penal importan valoraciones autónomas y diversas.

En particular, el plazo razonable resulta un concepto jurídico indeterminado y ambiguo. La doctrina y jurisprudencia internacional coinciden en postular que su





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

determinación estriba en el análisis de tres elementos o factores: la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales (cfse. YACOBUCCI, Guillermo; *El sentido de los principios penales*, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 2002, p. 353; Corte Interamericana de Derechos Humanos, causas “Genie Lacayo”, S. 29.01.1997, y Suarez Rosero”, S. 12.11.1997; Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría General de la O.E.A., Washington D.C., 1996, pp. 33 y ss.; Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Jurisprudencia 1984-1987, B.J.C., Madrid, pp. 173, 949 y 1015).

De igual modo, el Alto Tribunal del país ha expresado que la propia naturaleza de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento, o bajo qué condiciones, comenzaría a lesionarse, en virtud de que la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias, propias de cada caso. Así, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número determinado de días, meses o años (CSJN, *Fallos*, 322:360, voto de los jueces Fayt y Bossert y 327:327).

Sin perjuicio de esa aserción, la Corte Suprema identificó, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos criterios para determinar cuán prudente resulta la prolongación de un juicio, que han sido señalados por las partes, a saber: la complejidad del caso, la conducta del imputado y la manera en que el asunto fue llevado por las autoridades administrativas y judiciales (sentencias en el caso “König” del 28 de junio de 1978 y del caso “Neumeister” del 27 de junio de 1968, publicadas en “Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Jurisprudencia 1959-1983”, B.J.C, Madrid, págs. 450/ 466, párrafo 99, y 68/87, párrafo 20, respectivamente; en el mismo sentido “Calleja v. Malta”, del 7 de abril de 2005, párrafo 123).





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En función de dichas pautas, cabe analizar si en el caso de autos se ha superado el tiempo razonable para brindar una respuesta penal.

A ese objeto, procede recordar que se atribuye a Fernando Luis Cuello, Diego Gastón Ludueña, Horacio Omar Cismondi, Rafael Gustavo Vega, Rolando Oscar Martín, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rubén Adolfo Ceva, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega y a Walter Fabián Cabrera la comisión del delito de lavado de activos agravado (art.303, apartado a, CP).

De la lectura de la imputación delictiva que pesa sobre los nombrados surge que su dilucidación no ha resultado del todo sencilla o carente de complejidad, por involucrar un número considerable de personas —once consortes de causa— y un copioso plexo probatorio, compuesto por diferentes elementos de convicción (documentos, instrumentos, informes y testimonios —en especial, durante el debate los correspondientes a individuos que tomaron préstamos en SOLFI S.A.) recopilados a partir de la formación de la causa, pero principalmente reunidos en el marco de la causa principal, consistente en declaraciones de las personas intervinientes en los diversos y numerosos allanamientos, voluminosa documentación, actas de secuestro, intervenciones telefónicas, numerosos Informes de AFIP, de UIF, de Policía Federal Argentina y de la Provincia de Córdoba, de Gendarmería Nacional, entre otros muchos organismos estatales, entidades bancarias y financieras, etcétera.

A propósito del volumen de la prueba en juego, cabe recordar que, en instancias de su ofrecimiento ante este Tribunal, por imperio del artículo 354 del CPPN, las propias partes —en concreto, la Fiscalía General y la Defensoría Oficial— reconocieron dicho extremo y solicitaron una prórroga de los plazos procesales para cumplir con ese cometido, con fundamento, precisamente, en el volumen y en la complejidad de la causa; solicitud que fue acogida por el Tribunal en favor de todas las partes.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Ya en relación con el trámite de la causa, hay que decir que tuvo inicio con fecha 21.02.2013 cuando el Juez Federal de Villa María ordenó extraer copias de las actuaciones FCB 62000069/2008 y formar legajo, luego de que la Fiscalía Federal de Villa María formulara ampliación de la promoción de la acción penal por nuevos hechos de lavado de dinero en contra de los imputados Cuello, Paulus, Vega y Martín.

El 2.03.2018, la Fiscal Federal a cargo de dicha Fiscalía amplió y reformuló el requerimiento de instrucción de fs. 3205/3221 en contra de los imputados Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus, Diego Gastón Ludueña, Horacio Omar Cismondi, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rubén Adolfo Ceva, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Walter Fabián Cabrera, Enrique Osvaldo Lorca, Juan Carlos Gugliemini y consideró que sus conductas se enrolaban jurídicamente en la figura prevista en el art. 303, apartado a) del Código Penal.

Así las cosas, el 22.04.2019 el Juez Federal de Villa María dictó auto de procesamiento respecto de los imputados de mención en orden al delito investigado; resolución que fue impugnada por las defensas mediante sendos recursos de apelación, lo que significó la elevación de las actuaciones ante la Cámara Federal de Apelaciones. Con fecha 30.03.2021, este Tribunal rechazó los planteos defensivos y confirmó el procesamiento de los imputados.

Tras ello, la Fiscalía Federal y la querella ejercida por la AFIP-DGI formularon requerimiento de elevación de la causa a juicio (fs.4387/4402 y 4374/4382 de autos). Objetadas tales acusaciones por las defensas, con fecha 06.09.2021 se dictó auto de clausura de la instrucción y se elevó el expediente a juicio.

Radicada la causa ante este Tribunal, el 17.11.2021 se dictó decreto de citación a juicio (art. 354 CPPN) y, en definitiva, mediante resolución del 19.5.2022





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

se proveyó la prueba ofrecida y se fijó fecha para el inicio de la audiencia de debate, lo que aconteció el pasado el día 10 de agosto.

No puede obviarse la mención de que en dos oportunidades —muy próximas al comienzo del debate— el Tribunal debió resolver sendos planteos de suspensión de la audiencia formulados por las propias defensas que ahora cuestionan la duración del proceso. Tales peticiones fueron desestimadas en procura de resolver, en definitiva, la situación procesal de los imputados.

El recuento de los antecedentes del caso da buena cuenta de que el tiempo demandado en el trámite del proceso halla justificación y correlato en las propias singularidades de la causa y de que no sido violatorio de garantías constitucionales. Por lo demás, es preciso anotar que los imputados cuyas defensas articularon el planteo ingresaron al proceso con posterioridad a la ampliación del segundo requerimiento de instrucción, en el año 2018.

De tal modo, el conjunto de extremos expuestos conduce a afirmar que, estrictamente, el tiempo transcurrido no resulta violatorio de la duración razonable del proceso, en particular, por el número de imputados involucrados y por ventilarse un delito de cierta complejidad en su dilucidación, cuya sanción penal conminada en abstracto supera los diez años de prisión.

Ciertamente que no pierdo de vista la distinción entre la garantía de duración razonable de proceso y el instituto de prescripción de la acción penal, respecto de lo cual se ha postulado convenientemente *“aun cuando se haya causado la solución de la violación a la duración razonable del proceso mediante el instituto de la extinción de la acción penal por insubsistencia u otra respuesta análoga, ello no significa, empero, que ambos institutos sean equiparables en sus presupuestos de procedencia. Es que la prescripción por el transcurso del tiempo tiene razón de ser en la pérdida progresiva del interés social en la persecución de un delito en función de su gravedad, mientras que la acción penal deviene insubsistente atendiendo al derecho de quien se encuentra imputado a liberarse de*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

las restricciones que impone la sujeción a un proceso excesivo e innecesariamente largo, contrastadas con el principio de inocencia.” (HAIRABEDIAN, Maximiliano y ZURUETA, Federico; La prescripción en el proceso penal, 3° Edición Ed. Mediterránea, 2017). Sin embargo, estimo que —a la luz de lo antes referido— el plazo de la prescripción resulta en autos un aspecto a considerar a la hora de evaluar la razonabilidad o no de la duración del proceso. Conforme a las constancias del expediente, ese plazo no ha sido sin embargo superado.

Entiendo, así, que el tiempo empleado por el Estado para esclarecer un hecho que —*a priori*— involucraba un conjunto de operaciones comerciales y financieras tendientes a legalizar dinero obtenido de manera ilegal no resulta incompatible con el derecho de los imputados a un juicio sin demoras indebidas, amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los Pactos internacionales con jerarquía constitucional (art. 8.1 CADH y 14.3.c) PIDCyP y 75 inciso 22 CN).

Tampoco puedo omitir considerar las múltiples dificultades que hubieron de sortearse en el último período a los fines de la tramitación de estos actuados en función de la situación mundial de pandemia por Covid-19. A ello se añade la inexistencia de personas privadas de su libertad, lo que supone —por cierto— un grado menor de afectación por el tiempo transcurrido.

En definitiva, las razones expuestas impiden considerar que, pese al tiempo transcurrido desde el inicio del proceso, se haya transgredido el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable y, en consecuencia, la pretensión introducida por las defensas no puede tener acogida. Dejo así respondida la presente cuestión.

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se expide en la misma forma.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia en la misma forma.

A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZA DE CÁMARA CAROLINA PRADO DIJO:

Dada la ausencia de acusación en el debate de la querella y del Ministerio Público Fiscal con relación a los imputados Rolando Oscar Martín, Horacio Omar Cismondi, Walter Fabián Cabrera y Rafael Gustavo Vega, corresponde —en lo que sigue— abordar y definir su situación procesal.

En términos concretos, el Fiscal General sostuvo en sus conclusiones finales que el caso de los imputados de mención —cuya absolución peticiona— tiene la nota común del patrón de escasas herramientas educativas y un contexto social, cultural, económico y laboral condicionado, con acceso a actividades de limitada calificación.

Acerca de **Walter Fabián Cabrera**, chofer de empresa de transporte desde hace ocho años, puso de manifiesto que —al tiempo de los hechos— se desempeñaba como agente de policía en Río Tercero en tareas no operativas y que le comentó a su compañero Pelayes su interés en generar mayores ingresos para afrontar inconvenientes económicos: era único sostén de su familia, tiene un hijo celíaco, alquilaba, entre otras cosas. En ese contexto, Pelayes le hizo saber que un señor González, alias “Sapa”, buscaba gente para gestiones bancarias. Ya en contacto con él, se le otorgó un poder en el que aparecía una empresa junto a los apellidos Di Primio y Cabral, a quienes nunca conoció. Su tarea consistía en cambiar cheques en bancos, por ventanilla, y en entregar luego el dinero —ya sea en su auto o en un café—. Dichas gestiones eran facturadas como monotributista, por lo que consideró que se trataba de un trabajo más, desconocía si era algo ilícito, ya que había un poder, una empresa y el banco nunca objetó los





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

movimientos en la cuenta. El Fiscal tuvo en consideración que, según su declaración, para él esa actividad no era ilegal, aunque manifestó arrepentido y afirmó que nunca pensó hallarse en esta situación.

Frente a ello, el Fiscal General concluyó que no es desatinado considerar que Pelayes, un ex policía de confianza de Cuello, reclutó a Cabrera para que cambiara los cheques sin brindarle mayores detalles. Además, fue enviado a hablar con González, condenado en otra causa como presta-nombre de confianza de Cuello.

En definitiva, sostuvo que si bien Cabrera reconoció los hechos y su participación, desconocía el trasfondo delictivo de su accionar. De otro modo, más allá de la admisión de su participación en la operatoria de cambio de cheques y su acreditación en la causa mediante los informes emitidos por la UIF respecto de los movimientos de la cuenta corriente de la firma ALGECIRAS —en la que el acusado figuraba como apoderado— en el Banco Francés, lo cierto es que no ha podido probarse el tipo subjetivo de la figura penal incriminada.

Agregó que, pese a no estar frente a una persona carente de instrucción —por sus estudios secundarios completos y su condición de ex integrante de la fuerza policial—, no se trata de una persona con conocimientos especiales, ni sustanciales en materia económica, por lo que cabe concluir que su preparación en el caso concreto era insuficiente para la comprensión global del ilícito.

El Representante del Ministerio Público Fiscal expuso que la figura de lavado de activos debe abarcar la consciencia de dar apariencia de legalidad a la operación y, además, el carácter ilícito del delito precedente. En este sentido, puso de relieve que tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia han consolidado la idea de que se trata de un delito de intención, que requiere de un comportamiento consciente de que se está dando apariencia lícita a dinero o bienes de procedencia ilícita. En nuestra legislación, el Código Penal, artículo 303, establece que es un delito solo compatible con el dolo directo.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

A lo anterior, el Fiscal sumó la apreciación de un factor importante: la asimetría de poder en comparación con Cuello, un empresario acaudalado, Licenciado en Administración de Empresas, con una vivienda fastuosa con piso de vidrio, pecera, que poseía vehículos de alta gama, seguridad privada, entre otras cosas.

En este aspecto, añadió que cobra relevancia el motivo por el cual Cabrera aceptó el trabajo recomendado por su amigo y colega Pelayes: la necesidad de sumar otro ingreso para solventar las cargas familiares. Consideró además que debe tenerse en cuenta que Pelayes, ex policía y persona de suma confianza de Cuello, desempeñaba sus tareas dentro del Banco de Córdoba, donde le hacía la seguridad y logística, según fue probado en la causa ya juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba.

De acuerdo a lo expuesto, el Fiscal concluyó que no ha sido acreditado el tipo subjetivo de la figura penal que se atribuye al acusado, es decir, el conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo del delito: formar parte de una organización que lavaba dinero de fraudes tributarios precedentes, y solicitó al Tribunal la absolución de Cabrera.

Con relación a **Horacio Omar Cismondi**, el Fiscal valoró los términos de su declaración indagatoria y sus circunstancias personales, entre ellas, que actualmente posee exiguos ingresos, vive en una pensión de alquiler, obtuvo hace unos meses el beneficio de una pensión y se sostiene con la venta de bidones de agua, y que conocía cuestiones de “análisis comercial del trigo”. Según aseveraciones del imputado, conocía a Cuello desde el año cero, lo acompañaba por su relación de amistad, la empresa era de él y confió en la “palabra de la gente”. Fue designado como Presidente de CORRETAJES GROUP, empresa que luego se vendió y fue sustituido por Ortega; a raíz de ello, fue a una Escribanía y firmó los papeles sin preguntar nada. Aclaró que era una persona carente de opinión y que nunca recibió beneficio económico alguno, salvo unos pesos por un almuerzo.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Asimismo, declaró que el Contador Malpassi fue quien un día le dijo “sos presidente”, que no pasaba nada porque la empresa no estaba activa y que lo iban a cuidar porque “era de Naty”, en referencia a la mujer de Cuello. Había un muchacho de Buenos Aires que usaba la empresa porque estaba caída.

En el marco de la audiencia, Cismondi explicó además que contaba con tarjeta azul de vehículos de Cuello en razón de que a menudo viajaba a Buenos Aires para trasladar a la madre de Cuello, quien padecía severos problemas de salud y era atendida en el Hospital Alemán. Aclaró que ello le significaba un dinero y que pudo haber tenido tarjetas de un BM o Mercedes Benz porque a veces llevaba los vehículos al service.

El Fiscal General sostuvo que este extremo halla explicación en el vínculo de amistad entre los acusados y que resulta plausible que Cuello le haya pagado a Cismondi por la realización de gestiones. Agregó que, diferente hubiese sido la situación, si Cismondi hubiese sido el titular registral de los vehículos de alta gama y hubiese autorizado a Cuello y a su entorno a conducir, lo que —de suyo— supone una clásica maniobra de lavado de dinero y ocultamiento de patrimonio.

El Fiscal General expresó que debe considerarse que éste no es el primer proceso que enfrenta el encartado, ya que el año pasado fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, como cómplice secundario del delito de asociación ilícita tributaria, a la pena de dos años y seis meses de prisión, en suspenso. En dicho proceso, el Tribunal tuvo en cuenta su vinculación directa con el imputado Cuello, ya que aparecía como autoridad en la empresa CORRETAJES GROUP, utilizada en la asociación ilícita allá investigada.

Al analizar su situación, la Fiscalía planteó cuales fueron los motivos que llevaron a Cismondi a prestar colaboración en las maniobras delictivas. A la luz de la evidencia analizada en este caso y en atención a sus propias manifestaciones, concluyó que en definitiva fue su amistad con Cuello lo que lo motivó el ingreso a la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

actividad. Pues bien, consideró que esa conducta fue juzgada ya y le mereció una condena al nombrado.

Añadió al respecto que en el proceso de autos se indaga sobre su responsabilidad en un tramo posterior: las maniobras de lavado de dinero ilícito que se produjeron en parte gracias a su participación secundaria. El análisis de las numerosas constancias de la causa condujo a la Fiscalía a entender que la versión exculpatoria asumida por Cismondi se corresponde con los elementos probatorios reunidos, según surge en particular del informe de la UIF (fs. 3394 y SS). Al respecto, si bien no desconoce que fue accionista de la empresa durante el período de tiempo 2007-2008, en el año 2011 aparece como presidente Miguel Ángel Ortega (fs. 3422). Además, sostuvo que AFIP no remitió documentación respecto a Cismondi, excepto sobre su vinculación a CORRETAJES GROUP, y refiere —de manera expresa— que tampoco se verifican antecedentes de reportes de operación sospechosa, ni surgen registros de movimientos patrimoniales inconsistentes con su situación económica.

Por lo expuesto, el Fiscal General concluyó en que, pese a que Cismondi conocía la actividad desarrollada por Cuello, por ser amigos de toda la vida, no concurren elementos de cargo que autoricen a afirmar —fuera de toda duda razonable— que colaboró con él y con los otros acusados en el lavado de dinero que se le endilga. En definitiva, no ha podido probarse en el caso un obrar doloso en correspondencia con el tipo subjetivo exigido por el tipo penal que se le achaca.

En relación con la situación procesal del imputado **Rolando Oscar Martín**, el Fiscal General apreció —de igual manera— su declaración indagatoria. En este sentido, puso de relieve que el imputado declaró que hace changas, tiene estudios secundarios incompletos, vive con sus padres, quienes están a su cargo, en una propiedad de alquiler, es padre de un hijo de once años de edad, que vive con su madre, y que sus ingresos económicos mensuales se estiman en la suma de Pesos 40.000 o 50.000, a lo que se añade una asignación de Gobierno de \$10.000. En





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

términos del acusado, conoció a Cuello en un lavadero de autos en el que solían conversar; que, entonces, trabajaba en la Concesionaria “Aval Automotores”, donde realizaba tareas de gestoría. Un día, Cuello lo invitó a participar en la empresa SOLFI S.A. y le ofreció el doble de dinero que él cobraba y, dado que tenía muchos gastos, lo vio como una oportunidad de generar más dinero y aceptó trabajar con él.

Explicó que le asignaron una oficina en calle Mosconi y que por su labor cobraba un sueldo mensual. Su función consistía en analizar información para la concesión de créditos; realizaba lo que él llama un “pre crédito”, es decir, que cuando se presentaba un interesado en el financiamiento de un porcentaje del valor de un vehículo, investigaba si su situación se hallaba dentro de los parámetros que le habían asignado. Refirió al respecto que “le habían bajado una línea”, se podía financiar hasta un 20% o 25% de su valor. Añadió que, asimismo, se tenía en cuenta si era una persona que trabajaba en changas o si gozaba de una entrada económica real y concreta; que su examen era de tipo informal, por decirlo de una manera, y luego era remitido a Natalia, que era quien en definitiva decidía la aprobación o no del crédito. Declaró que se ocupaba también de la gestión e inscripción de las prendas en el Registro del Automotor, para lo cual se le otorgó un poder que firmó en la Escribanía Malpassi. De este modo, era él quien firmaba en nombre de la empresa; situación que tuvo lugar bajo presión, ya que formaba parte de su labor diaria y, de este modo, no tenía que solicitar —de manera permanente— la firma de Natalia.

Señaló además que trabajaba en una oficina ubicada en la planta baja, que era ajena al tema de los cereales; situación de la que tomó conocimiento con posterioridad ya que era muy hermético el tema y le habían informado que los fondos provenían de una empresa de transportes.

El Fiscal General tuvo en cuenta que no existen movimientos económicos en los que el imputado figure como sindicado, ni reportes de operaciones sospechosas, tampoco transferencias sin respaldo, ni cheques a su nombre.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Tampoco aparece en el informe emitido por la UIF y nunca operó con cuentas bancarias a su nombre. A la par, el imputado declaró que, como gestor, hizo dos o tres transferencias de titularidad de camiones para la empresa SWETENSON y nunca en SOLFI vio actividad compatible con el transporte de camiones.

Destacó que, al ejercer su defensa material, el imputado declaró en forma amplia, respondió las preguntas que le fueron formuladas, no controvertió el hecho y explicó cómo fue que comenzó a trabajar en SOLFI. Consideró así que se trata de una persona que, según resulta de la prueba producida, desempeñaba el clásico rol de empleado.

Puntualizó que, conforme los numerosos testimonios, “Rolo” era el encargado de cobrar las cuotas de los préstamos acordados, pero dicha actividad no trascendió a maniobras compatibles con una participación en el delito de lavado de dinero.

Sumado a ello, el Fiscal sostuvo que no hay otros elementos de cargo que permitan sostener el conocimiento de Martín del origen del dinero que se prestaba, ni cuál era —en concreto— la actividad real de la empresa en cuestión.

El Fiscal Auxiliar señaló que, a diferencia del imputado Cismondí, en el presente caso estamos ante un acusado que no estuvo involucrado en la asociación ilícita que fuera juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba. Su vínculo con las presentes actuaciones viene directamente dado por el hecho de ser apoderado de la empresa apócrifa SOLFI, y figurar en varios de los créditos prendarios que dicha organización otorgaba a particulares. Indicó que su rol en estos contratos era firmar en nombre de dicha empresa, inscribir las prendas en el Registro del Automotor y, en forma eventual, realizar alguna tarea de gestión del automotor.

Por ello, la Fiscalía concluyó que no se verifican las notas del tipo subjetivo (dolo) del delito de lavado de activos, lo que —en definitiva— obsta sostener su





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

responsabilidad penal. En consecuencia, no sostuvo la acusación en su contra y solicitó la declaración de su absolución por parte del Tribunal.

Por último, con relación a **Rafael Gustavo Vega**, el Fiscal destacó sus condiciones personales, en concreto, que se trata de una persona de origen familiar humilde, de padre jornalero y madre empleada doméstica, en tanto el acusado se ha desempeñado en labores de carpintería, verdulería y albañilería. En especial, apreció las manifestaciones de Vega en el sentido de que esta causa le ha significado una condena social, lo que le ha repercutido de manera negativa y le ha impedido conseguir trabajo por cuatro años. En términos del imputado, en el año 2012 comenzó esta penuria, que le ha sido difícil de sobrellevar, en tanto se levanta a la mañana y hasta la noche está con ella en la cabeza. Afirmó que nunca tuvo voluntad de cometer acto delictivo alguno.

Según su declaración, en 2009 se vinculó como empleado en SWETENSON, a través de un conocido suyo que le comentó que necesitaban personal. Su trabajo consistía en la realización de tareas administrativas, ejecutaba labores relacionadas a la carga y transporte de mercadería, pagaba a los choferes, cumplía un horario y cobraba un sueldo con recibo. Declaró que había camiones a nombre de las firmas SWETENSON y ARBOL GRANDE. Con posterioridad, en razón de que la actividad disminuyó, la empresa SWETENSON comenzó a vender los camiones y fue entonces que el nombrado se vinculó con SOLFI, cuando Cuello le dijo que, para continuar con la actividad, iban a constituir esta nueva empresa. A partir de ese momento, comenzó a figurar como una de las autoridades de SOLFI. Indicó que firmó esos papeles para continuar trabajando y así conservar su empleo. Refirió al respecto que directamente le dijeron “te vas a quedar sin trabajo” y que claramente ante dicha amenaza, tomó la decisión de prestar su nombre para la constitución de una sociedad fantasma, porque se vio fuertemente condicionado.

El acusado declaró que, a partir de la creación de esta nueva empresa de transporte, fue que surgieron los problemas y que con esta causa judicial tomó





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

conocimiento del tema de los créditos. Resaltó que si firmó algo en relación con ello fue sin conciencia. Las empresas SWETENSON, ARBOL GRANDE y SOLFI funcionaban en el mismo lugar, en calle Mosconi de Río Tercero.

El Representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso de Vega es diferente a los restantes analizados, ya que si bien no fue investigado en la causa resuelta por Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, aparece como una de las autoridades de la empresa SOLFI.

Sin embargo, el propio acusado —al ejercer su defensa material— explicó el motivo por el que figuraba como accionista: Cuello le dijo que la alternativa era quedarse sin trabajo o constituir esta nueva empresa para garantizar su continuidad laboral; ante lo cual accedió.

De acuerdo a ello, sostuvo que se advierte de manera clara la relación asimétrica en la que se encontraba Vega, un asalariado, respecto de Cuello, una persona de un elevado capital social, cultural y de poder.

A la par, no ha podido probarse en la causa que Vega tuviera conocimiento de las actividades ilícitas desplegadas por las empresas SWETENSON, SOLFI y sus verdaderos dueños.

Indicó que, si bien el nombrado aparece como co-titular en una cuenta de SOLFI junto a la propia empresa, la otra persona que figuraba como accionista era Paulus. A juicio de la Fiscalía, esa circunstancia se vincula con lo declarado por el co-imputado Martin, quien dijo que ella era la única con acceso a las cuentas y quien, en definitiva, aprobaba los créditos de SOLFI.

Por lo demás, el acusado Vega tiene una cuenta personal a su nombre y solo se registraron movimientos durante el año 2011 en la cuenta de SOLFI, no en dicha cuenta personal.

Así las cosas, el Fiscal concluyó que no surgen elementos de cargo independientes que autoricen a afirmar, fuera de toda duda razonable, que el imputado conocía la actividad ilícita llevada adelante por SWETENSON y SOLFI, el





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

origen de los fondos de dichas empresas, ni las maniobras tendientes a dar apariencia de licitud a dinero espurio.

Así, el órgano acusador estimó que no ha podido acreditarse el tipo subjetivo del delito de lavado de activos en juego, en lo que concierne al acusado Vega. Puntualmente, no fue probado que el nombrado conociera y quisiera participar en maniobras tendientes a otorgar apariencia de licitud a dinero proveniente de ilícitos. En consecuencia, desistió de la acusación a su respecto y solicitó al Tribunal el dictado de su absolución.

A su turno, la querella adhirió a las conclusiones finales emitidas por el Ministerio Público Fiscal, razón por la cual tampoco subsiste acusación por parte de AFIP-DGI en relación con los imputados de mención.

Pues bien, dado que, respecto de Walter Fabián Cabrera, Horacio Omar Cismondi, Rolando Oscar Martin y Rafael Vega no existe acusación, resulta de aplicación al caso la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente *"Mostaccio Julio Gabriel"* (Fallos: 327:120), según la cual la imposición de una condena en tales condiciones vulnera las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.

Como es sabido, en dicho antecedente jurisprudencial, el Alto Tribunal reafirmó la línea de fundamentos fijados en los precedentes *"Tarifeño"*, *"García"* y otros, en los que se sostuvo que "ante el pedido absolutorio fiscal, el tribunal se encuentra impedido de realizar el juicio valorativo crítico del proceso, pues de lo contrario habría una trasgresión a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y del debido proceso".

Ello, en el entendimiento que, en materia criminal, la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por juez natural, lo que —en definitiva— impide al tribunal condenar si el fiscal solicita la absolución del imputado.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En relación con lo señalado, es preciso considerar también que, según reiterada doctrina de la Corte Suprema, "...no obstante que sus decisiones se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, sin que ello produzca gravamen constitucional (doctrina de Fallos: 280:430; 301:198; 302:748; 307:207; 308:1575 y 2561, entre muchos otros), lo cierto es que los tribunales inferiores deben conformar sus decisiones a las de este Tribunal, y que el apartamiento no puede ser arbitrario o infundado...".

En otros términos, en la medida en que no ha mediado petición de imposición de pena para las imputaciones referidas, el Tribunal tiene vedada la posibilidad de dictar sentencia condenatoria, por carecer de jurisdicción para hacerlo.

En suma, y toda vez que el dictamen del Ministerio Público se encuentra debidamente fundado (art. 69, CPPN), se impone postular la **absolución** de **Rolando Oscar Martín, Horacio Omar Cismondi, Walter Fabián Cabrera y Rafael Gustavo Vega** en orden al delito de lavado de activos agravado (art. 303 apartado a del CP), que les fuera atribuido en el auto de elevación de la causa a juicio. Dejo así contestada la presente cuestión.

A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se expide en la misma forma.

A LA CUARTA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia de igual modo.

A LA QUINTA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZA DE CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

I. Al momento de emitir sus conclusiones finales, el Defensor Público Oficial Dr. **Rodrigo Altamira** planteó la nulidad del proceso con relación a los imputados Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega, por violación al principio de prohibición de persecución penal múltiple, reconocido en el artículo 8 inciso 4 de la CADDHH, artículo 75 inciso 22 de la CN y artículo 1 del CPPN.

En abono de su pretensión, el letrado alegó que sus asistidos están siendo juzgados por hechos por los cuales ya fueron condenados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba (TOF2), en autos “Cuello Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación ilícita, etcétera” (Expte. 62000069/2008), bajo una calificación jurídica diferente.

Tras desarrollar un marco teórico y dar cuenta del alcance de la prohibición, sostuvo que —en este caso— se configura la triple identidad (sujeto, objeto, causa) y que, en consecuencia, se ha violado una garantía constitucional básica.

Expuso que no hay dudas sobre la identidad de sujetos y, a los fines de demostrar la identidad objetiva, leyó algunos pasajes de la acusación respecto de sus representados, que confrontó con otros de la sentencia condenatoria dictada por el TOF2, para finalmente concluir que se trata de la imputación del mismo acontecimiento histórico.

Refirió que —en líneas generales— las conductas que se les reprochan en este proceso consisten en que ambos imputados eran titulares de dos sociedades anónimas en distintos momentos (Algeciras y Corretajes Group), tenían manejo de las cuentas corrientes bancarias, depositaban dinero, luego lo extraían por ventanilla, generalmente, Cabrera y Gonzáles —éste último no está acusado en este juicio— y, con esa maniobra, ponían en movimiento el dinero.

Sin embargo, afirmó que esa modalidad delictiva —mismas cuentas corrientes y mismas personas— fue juzgada por el TOF2 en la causa citada.

Explicó que estos movimientos bancarios fueron objeto de análisis en el marco del juicio anterior y que, en relación con ellos, su asistido Di Primio ya se





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

defendió. Indicó que, tal es así, que cuando el Fiscal General emitió sus conclusiones finales en este juicio citó la declaración indagatoria que Di Primio prestó ante el otro Tribunal en dicho juicio, lo que demuestra —a su modo de ver— que su asistido ya se defendió del mismo hecho.

Con relación a Miguel Ángel Ortega, el letrado señaló que se daba igual situación y, con el objeto de demostrar la identidad de los hechos, leyó un fragmento de la sentencia condenatoria obrante a fs. 362. Tras la lectura, puso de manifiesto que el rol de la empresa FB Cereales S.A. era hacer figurar que compraba los granos a las empresas apócrifas, a sabiendas de que estas jamás podrían haber vendido cereal y, con ello, no solo blanquear el cereal sino computar crédito fiscal, a raíz de las operaciones inexistentes. Agregó que FG Cereales depositaba dinero en esas cuentas y, luego, se le pagaba al productor oculto. Explicó que estas maniobras no eran una trama de blanqueo de capitales, sino del cereal en negro, es decir de la evasión tributaria.

En definitiva, expresó que las plataformas fácticas correspondientes a ambos juicios son idénticas. La acusación de esta causa relata el mismo acontecimiento histórico por el que ya fueron juzgados los acusados, pese a que en este proceso se le asigne una calificación jurídica distinta, lo que evidencia violación a la prohibición de doble o múltiple juzgamiento por un mismo hecho.

En consecuencia, solicitó la anulación del proceso con relación a sus asistidos, por haberse violado una garantía básica y, en consecuencia, pidió el dictado de la absolución de Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega.

Por su parte, el Dr. **José Ignacio Cabanillas**, en representación de sus asistidos Fernando Luis Cuello y Diego Gastón Ludueña, adhirió al planteo de *ne bis in idem* formulado por el Defensor Público Oficial Dr. Altamira. El letrado remarcó la identidad de las maniobras juzgadas en ambos procesos e indicó que en esta causa se limitaron a copiar y pegar la misma plataforma fáctica, pruebas,





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

personas, objeto y causa, pero atribuyendo a las conductas una figura legal diversa, la de lavado de activos.

Para fundar su planteo, se centró en dos puntos de la acusación. Por un lado, puso de manifiesto que todo el dinero referido en la imputación de esta causa, el flujo de efectivo de los 57 millones de Pesos, no surgió de otro lado que de la compra y venta de cereales, que es lo mismo que en el otro juicio.

Explicó que la estructura con que se fundó en el otro juicio la acusación por el delito de asociación ilícita se apoyó en el esquema de sociedades: empresas reales FG CEREALES y CERCAL; por abajo, las empresas pantallas; luego cuatro empresas de logística o colaboradoras —Árbol Grande, Solfi S.A, etcétera—; y, por último, los exportadores.

Indicó que todo el flujo del dinero se generó comprando y vendiendo cereal, por lo que la maniobra considerada en ambos procesos penales es siempre la misma. Alegó que, con esta acusación, se ha generado un desgaste jurisdiccional para juzgar, ahora por lavado de activos, los mismos hechos ya juzgados en la causa anterior. Remarcó que el propio Fiscal —en sus conclusiones finales— sostuvo que no le parecía justo que este juicio se llevara a cabo y que debía haberse hecho con el otro juicio. Sin embargo, ello no ocurrió y se discuten aquí los mismos hechos y se defiende de ellos otra vez a los mismos imputados.

A su turno el **Dr. Leonardo Monti**, en representación de los citados encartados Cuello y Ludueña, amplió la argumentación de su colega. Respecto a la violación a la garantía del *non bis in ídem*, mencionó sus características, los requisitos de triple identidad de sujeto, objeto y causa y subrayó que es la garantía que ha resultado conculcada en este debate. Así, trajo a colación el alegato de clausura del Ministerio Público Fiscal en orden al análisis de las conductas atribuidas a los imputados Cuello y Ludueña, que resultaron las mismas por las cuales fueron juzgados mediante el pronunciamiento judicial de fecha 9.08.2021 del TOF2, tras la celebración de otro juicio. Agregó que, además, dichas conductas





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

nada tienen que ver con aquellas tendientes a generar una apariencia de licitud respecto de activos que tienen un origen delictivo, descriptas por el art. 303 del CP.

En función de lo expuesto, solicitaron la nulidad de las actuaciones y la absolución de sus defendidos Fernando Luis Cuello y Diego Gastón Ludueña, por violación de la referida garantía constitucional.

Por su parte, el Dr. **Gustavo Taranto**, en representación de los imputados Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara, solicitó la nulidad del proceso por aplicación del principio de *non bis in idem* y, en consecuencia, la absolución de sus asistidos. Citó normativa aplicable (CADDHH y Pacto DCyP).

Explicó que el hecho, según describe la acusación, señala que desde el año 2008 una asociación ilícita cometía delitos tributarios, concretamente evasión y apropiación indebida de tributos. La descripción que se efectúa hace mención del ilícito penal y del origen de los fondos, que es precisamente la causa principal "Cuello p.ss.aa. Asociación ilícita, evasión, etcétera" juzgada por el TOF2. Afirmó que el Fiscal se ocupó de describir aquí esos hechos que habrían producido los 57 millones pesos.

El letrado señaló que los inconvenientes de haber separado los dos procesos fueron admitidos por el propio fiscal, quien reconoció que generaba dificultades a los imputados, a lo que añadió que no era su responsabilidad y que lo consideraría al momento de solicitar las penas correspondientes.

Calificó la decisión de separar los juicios como desafortunada por las consecuencias que tuvo para los imputados y dijo que, frente a ello, había dos alternativas: una, que se realizara un único proceso por todo; la segunda, haber esperado sentencia firme por los otros hechos para poder empezar éste, porque la acusación pone como precedente esos hechos sobre los que no hay sentencia firme.

Por tanto, alegó que el fiscal debe probar que existieron esos delitos y, en consecuencia, ello obliga también a defenderse en este juicio por los delitos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

precedentes ya juzgados. Es decir, se produce la hipótesis de que, en dos juicios y tiempos históricos distintos, los imputados tienen que defenderse de ese tramo de la acusación, porque no hay sentencia firme en el otro proceso y esto es lo que no quiere la ley (art. 18 CN). Refirió que, al comenzar este y el otro proceso, sus asistidos Ferrer y Guevara eran inocentes desde el comienzo, razón por la cual sus clientes tuvieron que defenderse dos veces por lo mismo.

Por último, el Dr. **Julio Antonio Loza**, en representación del imputado Rubén Ceva, calificó el trámite de esta causa como “*un errático derrotero judicial*”, citando Dr. Carlos A. Mahiques, integrante de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, en autos “Fariña”, donde se terminó anulando esa sentencia. Consideró que en este proceso es aplicable dicho pronunciamiento dado el errático derrotero judicial devenido. Alegó que esta causa, como el propio fiscal lo admitió, debió acumularse con la causa principal.

Resaltó que, en el marco de este proceso, el Fiscal sostuvo en dos oportunidades y en alusión al origen de las actuaciones, que “estamos aprendiendo”, como si el Estado fuera corrigiendo los errores que se cometen en los procesos judiciales. El letrado cuestionó dicho proceder y concluyó que en modo alguno ello puede ser cargado a los imputados, ni tener consecuencias para las personas sometidas a proceso.

Alegó la aplicación de la doctrina del árbol envenado, en tanto el Estado no puede valerse de cuestiones de ilicitud en un proceso judicial. Expresó que este proceso debe ser anulado a partir de ese reconocimiento del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, solicitó la absolución de Rubén Adolfo Ceva.

II. En ejercicio del derecho de réplica, el Representante del **Ministerio Público Fiscal** consideró que el planteo de las defensas debe ser rechazado en cuanto —según consideró— no se verifica en el caso la triple identidad como requisito indispensable para su procedencia. Reconoció que se presenta la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

identidad de imputados, pero sostuvo que los hechos y calificaciones jurídicas son distintas, por lo que estamos frente a objetos y causas diferentes.

Señaló que, en todos los juicios por lavado de activos discutidos en juicio, la imputación en sí misma describe la maniobra del delito precedente porque es una exigencia típica de la figura delictiva del art. 303 del CP cuando refiere a “*proveniente de un ilícito penal*”. Es por ello que la base fáctica de una acusación por lavado de activos tiene que remitir al delito precedente. Si no existiera sería atípico y los abogados tendrían una defensa mucho más fuerte que la que ahora introducen.

En virtud de las críticas efectuadas por las defensas sobre la tramitación de la causa, aclaró sus manifestaciones expresando que lo ideal hubiese sido el trámite conjunto y la celebración de un mismo debate por ambos hechos, pero nunca dijo que este proceso debía suspenderse o no realizarse.

Por su parte, aclaró que, al expresar en su alegato a que “*están aprendiendo*” —en referencia al inicio de esta causa y a la labor de la fiscalía— no hay por detrás una mera cuestión semántica, sino que esa frase revela la inexistencia de una política criminal de persecución de los delitos económicos de lavado de activos. Explicó que, desde el año 2013, 2014 en adelante, comenzó a haber una política pública de persecución de estos delitos. Es así que, al tener que llevar a juicio, presentar denuncias, producir debates en casos por hechos y delitos antes inexistentes y que ni siquiera estaban tipificados, se les presentaba una serie de desafíos y la necesidad de optar por decisiones estratégicas.

Reseñó que en la investigación por delito de lavado de activos se comienza con el sistema de prevención contenido en la Ley 25.246, con los reportes de operaciones sospechosas y la Unidad de Información Financiera es quien judicializa. En esta causa se tenía el delito precedente y, a partir de investigaciones patrimoniales, se empieza a generar la imputación por lavado y con esa hipótesis tuvieron que tomar la decisión de retrasar el trámite del proceso por el delito base





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

para poder generar imputaciones paralelas o seguir adelante con lo consolidado procesalmente y remitir la imputación por lavado, que fue lo que sucedió en esta causa.

Remarcó que son decisiones estratégicas que toma quien investiga un delito. Por esas razones, aclaró que lo ideal hubiese sido tener el delito precedente y el delito de lavado de activos en el mismo proceso, pero no se pudo por una cuestión estratégica.

III. Sintetizadas las posiciones de las partes, al objeto de abordar la cuestión de la existencia o no de múltiple persecución indebida (*ne bis in ídem*), resulta menester —de manera preliminar— dar cuenta del origen de las presentes actuaciones y de su relación con las causas conexas.

a) En orden general, la sustanciación de estas causas judiciales se remonta a la investigación de una presunta asociación ilícita de grandes dimensiones destinada a cometer delitos tributarios que, con la intervención de personas físicas y jurídicas, algunas reales y otras apócrifas, pergeñaron y ejecutaron una serie de acciones tendientes al blanqueo del cereal adquirido de manera marginal, a la evasión o reducción de las cuotas tributarias debidas y al goce de sus beneficios económicos.

A tal fin, la organización criminal habría procurado: la creación o aprovechamiento de contribuyentes apócrifos y la conformación de facturación de igual naturaleza; la consecuente ocultación de los productores y consignatarios mediante la utilización de dichas facturas y, finalmente, el blanqueo y la introducción al mercado formal, con apariencia de licitud, de las utilidades espurias obtenidas.

Las maniobras descriptas en el complejo delictivo expuesto fueron investigadas y tramitadas en distintas causas, resultando:

-Asociación ilícita fiscal: “CUELLO, FERNANDO LUIS Y OTROS SOBRE ASOCIACIÓN ILÍCITA FISCAL” (Exp. FCB 62000069/2008)





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

-Evasiones fiscales –simples y agravadas- y apropiación indebida de tributos: CUELLO FERNANDO LUIS y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769” (Expte. N° FCB 27783/2016); LUDUEÑA, DIEGO GASTÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP-DGI Y OTRO” (Expte. N° FCB 36467/2015); F.G. CEREALES S.A. Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS” (Expte. N° FCB 21258/2016); FARÍAS, LUIS FERNANDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769” (Expte. N° FCB 35148/2014) Y EFCE S.A. Y OTROS S/EVASION SIMPLE TRIBUTARIA (EXP. FCB 22063/2016)

-Lavado de activos de origen ilícito: “IMPUTADO: CUELLO, FERNANDO LUIS Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (AFIP- DGI)” (Expte. N° FCB 62002154/2013).

En concreto, la causa de marras en la que se juzga el presunto lavado de activos de origen ilícito resultó un desdoblamiento de la causa “CUELLO, Fernando Luis y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita fiscal” (Expte. FCB 62000069/2008). Así debo señalar que:

A fs. 1098/1105, el Representante del Ministerio Público Fiscal formuló promoción de acción penal en contra de Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rubén Rodolfo Ceva, Matías Elvio Giuggioloni, Rosendo Cesar González, Daniel Ramón Pelayes, Luis Fernando Farías, Julio Daniel Lujan, María Fernanda Farías, Juan José Ros, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Felix Armando Cabral, Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Mauricio Bruno, Néstor Rubén Beltrame, Pablo Martín Zotello y Rafael Gustavo Vega por el delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inc. “c” de la Ley 24.769).

Luego, a fs. 3205/3221, la Fiscal subrogante de Villa María amplió la promoción de la acción penal de fs. 1098/1105. Allí, además de mantener la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

plataforma fáctica y las figuras delictivas fijadas de manera previa, efectuó una descripción más detallada de sus circunstancias de tiempo y modo de comisión.

A la par, dejó expuesto que de la prueba documental obtenida con motivo de los allanamientos judiciales practicados, en particular de las carpetas y sobres incautados en el domicilio de Cuello y Paulus, designados como “Cajas N°1 Bunker” y “Cajas N°2 Bunker”, surgieron nuevos hechos no descriptos en el primigenio requerimiento de instrucción penal.

Así, luego de describir las conductas en el acápite III.2, concluyó que el HECHO PRIMERO (III.2.1) atribuido a Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rubén Rodolfo Ceva, Matías Elvio Giuggioloni, Rosendo Cesar González, Daniel Ramón Pelayes, Luis Fernando Farías, Julio Daniel Lujan, María Fernanda Farías, Juan José Ros, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Félix Armando Cabral, Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Néstor Rubén Beltrame, Pablo Martín Zotello y Horacio Daniel Cismondi encuadraría en el delito de asociación ilícita tributaria (art. 15 inciso “c” de la ley 24.769).

Con relación al nominado HECHO SEGUNDO (III.2.2.a) atribuido a Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus y Rafael Gustavo Vega, la Fiscalía consideró que los nombrados debían responder en calidad de coautores (art. 45 C.P.) y Oscar Martín Rolando en calidad de partícipe secundario (art. 46 C.P.) del delito de lavado de activos provenientes de actos ilícitos previstos en la ley penal tributaria, como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza (art. 303 inciso 2.a, CP)

Con dicha ampliación de requisitoria fiscal, y considerando que en el apartado III) 2.2. se efectuaba una imputación por infracción al art. 303 del CP (lavado de activos), el Juez Federal ordenó —con fecha 21.02.2013— la extracción de copias de las actuaciones FCB 62000069/2008 y, con ello, la formación de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

nueva causa, que fue registrada en el Libro de Entrada de Expedientes de la Secretaría Penal del Tribunal (fs. 3222).

Dicha disposición marcó el inicio de las presentes actuaciones —FCB 62002154/2013/TO1—, cuyo juicio motiva la presente sentencia.

A fs. 3461/3465, la Fiscal a cargo de la Fiscalía de Villa María amplió y reformuló el requerimiento de instrucción de fs. 3205/3221 en contra de los imputados Fernando Luis Cuello, Natalia de los Ángeles Paulus, Diego Gastón Ludueña, Horacio Omar Cismondi, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Rubén Adolfo Ceva, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Walter Fabián Cabrera, Enrique Osvaldo Lorca, Juan Carlos Gugliemini y consideró que sus conductas eran configurativas del delito de lavado de activos agravado (art. 303 apartado a, CP)

Así, a fs. 3738/3788, el Juez Federal de Villa María consideró reunido el mérito convictivo necesario y, con fecha 22.04.2019, dictó el procesamiento de los encartados de mención en los nuevos términos de imputación delictiva definidos por el Ministerio Público Fiscal (conf. art. 306, CPPN).

Finalmente, la querella y Fiscalía Federal de Villa María formularon requerimiento de elevación de la causa a juicio en contra de los acusados por el delito de lavado de activos agravado (art. 303, apartado a, CP).

b) De acuerdo con la reseña efectuada, surge que la imputación delictiva formulada en contra de los acusados abarcaba distintas maniobras que fueron objeto de persecución penal. Una parte de ellas fue juzgada ante el TOF2 (en concreto, las de asociación ilícita tributaria, Expte. FCB 62000069/2008, y evasión y apropiación indebida de tributos, Exptes. FCB 35148/2014 y FCB 21258/2016), en tanto otras maniobras —conexas— fueron objeto del juicio oral y público que motiva la presente sentencia (lavado de activos de origen ilícito).

Ahora bien, revisadas con atención las plataformas fácticas correspondientes a las causas por asociación ilícita fiscal y lavado de activos, surge





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

que los imputados Fernando Luis Cuello, Rubén Adolfo Ceva, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Diego Gastón Ludueña, Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega son acusados y juzgados en este juicio por hechos que fueron ya objeto de debate y sobre los que —por cierto— el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dictó sentencia condenatoria con fecha 9 de agosto de 2021.

En tal sentido, se impone anticipar que los planteos defensivos por afectación de la garantía de prohibición de doble enjuiciamiento —*ne bis in ídem*— en perjuicio de los acusados serán acogidos de manera favorable.

A ese objeto, es preciso recordar que esta garantía proscribela múltiple persecución judicial, simultánea o sucesiva, de un imputado por único suceso y encuentra fundamento en el artículo 18 de la Constitución Nacional, así como —a nivel convencional— en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.4) y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.7), ambos tratados con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, CN).

En el plano legal, halla consagración en la norma del artículo 1 del CPPN, que —de manera expresa— establece por su parte que nadie podrá ser “perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”.

A la par, la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido ese rango constitucional al principio y ha postulado —en cuanto a sus alcances— que no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado, sino en rigor la mera exposición al riesgo de que ello ocurra, mediante un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho; agravio no redimible ni aún con el dictado de una ulterior sentencia absolutoria (conf. T.61.XXIII. Taussing, Jorge F s/ arts. 109 y 110 del CP”, rta. 30.4.91; y P. 25. XXVII, Pelufo, Diego Pedro s/ denuncia por desacato”, rta. 6.2.1996).





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Con este límite al poder punitivo del Estado, según destaca el jurista Julio Maier, *“la ley argentina pretende proteger a cualquier imputado (concebido como aquel indicado, con o sin fundamento, como autor de un delito o partícipe en él, ante cualquier autoridad de la persecución penal, con abstracción del grado alcanzado por el procedimiento) del riesgo de una nueva persecución penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad histórica atribuida (...)*

La idea fundamental... es que no se debe permitir que el Estado, con todos sus recursos y poder, haga repetidos intentos para condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad. (cfr. MAIER, Julio B.J.; Derecho Procesal Penal. Tomo I. Fundamentos, 2ª edición, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 2002, pp. 601-602).

La doctrina y jurisprudencia son pacíficas en señalar que la procedencia de esta garantía que repele la múltiple persecución penal implica constatar la existencia de tres identidades entre los diversos procesos bajo análisis: mismas personas imputadas (eadem persona), mismo objeto (eadem res) y mismo motivo o causa de persecución (eadem causa petendi).

Al propósito de poner de manifiesto que en el caso de autos se configura esa triple identidad, comienzo por traer a colación diversos fragmentos de las imputaciones delictivas que motivaron la apertura del debate por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, en autos “Cuello, Fernando Luis y Otros s/ Asociación Ilícita Fiscal” (Expte. 62000069/2008) de modo de contrastarlos con los hechos fijados por la acusación en la presente causa.

La asociación ilícita tributaria:

Aproximadamente a comienzos del año 2009, Fernando Luis Cuello, en calidad de organizador o jefe, junto con Natalia de los Ángeles Paulus, Jorge Ricardo Ferrer, Sergio Luis Guevara, Diego Gastón Ludueña, Luis Fernando Farías, Julio Daniel Lujan, Rubén Rodolfo Ceva, Rosendo Cesar González, Matías Elvio Giuggioloni, Daniel Ramón Pelayes, María Fernanda Farías, Juan José Ros, Rubén Omar Di Primio, Miguel Ángel Ortega, Félix Armando Cabral,





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Julio Omar González, Marcelo Alberto Sbagzdis, Néstor Rubén Beltrame, Pablo Martín ZOTELO y Horacio Omar Cismondi en calidad de coautores, se pusieron de acuerdo para conformar una organización delictiva que actuó de manera cohesionada y coordinada, con cierta permanencia y habitualidad, contando con una estructura jerárquica, para realizar continuas actividades tendientes a cometer ilícitos tributarios, concretamente delitos de evasión fiscal, obteniendo en consecuencia importantes beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas. La actividad de la asociación ilícita habría tenido lugar en distintas localidades, entre ellas Río Tercero, San Agustín, Despeñaderos, todas de la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal como se mencionó, consistió en la instrumentación de acciones destinadas a ocultar a los verdaderos obligados del pago de obligaciones tributarias, utilizando personas físicas o jurídicas para montar una ficticia operatoria comercial que les permitió disminuir o anular las cargas tributarias que se deberían ingresar por la legítima comercialización del cereal. En este esquema, las firmas F.G. CEREALES SA -cuyos accionistas son los imputados Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara y LUIS F. FARÍAS E HIJOS SRL (luego CERCAL SRL) -cuyos socios eran primigeniamente los imputados Luis Fernando Farías y María Fernanda Farías, y a partir del 14 de septiembre de 2011, los imputados Julio Daniel Luján y Pablo Martín ZOTELO-, operaron habitualmente en el mercado de granos adquiriendo cereal en forma marginal, utilizando para el blanqueo de las operaciones, entre otras, a las firmas ALGECIRAS SA, -cuyos accionistas en el año 2010 y parte del 2011 fueron los imputados Félix Armando Cabral y Julio Omar González y en el año 2011 fueron los imputados Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega, y su representante legal era Juan José ROS-; VERCOVIR SA -cuyos accionistas son los imputados Rosendo Cesar González y Matías Elvio Giuggioloni-; CORRETAJES GROUP SA -cuyos accionistas son los imputados Diego Gastón Ludueña -desde 2007 hasta el 5/4/2010-, Horacio Omar Cismondi y Matías Elvio Giuggioloni- a partir del 5/4/2010 como presidentes y director suplente respectivamente-; PRODUC TAN SRL -cuyos accionistas en el año 2009 y 2010 fueron Néstor Rubén Beltrame y Marcelo Alberto Sbagzdis- y la persona física PELAYES DANIEL RAMON entre otras, todas las cuáles revisten el carácter de contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas que eran controladas por los sujetos componentes de la organización mediante el manejo remoto de claves fiscales y bancarias. Así, la firma F.G. CEREALES S.A., cuya actividad es la venta al por mayor de cereales (Cf., entre otros, fs. 582/585), efectuó importantes movimientos bancarios y, con relación a esta empresa se detectaron en las bases de datos de AFIP proveedores de granos que eran manejadas por la organización ilícita señalada para introducir el cereal de productores ocultos en el mercado legal. En efecto, en un operativo llevado a cabo por la AFIP en el año 2010 se detectó que el 88% de las adquisiciones de granos de FG CEREALES S.A. se realizó a CORRETAJES GROUP SA, PRODUC TAN SRL y VERCOVIR entre otras (Cf. fs. 594/602 de estas actuaciones). Se advirtió el armado de la contabilidad y las declaraciones juradas de esta contribuyente a fin de ingresar el menor monto de impuestos





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

posibles, pero tratando de que, por esa razón, no se levanten sospechas de los organismos de control. Resulta ilustrativo de este extremo la conversación entre el contador Raúl Ceva y Jorge Ferrer, en donde el primero hace referencia a la necesidad de “levantar un poquito la utilidad”, expresión que indudablemente se refiere al porcentaje de ganancia de la empresa, pues luego de ello se menciona el cómputo de gastos contra esa renta (Cf. fs. 711/715). En la documentación secuestrada se observan planillas impresas de control movimiento de bancos rotuladas “Ferrer – Guevara S.H.”, donde aparecen con importes significativos en su mayoría las empresas apócrifas y potencialmente apócrifas utilizadas por “FG Cereales SA”, vgr. Acopiadora Oliva SRL, Algeciras SA. (ver Caja N° 1, lote N° 2). Asimismo, obran órdenes de pago con detalle de cheques a Algeciras SA, Bruno David Marcelo entre otros (fs. 248 a 292 del lote 3 de la Caja N° 1). Por último en el lote 5 de la misma caja obra documentación varia, entre la que cabe destacar un correo e mail de Pablo Coral (oficina2018@gmail.com) para (Comercialsantiago89@yahoo.com) con mención de la firma Algeciras con un saldo de \$ 1.549.000. Se entiende que esto es una expresión de la organización, en donde se les informa a los titulares de FG, sobre el saldo de ALGECIRAS Y ACOPIADORA -que sería ACOPIADORA OLIVA-, donde también se indica detalle de los contratos, de BUNGE y CIA. AGRARIA. También surgen como proveedores de granos de FG CEREALES S.A., en operaciones de significativo valor, las firmas COMERCIAL RIO SANTIAGO SRL, BRACAGLIA JORGE OMAR y MIDAL SRL, que si bien no serían contribuyentes manejadas por la organización, se encuentran incluidas en la base de datos de facturas apócrifas de AFIP, ya que serían meras “pantallas” utilizadas para ocultar a los verdaderos obligados tributarios. (...). En definitiva, la maniobra de LUIS F FARÍAS SRL (luego CERCAL SRL) y F.G. CEREALES SA se concreta mediante la compra “en negro” del grano a productores ocultos, lo que se blanquea a través de “carpetas” creadas a tal fin, para con posterioridad proceder a vender la mercadería, sea directamente o por intermedio de corredores, a quienes necesitan adquirir el producto “blanqueado”. En el presente caso, las contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas utilizadas para documentar la venta de granos son: CORRETAJES GROUP S.A., VERCOVIR S.A., ALGECIRAS S.A., PRODUC TAN SRL, PELAYES DANIEL RAMON, vale decir, creadas y utilizadas por el mismo grupo de empresas que conforman la asociación ilícita. b) Las contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas controladas por la organización. A partir del análisis de la prueba colectada se advierte que los contribuyentes SWETENSON S.A., CORRETAJES GROUP S.A., EFCE S.A., ARBOL GRANDE S.A., VERCOVIR S.A. SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL S.A., ALGECIRAS S.A., PRODUC TAN SRL, PELAYES DANIEL RAMON, en virtud de determinadas características, pueden ser consideradas funcionales a la emisión de facturas falsas así como también, a partir de determinados elementos -accionistas, domicilios, apoderados, etcétera- puede atribuirse su control a los miembros de la agrupación ilícita. Así, la firma VERCOVIR SA tiene como actividad la venta al por mayor de cereales, visualizándose importantes movimientos bancarios - \$ 381 millones desde





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

enero/2010 a la fecha-; sin embargo, se encuentra incluida en la base de datos de la AFIP como una empresa funcional a la emisión de facturas apócrifas por carecer de capacidad económica y por haber informado operaciones con proveedores de granos también incluidos en la base de la AFIP de facturas apócrifas (EL MISTOL SRL Y STELLA MARYS CEREALES SA), por operaciones de significativo valor. Los accionistas de la firma VERCOVIR SA son Rosendo Cesar González y Matías Elvio Giuggioloni. En lo que respecta a Giuggioloni, en principio carecería de un patrimonio acorde a las GANANCIAS de la empresa y no habría participado en la toma de decisiones de la firma. El mismo se desempeña como analista de sistemas en relación de dependencia de la firma SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN S.A., empresa que pertenece y era manejada por Fernando Luis Cuello. La relación de dependencia de Giuggioloni explicaría por qué habría prestado su nombre para aparecer como accionista de otras empresas del grupo como SWETENSON S.A. y CORRETAJES GROUP S.A. En lo que respecta a Rosendo Cesar Gonzalez, su aporte a la asociación ilícita resultó esencial, pues además de aparecer como accionista de esta firma, Gonzalez le facturó a ALGECIRAS SA la suma de pesos diez mil (\$ 10.000) en concepto de “Servicios de Cotización y Comercialización” (facturas del 01/2012 al 08/2012 –ver fs. 143 a 156, Caja A – Lote sobre papel madera rotulado “Doc. Gonzalez Cesar” de 223 fs.), y ello toda vez que Gonzalez se ocupaba, a modo de “mano derecha” de Cuello, de realizar los pagos, por intermedio del contador Ceva, a los apoderados para el retiro de dinero de las cuentas pertenecientes a las firmas ALGECIRAS S.A. y VERCORVIR S.A., entre otras. Así, obran recibos de pago en concepto de “seguridad” y “apoderado” a Walter Cabrera, Juan Carlos Guglielmini y Matias Pelayes, vale decir, a quienes según surge de escrituras públicas tenían poder bancario para el retiro del dinero de las cuentas de las firmas ALGECIRAS S.A. y VERCOVIR S.A., entre otras. En efecto, en el domicilio de Gonzalez se secuestró la siguiente documentación: Escritura N° 17 del 01/03/2011, Poder Especial Administrativo y Bancario otorgado por ALGECIRAS S.A., representado por Felix Armando Cabral, a Walter Fabián Cabrera; Escritura N° 411 del 28/09/2010 – Poder Especial Bancario otorgado por VERCOVIR S.A. a Juan Carlos Guglielmini, Firma Dante Alberto Enrici; Escritura N° 58-Sección B del 15/06/2010 -Poder Especial Administrativo Bancario otorgado por STELLA MARYS CEREALES S.A. a Matías Ezequiel Pelayes, Firma Marcial Ángel Molina; Escritura N° 148 Sección B del 30/12/2010, Poder Especial Bancario otorgado por DISTRIBUIDORA SAN JUSTO SRL a Matías Ezequiel Pelayes, Firma Rubén Darío Barbero; Escritura N° 224 del 01/10/2009 -Poder Especial Administración y Bancario otorgado por COMERCIAL RÍO SANTIAGO SRL a Walter Fabián Cabrera, firmado por Diego Gabriel Sánchez; Escritura N° 167 del 22/07/2011 - Poder Especial Bancario otorgado por ALGECIRAS SA a Cabrera Walter Fabián, Firma Di Primio Rubén Omar (Cf. fs. 266 a 289 contenido en sobre papel madera identificado como Lote n°1). Pero además Gonzalez supervisaba y controlaba los pagos realizados a los supuestos “valijeros”, que son los intermediarios de la venta de cereales entre las empresas ALGECIRAS S.A. y VERCOVIR S.A. y los verdaderos productores





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

de cereales ocultos. Así se puede apreciar que se consignan nombres y seudónimos tales como: DV, JR, BRUNO, NICO, CABEZADOLARES, VICTOR, TETE, ALMADA, CONTADOR CEVA, CACAO, ARRONDO, ORTIZ, ALLOCO, HC, COLO, CACHILO, CJ, DEVOLUCIONES FARÍAS, MARCOS (GUILA), MARCOS (FINANCIERA), DEPOSITO LOGINT, COMISIONES FG, NICO (CULI), MARCOS (CULI), entre otros, y al lado el monto de la compra y el monto de la comisión del medio por ciento, tal como surgen de las planillas diarias que se confeccionaban (ver por ejemplo fs. 8/10 Lote N° domicilio en calle Francisco Ramírez N° 361 de la localidad de Río Tercero). Dichos pagos se habrían realizado de manera personal en efectivo a fin de evitar que queden debidamente registradas las operaciones con los productores. Todo ello luego se ve reflejado por los montos diarios que se cobraba en determinados bancos. A modo de ejemplo, se destacan estas planillas que corren a fojas 28, 123, 158. Cabe agregar que del material probatorio secuestrado en el domicilio de Rosendo Cesar Gonzalez, surge una documentación titulada "Planillas Cesar - Empresa: Cuello y Otros", en que se detallan deudas, recibos de pagos y movimientos de dinero titulados ALGECIRAS, Algeciras (stella Maris), VERCORVIR, FG CEREALES, CEREALCOR, Malpassi por EFCE S.A. (fs. 241/242), períodos 1/2011 a 12/2011. Las planillas identificadas como CESAR Empresa Cuello y Otros que aparecen mes a mes, permiten inferir que son liquidaciones confeccionadas por el Estudio Ceva y entregadas a Cesar Gonzalez, detallando pagos realizados a las siguientes personas: Cesar Gonzalez, Juan Carlos Guglielmini, Walter Cabrera, Julio Gonzalez y Matías Pelayes en concepto de: Monotributo (impuesto, autónomo, obra social), Jubilación (autónomo) y Honorarios, por un monto total mensual que se corresponde con los recibos informales de pago realizados por César Gonzalez al Estudio Contable Ceva que corren agregados a continuación de cada una de esas planillas mensuales. Estas personas, como se indicó supra, tenían poder bancario para el retiro de dinero de las cuentas pertenecientes a las firmas ALGECIRAS S.A., VERCORVIR S.A. y STELLA MARIS CEREALES S.A. Por lo demás, del análisis del contenido de la computadora notebook marca DELL, secuestrada en el domicilio de Cuello y Paulus, surgen varias planillas de caja, con detalles de ingresos y egresos, entre los que se destacan importantes ingresos provenientes de la firma VERCORVIR S.A. La otra firma utilizada por el grupo es CORRETAJES GROUP SA. La misma se encuentra calificada como apócrifa por la AFIP por presentar irregularidades en la cadena de comercialización de granos. Los accionistas de esta empresa son los imputados Diego Gastón Ludueña -desde 2007 hasta el 5/4/2010-, Horacio Omar Cismondi y Matías Elvio Giuggioloni -a partir del 5/4/2010 (Cf. fs. 563, 569 de estas actuaciones) como presidentes y director suplente respectivamente-. La firma tiene como actividad la venta al por mayor de cereales y posee domicilio declarado ante la AFIP en calle Virrey del Pino 2453 piso 2 dpto 13 de la ciudad de Buenos Aires, en el cual se procedió a realizar el allanamiento de fecha 06/09/2012, detectándose que en el mismo funciona un estudio contable en el cual se archiva determinada documentación de la firma, pero no se desarrolla ningún tipo de actividad comercial (Cf. fs. 1482/1483 de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

estas actuaciones). A pesar de ello, CORRETAJES GROUP S.A. habría efectuado importantes movimientos bancarios -\$ 195 millones desde enero/2010 a la fecha-, lo que no se condicen en nada con el escaso patrimonio declarado por la misma, resaltándose la detección en las bases de datos de compras a proveedores de granos COMERCIAL RIO SANTIAGO SRL y MIDAL SRL que se encuentran incluidos en la base de AFIP de facturas apócrifas ("BASE eAPOC"), en operaciones de significativo valor. En lo que respecta a los accionistas de esta empresa, cabe decir que en relación a Matías Elvio Giuggioloni corresponde remitirse a lo expuesto supra en cuanto a que no poseía un patrimonio acorde a las GANANCIAS de la empresa, desempeñaba una actividad que nada tiene que ver con la comercialización de cereales y era empleado en relación de dependencia de la firma SISTEMA Y CONTROL DE GESTION S.A. En cuanto a la intervención de Diego Gastón Ludueña, cabe señalar que se desempeñó como accionista de esta sociedad desde 2007 hasta el 5/4/2010 y, como se verá, formaba parte, junto con Horacio Omar Cismondi, del círculo íntimo de Fernando Luis Cuello. Así, Horacio Omar Cismondi aparece como cotitular de cuentas bancarias de CORRETAJES GROUP S.A., es decir, estaba autorizado para efectuar retiros de dinero de dicha cuenta (Cf. fs. 563, 564, 569 de estas actuaciones). En el domicilio de Fernando Luis Cuello y Natalia de los Angeles Paulus se secuestraron elementos que, junto con las pruebas mencionadas, permiten sostener que Ludueña y Cismondi eran personas de confianza de Cuello. En efecto, se secuestraron dos escrituras públicas en las que Ludueña, en nombre y representación de SWETENSON SA, autoriza a Paulus, Cuello y Horacio Omar Cismondi para circular en los vehículos BMW X3, dominio HRQ-569 y Mercedes Benz dominio IRN-293 (Cf. fs. 28/30 y 126 respectivamente de la carpeta de prueba N° 1 titulada Bunker). También en el mismo domicilio se secuestró un título de una motocicleta marca BUELL, modelo XB 12 X, dominio 979GEE, a nombre de Diego Gastón Ludueña, titular desde el 21/11/11, y en el mismo título consta una autorización para conducir a favor de Fernando Luis Cuello (fs. 163). Además obra una escritura pública de fecha 3 de enero de 2012 en la que Diego Gastón Ludueña autoriza a conducir libremente a Paulus, Cuello y, nuevamente, a Horacio Omar Cismondi. Por último, en una carpeta transparente obran títulos de propiedad a nombre de SWETENSON S.A., y dentro de esta carpeta existe un poder general de administración y disposición, de fecha 17/11/2009, que SWETENSON S.A., representado por Diego Gasón Ludueña, efectúa a favor de Fernando Luis Cuello. Otro indicio que permite atribuir el control de esta sociedad por el grupo bajo análisis es que se informaron retenciones practicadas por CORRETAJES GROUP S.A. en el Impuesto a las Ganancias a Fernando Luis Cuello, persona imputada como uno de los organizadores o jefes de la asociación ilícita (Cf. fs. 603 de estas actuaciones). Asimismo, en el allanamiento efectuado en el domicilio de Cuello y Paulus se encontró una tarjeta azul de autorización de uso de un vehículo BMW X5 dominio HMI865 a nombre de Fernando Cuello, cuyo titular es, precisamente, CORRETAJES GROUP S.A. (fs. 1 de lote 14 de la caja nro. 1 de la documentación secuestrada en domicilio). Por último, según informe del





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Banco de la Nación Argentina el imputado Miguel Angel Ortega, quien aparece como accionista de la firma ALGECIRAS, se encuentra como titular de la cuenta corriente N° 9000251/43 perteneciente a la firma CORRETAJES GROUP SA. (fs. 1975). Otras de las contribuyentes controladas por la organización son las firmas EFCE SA, ARBOL GRANDE S.A. y SWETENSON SA. En efecto, Diego Gastón Ludueña era accionista, junto a Natalia de los Ángeles Paulus -concubina de Cuello- de las dos últimas contribuyentes, dedicadas al transporte de granos que fueron utilizadas por la asociación ilícita. La vinculación de éstas dos empresas con el grupo surge en que para la comercialización de esta mercadería se necesita de un medio de transporte, el cual no puede ser ajeno a la mecánica del comercio marginal de granos, pues dicho transporte siempre va acompañado de una serie de formalidades, plasmadas en las respectivas cartas de porte, que necesariamente debieron disfrazarse para ocultar a los verdaderos productores de granos. Cabe destacar que SWETENSON S.A. le practicó retenciones del Impuesto a las Ganancias a Fernando Cuello (Cf. fs. 603/604 de estas actuaciones), otro de los elementos que sustenta la hipótesis del control de esta sociedad por parte de la asociación ilícita investigada. La firma SWETENSON SA al igual que ARBOL GRANDE S.A., realizaron una importante inversión en automotores, algunos de uso particular y otros destinados al transporte de cargas, y se advierten movimientos de cartas de porte vinculados con esta firma, desde el 01/01/2009 en adelante, aproximadamente unas 760 en las que figura como transportista y están relacionadas con empresas incorporadas a la base AFIP de facturas apócrifas (Por ejemplo, CINGOLANI MIGUEL ANGEL, PRODUC TAN SRL, MIDAL SRL, ARGANLY SRL), y otras que no serían funcionales a la emisión de facturas apócrifas, como CERREALCOR S.R.L., AGRONEGOCIOS CORRALITO S.A., FG CEREALES S.A. y CERCAL S.R.L., pero que serían usuarias de proveedores de aquel tipo de documentos. El grupo ha desarrollado la actividad de transporte de granos no sólo a través de la firma SWETENSON SA -cuyos accionistas son los imputados Diego Gastón Ludueña y Natalia de los Ángeles Paulus- sino también de ARBOL GRANDE S.A. -cuyos accionistas también son los imputados Diego Gastón Ludueña y Natalia de los Ángeles Paulus-, servicio prestado habitualmente a las empresas mencionadas en este apartado a efectos de colaborar en las maniobras descriptas. En la firma ARBOL GRANDE S.A. se aprecia una migración de empleados de/hacia la firma SWETENSON S.A., observándose un importante movimiento de cartas de portes (250, entre el 01/07/2007 y 13/07/2010), donde la firma aparece como transportista de CERCAL SRL y FC CERALES SA, tal como se ha expuesto supra, así como de contribuyentes que serían usuarias de facturas apócrifas. Cabe destacar, que entre los elementos secuestrados en el domicilio de Cuello y Paulus se localizó un documento referido a un loteo de 3 has, 8.000 m2 en la ciudad de Rio III, registrado a nombre de ARBOL GRANDE SA ; relacionado con ello, a fs 5 de sobre papel madera nro 1 de caja nro 1 del secuestro realizado en el domicilio, obra recibo de pago de servicio de agrimensura extendido a nombre de Fernando Cuello, lo que nos indicaría que era él quien en realidad realizaba las operaciones de rutina de esta empresa, circunstancia que revela, además de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

las mencionadas, el control de esta sociedad por parte de la agrupación. Otro de los indicadores de que SWETENSON SA., CORRETAJES GROUP S.A., EFCE S.A., ARBOL GRANDE S.A., VERCOVIR S.A. están controladas y dirigidas por este grupo es que poseen su domicilio fiscal o alternativo (este último dato fue obtenido de entidades financieras que tienen obligación de informar a la AFIP) en un mismo lugar, la calle Hipólito Yrigoyen 1284, piso 3, departamento 6 de la Ciudad de Buenos Aires (Cf. fs. 684/687 de estas actuaciones). En similar sentido, cabe señalar que en el allanamiento realizado en el domicilio particular de Fernando Cuello y Natalia Paulus se secuestró documentación relacionada con importantes emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Río Tercero y en la ciudad de Buenos Aires a nombre de las empresas del grupo: EFCE SA, SWETENSON SA, CORRETAJES GROUP SA y ARBOL GRANDE SA. (...) Por su parte, la firma ALGECIRAS SA declaró como actividad la venta al por mayor de cereales. En el año 2010 fueron accionistas de la empresa los imputados Félix Armando Cabral y Julio Omar González. A partir de 2011 los accionistas son los imputados Rubén Omar Di Primo y Miguel Ángel Ortega. El representante legal de la firma es el imputado Juan José Ros. Respecto de esta empresa, se visualizaron importantes movimientos bancarios -\$ 543 millones-, resaltándose la detección en la base de datos de AFIP de proveedores de granos del mismo grupo económico investigado (CORRETAJES GROUP SA y FG CEREALES SA) como así también de proveedores de granos que se encuentran incluidos en la "BASE eAPOC" de la AFIP (STELLA MARYS CEREALES SA, ARADORES SRL), en operaciones de significativo valor. Esta contribuyente sería funcional a la emisión de facturas apócrifas pues la planta de acopio de cereales declarada se encuentra en desuso, vacía y con las oficinas cerradas. Por otra parte, algunos de los accionistas de la firma ALGECIRAS S.A. carecerían, en principio, de capacidad económica acorde al volumen de actividad comercial desplegada por esta contribuyente y no habrían participado en la toma de decisiones de la sociedad, más bien su colaboración habría consistido en facilitar sus datos personales para aparecer como accionistas, firmando en esa calidad documentos necesarios para el desarrollo de la empresa. Así, en el caso de Félix Armando Cabral y Julio Omar González, tendrían como actividad la parquización de manera independiente, percibiendo un ingreso que no superaría los siete mil pesos (\$ 7000). El imputado Rubén Omar Di Primo aparece como firmante de la cuenta corriente N°2130138030 perteneciente a la firma ALGECIRAS SA (fs. 2375). En lo que respecta a Miguel Ángel Ortega aparece como firmante de la cuenta corriente N° 900251/43 perteneciente a la firma CORRETAJES GROUP (fs. 1975). Cabe destacar que en el domicilio particular de los imputados Cuello y Paulus se secuestró un contrato de venta, certificado por escribana Stella Maris Olguin, por el cual EFCE S.A. le vende a ALGECIRAS S.A. dos terrenos en la suma de u\$s 164.800, celebrado el 20/05/2011 y que fue firmado por Diego Gastón Ludueña como director suplente de la firma E.F.C.E. SA y por Felix Armando Cabral en su carácter de Presidente de la firma ALGECIRAS SA. Asimismo, se han detectado con respecto a esta contribuyente conversaciones telefónicas de interés para esta





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

causa pues revelan que esta sociedad era utilizada por el grupo para emitir facturas apócrifas. En efecto, en la conversación 10 (CD 16) línea 3571-423457, entre el imputado Jorge Ricardo Ferrer y un empleado del Banco Francés, el segundo pone en conocimiento del primero que la UIF ha detectado alguna irregularidad con respecto a ALGECIRAS S.A. y que deben presentar determinada documentación pues, de lo contrario, el banco les cerraría la cuenta (Cf. fs. 650 del expediente principal). De similar contenido es la Conversación 12 (CD 16) línea 3571-423457 (Cf. fs. 650 del expediente principal). A su vez, en la conversación N° 1 (CD 17) línea 3571-423457, Ferrer discute con el contador Ceva acerca de un préstamo de dinero a ALGECIRAS S.A. (Cf. fs. 650 del expediente principal). Por otro lado, en la conversación del 1/6/2012, línea 3571- 423457, Jorge Ferrer hace referencia a la provincia de la cual proviene la mercadería que se vende a nombre de ALGECIRAS S.A., y le indica que: "las facturas (...) que emitimos ahora son este, lo que se hace con ALGECIRAS... (Cf. fs. 707). En la conversación del 29/6/2012, línea 3571-423457, entre Jorge Ferrer y el contador Rubén CEVA se evidencia la relación entre los miembros del grupo y de las empresas manejadas por ellos (Cf. fs. 709/710). En efecto, se habla de una factura de SWETENSON S.A. probablemente a FG CEREALES S.A. y se menciona como responsable de la empresa a "Natalia" que, por el contexto de la conversación, sería la imputada Paulus, concubina de Cuello. Se advierte como preocupación de los interlocutores el pago del IVA de esa factura: Ceva: "hay que hacer la factura esa \$ 54.000, más IVA, a SWETENSON... Jorge: \$ 54.000, 00, más IVA. Ceva: Yo no sé quien va a pagar ese IVA, impuesto a los coso Jorge: Se lo iremos a cobrar a ellos (...) Ceva: No porque está la Natalia tras de esto (...) Ceva: Y si después le errás con la mina esta, lo lo carcome al otro (...) En el mismo sentido, cabe mencionar a la conversación entre Ferrer y Ceva en donde hablan de un préstamo a SWETENSON S.A. (Cf. fs. 711/712). Por último, la firma SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN SA – cuyos accionistas son los imputados Néstor Rubén Beltrame y Marcelo Alberto Sbagzdis- tiene como actividad la provisión de servicios informáticos y su vinculación con el grupo surge por constatarse que le practicó retenciones del Impuesto a las Ganancias a Fernando Cuello (Cf. fs. 603/604 de estas actuaciones), y porque uno de los empleados de esta sociedad, Matías Elvio GIUGGIOLINI, posee un significativo plazo fijo y acreditaciones bancarias en cotitularidad con SWETENSON S.A. Asimismo, en el domicilio en donde residían Cuello y Paulus se localizó una chequera del Banco Galicia, perteneciente a la cuenta N° 1420/1279/9 de titularidad de SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN SA, con cheques en blanco firmados por Néstor Rubén Beltrame, en su carácter de presidente de esta sociedad. Pues bien, el hecho de que en el domicilio de Cuello y Paulus se halla encontrado una chequera en blanco con firmas del supuesto responsable de la empresa no sólo demuestra que esta contribuyente es funcional a la emisión de facturas apócrifas, sino también que el grupo tenía el control de esta sociedad. Entre sus clientes figuran contribuyentes que fueron considerados funcionales a la emisión de comprobantes apócrifos (Por ejemplo PRODUC TAN SRL, LOPEZ MARCELINO, CITADINI ALFREDO, PRIGIONI RICARDO) y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

otras empresas que no lo serían, como CEREALCOR SRL, JALIL HERMANOS SC, FG CEREALES SRL, pero que serían usuarias de proveedores funcionales a la emisión de facturas apócrifas. En definitiva, de los elementos mencionados en este apartado se advierte un grupo que en forma coordinada crea, controla y utiliza a determinadas contribuyentes que si bien en el aspecto formal y ante determinados organismos públicos aparecen como proveedoras de granos, no poseen capacidad de efectuar esas tareas. Estas contribuyentes son estructuras utilizadas sólo a efectos de documentar las mencionadas adquisiciones de granos y/o prestación de servicios conexos que permita introducir y hacer circular en el mercado legal granos provenientes del mercado marginal, adquiridos a productores ocultos. Asimismo, utilizan a otras contribuyentes que realizan servicios conexos, como los de transporte, que son funcionales a la maniobra pues trasladan el cereal documentado a nombre de las "carpetas" controladas por la asociación ilícita. Las operaciones realizadas por el grupo desde el año 2009 a la fecha habrían superado los \$ 1.000.000.000, según los movimientos bancarios realizados por las empresas CORRETAJES GROUP SA, VERCOVIR SA, F G CEREALES SA, CERCAL SRL, ALGECIRAS SA, SWETENSON SA, ARBOL GRANDE SA, EFCE SA, SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN SA. Además, se advierte un incremento patrimonial significativo reflejado en importantes adquisiciones de inmuebles urbanos y rurales, vehículos de transporte y particulares de alta gama a nombre de sociedades integradas por sujetos vinculados con los hechos, cuyo origen está explicado en las utilidades generadas por la maniobra de evasión mencionada en el párrafo anterior."

De igual modo, estimo propicio exponer algunos pasajes de las conclusiones a las que arribó el TOF2 en la sentencia condenatoria dictada en contra de los aquí imputados, con fecha 9 de agosto de 2021 (no firme). En concreto, allí puede leerse:

*"la firma **F.G. CEREALES S.A.**, cuyos principales accionistas eran **Jorge Ricardo FERRER y Sergio Luis GUEVARA** y cuya actividad, entre otras es la venta al por mayor en comisión o consignación de cereales -actividad 511111- y la venta al por mayor de cereales -actividad 512111- (Cf. fs. 582/585), **efectuó importantes movimientos bancarios** y, con relación a esta empresa, se detectaron en las bases de datos de AFIP, proveedores de granos que serían manejadas por la estructura investigada para introducir el cereal de productores ocultos en el mercado legal. En efecto, en un operativo llevado a cabo por la AFIP en el año 2010 se detectó que el 88% de las adquisiciones de granos informadas por FG CEREALES S.A. se concentraron en cinco (5) proveedores, entre las cuales se encontraban CORRETAJES GROUP S.A., PRODUC TAN SRL. y VERCOVIR S.A. (Cf. fs. 594/602) las*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

cuales fueron informados por el Operativo Granos por registrar adquisiciones de granos de dudoso origen y/o por tratarse de sujetos sin capacidad operativa (...)

*En la documentación secuestrada en autos se observan planillas impresas de control de movimiento de bancos rotuladas "FERRER – GUEVARA SH.", donde aparecen con importes significativos en su mayoría, las empresas apócrifas y potencialmente apócrifas utilizadas por "FG CEREALES SA", vgr. ACOPIADORA OLIVA SRL., ALGECIRAS SA. (ver Caja N° 1, lote N° 2). Asimismo, obran órdenes de pago con detalle de cheques a ALGECIRAS SA, BRUNO David Marcelo entre otros (fs. 248 a 292 del lote N° 3 de la Caja N° 1). Respecto a estas órdenes de pago, el testigo Marcos Oscar CREMA, DNI 27.869.932, Contador Público Nacional, que trabaja en la Fiscalización N°1, de la Dirección Regional Río Cuarto de AFIP, con una antigüedad en Fiscalización de 17 años, y quien estuviera a cargo de la fiscalización de la firma FG CEREALES SA. (entre otras), expresó, que solicitaron a la firma órdenes de pago, donde figuraban como habían pagado esas operaciones y como primer punto notó que las órdenes de pago, al igual que las cartas de porte, tampoco estaban firmadas por estos sujetos apócrifos. Refirió, que circularizó a los bancos, solicitando el anverso y reverso de los cheques utilizados para pagar y que de la información que recibió por parte de la entidad bancaria, observó que los cheques que emitió la firma FG CEREALES, estaban emitidos a la orden de estas "carpetas" apócrifas y muchas veces esos cheques tenían otro endoso, de otra "carpeta" apócrifa que también fue utilizada por FG CEREALES y terminan siendo cobrados por los apoderados de estas personas. Manifestó que, en otros casos, FG CEREALES directamente no le aportó las órdenes de pago solicitadas y no pudieron demostrarle como se pagaron las operaciones. Remarcó, que lo que se observaba mucho, **eran transferencias bancarias realizadas directamente a las cuentas de estos sujetos que estaban incluidos en la base eAPOC, las cuales, observando los resúmenes de cuenta bancarios de estas firmas, notaron que eran retiradas en efectivo, por caja o a través de cheques cobrados, cheques inferiores a cuarenta y nueve mil novecientos pesos (\$ 49.900,00) para poder ser cobrados por caja y no tener que ser depositados, perdiéndole el rastro al dinero. Señaló que no es una operatoria común; llamaba la atención el hecho de que ese dinero haya sido retirado en efectivo. Puntualizó, que lo mismo que notaron ellos en ese sentido, figuraba en la causa, un informe de la UIF -Unidad de Información Financiera- donde se determina esto. En otras palabras, expresó que había informes de operaciones sospechosas donde daban cuenta de esto, que se realizaban transferencias millonarias a las cuentas de estas "carpetas" apócrifas, y que inmediatamente, al día siguiente, eran retiradas en efectivo o cobrados por caja con cheques inferiores a cincuenta mil pesos (\$ 50.000,00) ... (el resaltado es propio).***

Continuando con la valoración efectuada por el TOF2 respecto de las empresas apócrifas, se estableció allí que:





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

“...A partir del análisis de la prueba colectada y respecto de los contribuyentes funcionales a la emisión de facturas apócrifas controladas por la estructura, se advierte que **SWETENSON S.A., CORRETAJES GROUP S.A., EFCE S.A., ARBOL GRANDE S.A., VERCOVIR S.A. SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL S.A., ALGECIRAS S.A., PRODUC TAN SRL. y PELAYES DANIEL RAMON**, en virtud de determinadas características, son consideradas funcionales a la emisión de facturas falsas, así como también, a partir de determinados elementos -accionistas, domicilios, apoderados, etcétera- se atribuye su control a los miembros de la estructura bajo análisis. (...)

Así, la firma **VERCOVIR S.A.** tiene como actividad la venta al por mayor de cereales, visualizándose **importantes movimientos bancarios -\$ 381 millones desde 01/2010 al 2011-**; sin embargo, se encuentra incluida en la base de datos de la AFIP-DGI como una empresa funcional a la emisión de facturas apócrifas por carecer de capacidad económica y por haber informado operaciones con proveedores de granos también incluidos en la base de la AFIP de facturas apócrifas (EL MISTOL SRL. Y STELLA MARYS CEREALES S.A.), por operaciones de significativo valor. (...)

Los accionistas de la firma **VERCOVIR S.A.** son Rosendo Cesar GONZÁLEZ y Matías Elvio GIUGGIOLONI. En lo que respecta a GIUGGIOLONI, carece de un patrimonio acorde a las GANANCIAS de la empresa y no participó en la toma de decisiones de la firma. El mismo se desempeñaba como analista de sistemas en relación de dependencia de la firma SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN S.A., empresa que pertenece y era manejada por Fernando Luis CUELLO. La relación de dependencia de GIUGGIOLONI explica por qué prestó su nombre para aparecer como accionista de otras empresas del grupo, como SWETENSON S.A. y CORRETAJES GROUP S.A. En lo que respecta a Rosendo Cesar GONZÁLEZ, aparecer como accionista de esta firma, GONZÁLEZ le facturó a ALGECIRAS S.A. la suma de pesos diez mil (\$ 10.000) en concepto de “Servicios de Cotización y Comercialización” (facturas del 01/2012 al 08/2012 –ver fs. 143 a 156, Caja A, sobre papel madera rotulado “Doc. González Cesar” de fs. 223), y **ello toda vez que GONZÁLEZ se ocupaba de realizar los pagos, por intermedio del contador CEVA, a los apoderados para el retiro de dinero de las cuentas pertenecientes a las firmas ALGECIRAS S.A. y VERCORVIR S.A., entre otras.** Así, obran recibos de pago en concepto de “seguridad” y “apoderado” a Walter Cabrera, Juan Carlos Gugliemini y Matías Pelayes, vale decir, a quienes según surge de **escrituras públicas tenían poder bancario para el retiro del dinero de las cuentas de las firmas ALGECIRAS S.A. y VERCOVIR S.A., entre otras.** En efecto, en el domicilio de GONZÁLEZ se secuestró la siguiente documentación: Escritura N°17 del 01/03/2011, Poder Especial Administrativo y Bancario otorgado por ALGECIRAS S.A., representado por Félix Armando CABRAL, a Walter Fabián Cabrera; Escritura N°411 del 28/09/2010 -Poder Especial Bancario otorgado por VERCOVIR S.A.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

a Juan Carlos Guglielmini, Firma Dante Alberto Enrici; Escritura N°58 -Sección B del 15/06/2010 -Poder Especial Administrativo Bancario otorgado por STELLA MARYS CEREALES S.A. a Matías Ezequiel Pelayes, Firma Marcial Ángel Molina; Escritura N°148 -Sección B del 30/12/2010, -Poder Especial Bancario otorgado por DISTRIBUIDORA SAN JUSTO SRL. a Matías Ezequiel Pelayes, Firma Rubén Darío Barbero; Escritura N°224 del 01/10/2009 -Poder Especial Administración y Bancario otorgado por COMERCIAL RÍO SANTIAGO SRL. a Walter Fabián Cabrera, firmado por Diego Gabriel Sánchez; Escritura N°167 del 22/07/2011 - Poder Especial Bancario otorgado por ALGECIRAS S.A. a Cabrera Walter Fabián, Firma DI PRIMIO Rubén Omar (Cf. fs. 266 a 289 contenido en sobre papel madera identificado como Lote N°1). Pero además GONZÁLEZ supervisaba y controlaba los pagos realizados a los “valijeros”, que son los intermediarios de la venta de cereales entre las empresas ALGECIRAS S.A. y VERCOVIR S.A. y los verdaderos productores de cereales ocultos. Así se puede apreciar que se consignan nombres y seudónimos tales como: DV, JR, BRUNO, NICO, CABEZADOLARES, VICTOR, TETE, ALMADA, CONTADOR CEVA, CACAIO, ARRONDO, ORTIZ, ALLOCO, HC, COLO, CACHILO, CJ, DEVOLUCIONES FARÍAS, MARCOS (GUILA), MARCOS (FINANCIERA), DEPOSITO LOGINT, COMISIONES FG, NICO (CULI), MARCOS (CULI), entre otros, y al lado el monto de la compra y el monto de la comisión del medio por ciento, tal como surgen de las planillas diarias que se confeccionaban (ver por ejemplo fs. 8/10 domicilio en calle Francisco Ramírez N°361 de la localidad de Río Tercero).

El testigo Juan Manuel NIETO expresó que respecto de ALGECIRAS se detectaron algunas anotaciones en donde, en una hoja, aparecía una fecha, el nombre de la firma ALGECIRAS, un listado de nombres de pila, sobrenombres e iniciales, al lado de cada uno de ellos había un monto y al final la sumatoria de todos esos montos con la leyenda Banco Nación. Señaló que entre los **resúmenes bancarios que también detectó en el allanamiento, yendo al resumen bancario del Banco Nación del día mencionado en esa hoja citada, se encontraba exactamente ese monto debitado y al lado la leyenda de “cobrado por caja”.** Refirió que eso le generó la convicción que esas eran extracciones de dinero que realizaba la firma a los efectos de pagar a sus proveedores que era la compra de granos, actividad que la firma declaraba.

Dichos pagos se habrían realizado de manera personal y en efectivo, a fin de evitar que queden debidamente registradas las operaciones con los productores. Todo ello luego se ve reflejado por los montos diarios que se cobraba en determinados bancos. (...)

La otra firma utilizada por el grupo es **CORRETAJES GROUP SA.** La misma se encuentra calificada como apócrifa por AFIP por presentar irregularidades en la cadena de comercialización de granos. Los accionistas de esta empresa son los imputados **Diego Gastón LUDUEÑA** -desde 2007 hasta el 5/4/2010-, Horacio Omar CISMONTI y Matías Elvio GIUGGIOLONI- a partir del 5/4/2010 (Cf. fs. 563, 569 de autos) como presidentes y director suplente respectivamente- A pesar de ello, **CORRETAJES GROUP S.A.** habría





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

efectuado importantes movimientos bancarios -\$ 195 millones desde enero/2010 al 2018-, lo que no se condicen en nada con el escaso patrimonio declarado por la misma. (...)

Por su parte, la firma **ALGECIRAS S.A.** declaró como actividad la venta al por mayor de cereales. En el año 2010 fueron accionistas de la empresa los imputados Félix Armando CABRAL y Julio Omar GONZÁLEZ. A partir de 2011 los accionistas son los imputados **Rubén Omar DI PRIMO y Miguel Ángel ORTEGA**. El propio DI PRIMO lo reconoció al momento de prestar declaración en la sala de audiencias, expresando al comienzo de la misma, reconocer haber prestado su consentimiento para formar parte de una sociedad en el año 2001, en donde le ofrecieron a él la presidencia y la vicepresidencia a ORTEGA, nombrando puntualmente la empresa ALGECIRAS S.A.

Respecto de esta empresa, se visualizaron **importantes movimientos bancarios -\$ 543 millones-**, resaltándose la detección en la base de datos de AFIP de proveedores de granos del mismo grupo económico investigado (CORRETAJES GROUP S.A. y FG CEREALES S.A.) como así también de proveedores de granos que se encuentran incluidos en la "base eAPOC" de la AFIP (STELLA MARYS CEREALES S.A., ARADORES SRL.), en operaciones de significativo valor. (...)

Por otra parte, algunos de los accionistas de la firma ALGECIRAS S.A. carecerían, en principio, de capacidad económica acorde al volumen de actividad comercial desplegada por esta contribuyente y no habrían participado en la toma de decisiones de la sociedad, más bien su colaboración habría consistido en facilitar sus datos personales para aparecer como accionistas, firmando en esa calidad documentos necesarios para el desarrollo de la empresa. Así, en el caso de Félix Armando CABRAL y Julio Omar GONZÁLEZ, tendrían como actividad la parquización de manera independiente y cuya situación procesal ya ha sido tratada precedentemente. **El imputado Rubén Omar DI PRIMIO aparece como firmante de la cuenta corriente N° 2130138030 perteneciente a la firma ALGECIRAS SA (fs. 2375). Al respecto DI PRIMIO declaro que como presidente siempre firmaba cheques en blanco, hacía depósitos en diferentes entidades bancarias y efectuaba retiros de dinero de dichas entidades el cual entregaba al contador Tallarico, quien a su vez se comunicaba con CUELLO. En lo que respecta a Miguel Ángel ORTEGA aparece como firmante de la cuenta corriente N° 900251/43 perteneciente a la firma CORRETAJES GROUP (fs. 1975) (...)**

"En el domicilio de Fernando Luis CUELLO y Natalia de los Ángeles PAULUS se secuestraron elementos que, junto con las pruebas mencionadas, permiten sostener que **LUDUEÑA y CISMONTI eran personas allegadas de CUELLO**. En efecto, se secuestraron dos escrituras públicas en las que **LUDUEÑA, en nombre y representación de SWETENSON SA, autoriza a PAULUS, CUELLO y Horacio Omar CISMONTI para circular en los vehículos BMW X3, dominio HRQ-569 y Mercedes Benz dominio IRN-293 (Cf. fs. 28/30 y 126 respectivamente de la carpeta de prueba N°1 titulada "Bunker"). También en el mismo domicilio se secuestró un título de una**





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

motocicleta marca BUELL, modelo XB 12 X, dominio 979GEE, a nombre de Diego Gastón LUDUEÑA, titular desde el 21/11/11, y en el mismo título consta una autorización para conducir a favor de Fernando Luis CUELLO (fs. 163). Al respecto, el testigo Daniel César SALGADO, DNI 26.546.991, Contador Público, actualmente desempeñándose como Jefe de Distrito Bell Ville de la Dirección Regional Río Cuarto, con una antigüedad total de 16 años en la repartición, al serle **preguntado sobre los bienes declarados por LUDUEÑA como titular, el mismo expresó que poseía bajo su titularidad una moto marca BUELL que había sido adquirida en el año 2011 y que de la documental secuestrada se pudo detectar una actuación notarial que fue llevada a cabo por la Escribana María Fernanda FARIAS –accionista de la firma LUIS FARIAS e HIJOS SRL.- en la cual LUDUEÑA autorizaba a CUELLO, PAULUS y CISMONTI a conducir la moto por todo el territorio del país y países limítrofes. Obra asimismo, una escritura pública de fecha 03/01/2012 en la que Diego Gastón LUDUEÑA autoriza a conducir libremente a PAULUS, CUELLO y, nuevamente, a Horacio Omar CISMONTI (...)**

Por último, en una carpeta transparente obran títulos de propiedad a nombre de SWETENSON S.A., y dentro de esta carpeta existe un poder general de administración y disposición, de fecha 17/11/2009, que SWETENSON S.A., representado por Diego Gastón LUDUEÑA, efectúa a favor de Fernando Luis CUELLO. (...)

Cabe destacar que SWETENSON S.A. le practicó retenciones del Impuesto a las GANANCIAS a Fernando CUELLO (Cf. fs. 603/604 de autos), otro de los elementos que sustenta la hipótesis del control de esta sociedad por parte de la estructura investigada. **La firma SWETENSON S.A. al igual que ARBOL GRANDE S.A., realizaron una importante inversión en automotores, algunos de uso particular y otros destinados al transporte de cargas. (...)**

Otro de los indicadores de que SWETENSON S.A., CORRETAJES GROUP S.A., EFCE S.A., ARBOL GRANDE S.A., VERCOVIR S.A. están controladas y dirigidas por este grupo es que poseen su domicilio fiscal o alternativo (este último dato fue obtenido de entidades financieras que tienen obligación de informar a la AFIP) en un mismo lugar, la calle Hipólito Irigoyen N° 1284, piso 3ro, departamento 6, de la Ciudad de Buenos Aires (Cf. fs. 684/687). En similar sentido, cabe señalar que en el allanamiento realizado **en el domicilio particular de Fernando CUELLO se secuestró documentación relacionada con importantes emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Río Tercero y en la ciudad de Buenos Aires –Puerto Madero- a nombre de las empresas del grupo: EFCE S.A., SWETENSON S.A., CORRETAJES GROUP S.A. y ARBOL GRANDE S.A.** Así, de las fiscalizaciones de las empresas citadas, y como resultado de las fiscalización llevada a cabo a las mismas por el Contador SALGADO, se determinó que las operaciones inmobiliarias efectuadas por EFCE S.A. consistían en la adquisición de terrenos por allá en el año 2007, más precisamente de un terreno de 3 hectáreas en la ciudad de Río Tercero que fue adquirida a ARBOL GRANDE S.A.; la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

adquisición de otros terrenos a los señores Santone, en ese entonces había participado LUDUEÑA con la firma CORRETAJES GROUP; había otra compra de otro terreno de características significativas y dos boletos de compraventa en la que la firma EFCE S.A. actuaba como vendedora, en este caso transfiriendo lotes de terreno a PRODUC TAN y ALGECIRAS en 05/2011. A los fines de mayor precisión, le fue exhibido al testigo la fs. 13 del informe por él realizado, oportunidad en la cual el testigo identificó 7 operaciones inmobiliarias: "Escritura 194 de 05/2007 celebrada entre EFECE como comprador y ARBOL GRANDE vendedor en ambos casos actuó PAULUS en nombre y representación. Venta de un lote de terreno de 3 hectáreas en la ciudad de Río tercero en la suma pactada de 180.000 pesos; Escritura celebrada entre EFECE como comprador y María Brunilda de Cabero de Santone vendedor. Venta de dos fracciones de terreno de 7.800 y 5.300 metros cuadrados en la ciudad de Río tercero en la suma pactada de 62.000 pesos; Escritura 483 de 09/2009 celebrada entre EFECE y CORRETAJES GROUP como compradoras y Adriana y Gustavo Santone como vendedores. Compra de terrenos y la subdivisión de los adquiridos en el año 2007; 19/11/2009 otra escritura donde EFCE compra a Gustavo Santone, el lote 7 de la manzana 6 con una superficie de 4.030 metros cuadrados en la suma de 80.000 pesos; aparecen los boletos de compra venta celebrados en 05/2011 entre PRODUCTAN compradora y EFECE como vendedora. Venta por la suma de 243.500 dólares de tres lotes de terreno 10, 11 y 12 que surgían de la superficie de 3 hectáreas que había sido comprada en el año 2007 a ARBOL GRANDE; otro boleto de compraventa donde EFCE vende a ALGECIRAS dos lotes de terreno 17 y 19 por un total de 164.800 dólares en 05/2011 la fecha de los dos boletos de compra venta". (...)

Estas contribuyentes son estructuras utilizadas sólo a efectos de documentar las mencionadas adquisiciones de granos y/o prestación de servicios conexos que permita introducir y hacer circular en el mercado legal granos provenientes del mercado marginal, adquiridos a productores ocultos. Asimismo, utilizan a otras contribuyentes que realizan servicios conexos, como los de transporte, que son funcionales a la maniobra pues trasladan el cereal documentado a nombre de las "carpetas" controladas por la estructura. **Las operaciones realizadas por el grupo desde el año 2009 a 2012 habrían superado los mil millones de pesos (\$ 1.000.000.000), según los movimientos bancarios realizados por las empresas CORRETAJES GROUP S.A., VERCOVIR S.A., FG CEREALES S.A., CERCAL SRL., ALGECIRAS S.A., SWETENSON S.A., ARBOL GRANDE S.A., EFCE S.A. y SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN S.A. Además, se advierte adquisiciones de inmuebles urbanos y rurales, vehículos de transporte y de uso particular, de alta gama, a nombre de sociedades integradas por sujetos vinculados con los hechos, cuyo origen perfectamente podría estar explicado en las utilidades generadas por la maniobra de evasión mencionada en el párrafo anterior. Respecto de los inmuebles ya efectué algunas consideraciones párrafos anteriores, habiendo omitido mencionar la adquisición o existencia de una sumatoria de camiones, que**





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

no pudo recordar el testigo Daniel SALGADO exactamente cuántos había, pero aclarando que se hicieron planillas de trabajo para ello. Lo que sí recordó el testigo es que figuraban a nombre de SWETENSON, dos vehículos de alta gama, un Mercedes Benz y una BMW X3, llamando la atención expresó, porque había una actuación notarial también de la Escribana FARIAS donde LUDUEÑA, como presidente de SWETENSON, autorizaba a CUELLO, PAULUS, CISMONTI y RIVAROLA a conducir dichos vehículos por todo el territorio del país y países limítrofes (el resaltado es propio).

c) Del cotejo de las plataformas fácticas de ambos procesos penales surge, pues, que la descripción de los hechos referidos a la asociación ilícita se efectuó con una amplitud tal que —en lo medular o nuclear— englobó a las maniobras de lavado de dinero que aquí se ventilan.

De otro modo, la enunciación del accionar propio de lavado de activos que, de manera formal y concreta, se atribuye a los acusados y ha motivado la celebración del juicio que nos ocupa estaba comprendido, en sus aspectos sustanciales, en la enunciación de las circunstancias de comisión del delito de asociación ilícita fiscal, juzgado y condenado en el proceso penal anterior, tras el desarrollo de un debate propio y diverso.

Si se recapitula en el inicio de estas actuaciones puede verse que, al promover acción penal (fs. 3205/3221), la Fiscalía Federal incluyó la descripción de un contexto general referido a la actividad de la asociación ilícita investigada, así como a los hechos de evasiones tributarias y, luego, ya en términos de contexto particular, describió el HECHO PRIMERO como asociación ilícita tributaria y el HECHO SEGUNDO como lavado de dinero.

Planteadas así las imputaciones delictivas, surge evidente que todo el sustrato fáctico estaba integrado en ese contexto general atinente, ni más ni menos, a la asociación ilícita.

Según lo expuesto, la división de hechos del modo descripto hizo que el Juez de Instrucción ordenara después el desdoblamiento de las causas, lo que implicó —en definitiva— que las conductas reprochadas a los imputados fueran (si





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

se quiere) duplicadas, esto es, ventiladas dos veces en el marco de dos procesos distintos.

Es que, pese a la supuesta división de hechos y a la posterior escisión de los expedientes, la descripción de las maniobras y circunstancias de cada uno de esos hechos imputados ha abarcado —en su enunciación— los aspectos esenciales del otro.

Si se mira con atención la plataforma fáctica organizativa descripta, por un lado, y los integrantes de la asociación, por el otro, son en esencia idénticos. En ambos procesos están imputados, tanto por la asociación ilícita fiscal como por el lavado de dinero agravado por la asociación, Fernando Luis Cuello como jefe y como integrantes Jorge Ricardo Ferrer, Diego Gastón Ludueña, Horacio Omar Cismondi, Rubén Adolfo Ceva, Sergio Luis Guevara, Rubén Omar Di Primio y Miguel Ángel Ortega; además de otros miembros que no intervinieron en las operaciones que configurarían las presuntas maniobras de lavado de dinero.

Con ello en vista, se impone analizar las maniobras concretas atribuidas en las presentes actuaciones a la luz de los hechos que fueron fijados, juzgados y condenados en el juicio anterior.

En primer lugar, se identifica a los *movimientos bancarios injustificados* de las distintas cuentas de titularidad de las sociedades que conforman la estructura de la organización delictiva como maniobras de colocación y estratificación del dinero espurio generado con motivo de la comisión de los ilícitos tributarios.

Dichas operaciones bancarias que se reprochan como maniobras de lavado de dinero integraron la plataforma fáctica de la asociación ilícita, respecto de las cuales los imputados ejercieron ya su derecho de defensa en el marco de un juicio previo.

En efecto, surge al respecto el señalamiento de la intervención de los mismos sujetos, las mismas cuentas bancarias e incluso las mismas personas que retiran dinero por ventanilla de los bancos.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

De otro modo, la modalidad de retiro de dinero en efectivo de las cuentas bancarias se encuentra descripta en ambas piezas acusatorias: en una, como parte de la modalidad operativa de organización delictiva con miras a blanquear operaciones marginales de grano —que conformaban la asociación ilícita fiscal— y en otra, como conductas típicas del proceso de lavado de dinero.

Ciertamente que la objeción no estriba solo en la mera réplica de la cita de dichas maniobras que, por cierto, ha supuesto su acreditación y juzgamiento en el proceso anterior, sino en la significación jurídica diversa que en cada caso le ha aplicado el Ministerio Público Fiscal, en una suerte de duplicación de imputación delictiva.

A la par, se verifica la existencia de comunidad de pruebas entre ambos procesos, en tanto los mismos hechos fueron probados en el debate celebrado por el TOF2 con los mismos elementos de cargo que se ofrecieron y ventilaron en el caso de autos. Los elementos de cargo incorporados a juicio en la presente causa no difieren de los producidos y valorados por dicho Tribunal en el juzgamiento y condena de los hechos (idénticos —en esencia— en su enunciación), que fueron catalogados jurídicamente en términos de asociación ilícita fiscal, evasión y apropiación indebida de tributos.

Lo expuesto resulta asimismo evidente desde la óptica de la definición de las participaciones criminales correspondiente a cada uno de los procesos.

En efecto, en esta causa se atribuye a **Horacio Omar Cismondi** ser cotitular de cuentas bancarias de la firma “CORRETAJES GROUP S.A.”.

Mientras que en la causa FCB 62000069/2008 se sostuvo:

Así Horacio Omar Cismondi aparece como cotitular de cuentas bancarias de CORRETAJES GROUP S.A., es decir, estaba autorizado para efectuar retiros de dinero de dicha cuenta (Cf. fs. 563, 564, 569 de estas actuaciones).





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

A **Rubén Omar Di Primio**, como presidente y apoderado administrativo y bancarios de la firma ALGECIRAS S.A. se atribuye haber efectuado operaciones por intermedio de la cuenta corriente N° 2130138030 del Banco Nación, cuenta corriente N° 3-052-00000037905-9 del Banco Hipotecario S.A. pertenecientes a la firma.

Ahora bien, en la causa FCB 62000069/2008 el TOF2 estableció:

El imputado Rubén Omar DI PRIMIO aparece como firmante de la cuenta corriente N° 2130138030 perteneciente a la firma ALGECIRAS SA (fs. 2375). Al respecto DI PRIMIO declaró que como presidente siempre firmaba cheques en blanco, hacía depósitos en diferentes entidades bancarias y efectuaba retiros de dinero de dichas entidades el cual entregaba al contador Tallarico, quien a su vez se comunicaba con CUELLO.

En definitiva, según se advierte, la base de la imputación en ambas causas se sustenta en la acción del uso de la misma cuenta corriente, N° 2130138030 del Banco Nación, perteneciente a Ageciras S.A.

Por otro lado, el citado fragmento de la sentencia pone en relieve que Rubén Di Primio se defendió en dicho proceso con relación a estas maniobras (operaciones bancarias), al señalar que firmaba cheques en blanco y que era titular de la cuenta bancaria de Algeciras S.A. porque había prestado su nombre para tales fines. En lo sustancial, esa misma defensa material fue la que asumió a lo largo de este proceso.

Incluso, cabe mencionar que, al efectivizar su acusación en el debate en contra de Di Primio, el Fiscal General la sustentó en la valoración de su declaración indagatoria ante el TOF2.

Idéntica situación se observa respecto del imputado **Miguel Ángel Ortega**, quien aparece en ambas causas como accionista de la firma ALGECIRAS S.A. y titular de las cuentas de la firma CORRETAJES GROUP S.A.

Así, en la causa FCB 62000069/2008 se consideró:





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Por último, según informe del Banco de la Nación Argentina el imputado Miguel Ángel Ortega, quien aparece como accionista de la firma ALGECIRAS, se encuentra como titular de la cuenta corriente N° 9000251/43 perteneciente a la firma CORRETAJES GROUP SA. (fs. 1975).

Otra vez, se repite en ambas causas la referencia a las mismas cuentas bancarias, en concreto, la cuenta corriente N° 9000251/43, perteneciente a la firma CORRETAJES GROUP SA.

Es decir, las mismas cuentas bancarias sirven para la (doble) acusación que se formula en contra de los imputados: por tener movimientos irregulares y por su finalidad de ocultar el verdadero origen del dinero.

Por último, la acusación que pesa sobre **Jorge Ricardo Ferrer y Sergio Luis Guevara**, como presidente y representante de FG CEREALES S.A., se sustenta en autos en los movimientos bancarios de la empresa. Sin embargo, dichas operaciones bancarias fueron ya valoradas a propósito de la imputación deducida en su contra en la causa FCB 62000069/2008 y en ellas se sustentó, al cabo, el temperamento asumido por el TOF2 en la sentencia dictada.

Sumado a ello, en el pronunciamiento dictado por dicho Tribunal quedaron establecidos los movimientos bancarios correspondientes a cada una de las “sociedades pantallas” que formaron parte del esquema de la organización ilícita — como característica para demostrar su carácter apócrifo—, que coinciden, en términos generales, con los movimientos bancarios señalados en la presente causa a los efectos de reprocharles maniobras de lavado de dinero.

Así, se expuso:

*La firma **VERCOVIR SA** tiene como actividad la venta al por mayor de cereales, visualizándose importantes movimientos bancarios - \$ 381 millones desde enero/2010 a la fecha- (...)*

*Por su parte, la firma **ALGECIRAS SA** declaró como actividad la venta al por mayor de cereales (...) Respecto de esta empresa, se visualizaron importantes movimientos bancarios - \$ 543 millones- (...)*

Las operaciones realizadas por el grupo desde el año 2009 a la fecha habrían superado los \$ 1.000.000.000, según los movimientos bancarios





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

realizados por las empresas CORRETAJES GROUP SA, VERCOVIR SA, F G CEREALES SA, CERCAL SRL, ALGECIRAS SA, SWETENSON SA, ARBOL GRANDE SA, EFCE SA, SISTEMAS Y CONTROL DE GESTIÓN SA.

En segundo lugar, las conductas que se describen en la etapa de integración y uso conforman asimismo la plataforma fáctica de la causa que les atribuye la comisión de asociación ilícita y fueron valoradas por el TOF2 para fundar la condena dictada.

Por un lado, esta acusación describe la adquisición de los bienes por parte de la organización como una de las modalidades para poner en circulación el dinero. Así, se reprocha que eran inscriptos a nombre de las firmas con las que operaban, o de sus representantes, con el objeto de asegurar a los verdaderos adquirentes la posibilidad de utilizarlos e indica que para disponer de ellos se habrían otorgado autorizaciones y facultades de administración y disposición por medio de escrituras públicas.

Pues bien, dichas maniobras fueron consideradas ya en el marco de la causa FCB 62000069/2008, al componer —en términos idénticos— la plataforma fáctica de aquella acusación. Así, en el fallo se estableció:

*En el domicilio de Fernando Luis Cuello y Natalia de los Angeles Paulus se secuestraron elementos que, junto con las pruebas mencionadas, permiten sostener que Ludueña y Cismondi eran personas de confianza de Cuello. En efecto, se secuestraron dos escrituras públicas en las que Ludueña, en nombre y representación de SWETENSON SA, autoriza a Paulus, Cuello y Horacio Omar Cismondi para circular en los vehículos **BMW X3, dominio HRQ-569 y Mercedes Benz dominio IRN-293** (Cf. fs. 28/30 y 126 respectivamente de la carpeta de prueba N° 1 titulada Bunker). También en el mismo domicilio se secuestró un título **de una motocicleta marca BUELL, modelo XB 12 X, dominio 979GEE**, a nombre de Diego Gastón Ludueña, titular desde el 21/11/11, y en el mismo título consta una autorización para conducir a favor de Fernando Luis Cuello (fs. 163). Además obra una escritura pública de fecha 3 de enero de 2012 en la que Diego Gastón Ludueña autoriza a conducir libremente a Paulus, Cuello y, nuevamente, a Horacio Omar Cismondi. Por último, en una carpeta transparente obran títulos de propiedad a nombre de SWETENSON S.A., y dentro de esta carpeta existe un poder general de administración y disposición, de fecha 17/11/2009, que SWETENSON S.A.,*





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

representado por Diego Gasón Ludueña, efectúa a favor de Fernando Luis Cuello.

Como puede leerse, se trata de las mismas adquisiciones que se reprochan en esta causa; los mismos vehículos: un BMW X3, dominio HRQ-569 y Mercedes Benz dominio IRN-293, motocicleta marca BUELL, modelo XB 12 X, dominio 979GEE.

También, se describe en forma reiterada la adquisición de inmuebles. A modo de ejemplo, se cita el siguiente fragmento:

En similar sentido, cabe señalar que en el allanamiento realizado en el domicilio particular de Fernando CUELLO se secuestró documentación relacionada con importantes emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Río Tercero y en la ciudad de Buenos Aires –Puerto Madero- a nombre de las empresas del grupo: EFCE S.A., SWETENSON S.A., CORRETAJES GROUP S.A. y ARBOL GRANDE S.A.

Ello evidencia que los incrementos patrimoniales que se reprochan ya fueron valorados en el juicio anterior, con motivo de la acreditación de la comisión de la asociación ilícita.

Además, se refiere a adquisiciones de inmuebles urbanos y rurales, vehículos de transporte y de uso particular, de alta gama, a nombre de sociedades integradas por sujetos vinculados con los hechos, cuyo origen perfectamente podría estar explicado en las utilidades generadas por la maniobra de evasión mencionada en el párrafo anterior.

Incluso, en la causa FCB 62000069/2008 el TOF2 estableció que el destino de las contribuyentes ÁRBOL GRANDE S.A., “EFCE S.A.”, “SOLFI S.A.”, “SWETENSON S.A.”, “SISTEMA Y CONTROL DE GESTION S.A. era ubicar el dinero obtenido marginalmente por las carpetas “ALGECIRAS S.A.”, “VERCOVIR S.A.”, “PRODUC TAN SRL.”, “DANIEL PELAYES” y “CORRETAJES GROUP S.A.”





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Así, otra de las modalidades descriptas por la pieza acusatoria para poner en circulación el dinero proveniente de los ilícitos tributarios fue la actividad financiera de la contribuyente SOLFI S.A.

Si bien parte de la acusación en este juicio se centró en describir los préstamos de dinero en efectivo que otorgó esta empresa, lo cierto es que las actividades desarrolladas por SOLFI S.A fueron oportunamente descriptas y luego valoradas por el TOF2 para dar por probada la existencia de la asociación ilícita fiscal en el marco del juicio anterior. Por ende, conformó el objeto procesal de la citada causa madre y se replica en el presente proceso con motivo de la actual imputación que se formula.

Al respecto, no puedo obviar el señalamiento de que, al ejercer su derecho a la última palabra en causa FCB 62000069/2008, Fernando Cuello expuso su vínculo con la empresa SOLFI S.A., en los siguientes términos: *“... que en 2008 creó la empresa ARBOL GRANDE, que su mujer Natalia contrató los servicios de Malpassi y se creó SOLFI, SWETNSON y otras más. Expresó que SOLFI gestionaba créditos de automotor y que había sido una empresa de transporte. Señaló que él era presidente, que la AFIP decía que era una empresa de transporte para prestar dinero, pero no era así, era de transporte autorizada por el AFIP habilitada para otorgar créditos, agregando que no había delito...”*

Sobre la base de lo expuesto, estoy en condiciones de aseverar que los movimientos bancarios injustificados, la adquisición de bienes a través de las empresas del grupo y la actividad financiera de SOLFI S.A. —descriptos en autos como maniobras tendientes a lavar activos provenientes de la actividad ilícita de la organización delictiva— constituyen maniobras ya señaladas como sustrato fáctico por el cual se investigó y, en definitiva, condenó a los imputados en la causa FCB 62000068/2009 en orden al delito de asociación ilícita fiscal.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Ya desde la óptica de las participaciones criminales atribuidas a los imputados Fernando Luis Cuello, Diego Gastón Ludueña y Rubén Adolfo Ceva, surge igualmente evidente la identidad de los hechos en juego.

Sostiene la acusación en este juicio que **Fernando Luis Cuello**, en su calidad de jefe de la organización, era quien, junto a **Diego Gastón Ludueña**, del círculo íntimo de confianza de aquél y de Paulus integraba junto a la nombrada las empresas de la mentada organización y manejaban las firmas sindicadas con la utilización de las personas jurídicas interpuestas. Por su parte, **Rubén Adolfo Ceva**, en su calidad de contador, brindaba asesoramiento técnico y contable.

En estricto sentido, ello evidencia que se ha efectuado una traslación de los imputados de aquella causa a esta y que su condición de miembros de la asociación ilícita para cometer delitos tributarios sirve ahora de fundamento para acusarlos por maniobras de lavado de dinero, cuya descripción integraba ya la composición de los hechos juzgados y condenados en el marco del proceso penal anterior.

Esta repetición en la atribución de conductas a los acusados supone, pues, una afectación a la garantía de defensa en juicio de los acusados. El imputado Rubén Adolfo Ceva, en ocasión de expresar su última palabra en el juicio, manifestó precisamente al Tribunal que —a lo largo del juicio— no ha sabido de qué se lo acusa y, por ello, solo pudo alegar que no cometió ningún acto de lavado de dinero, ni asesoró a alguien para que pueda realizarlo.

En este sentido, es claro que la metodología empleada por el Ministerio Público Fiscal para describir el proceso de lavado de activos, según las etapas propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —colocación, estratificación, integración y uso— no subsana el hecho de que las conductas reprochadas en el marco de dicha descripción coinciden —en esencia— con las enunciadas en la plataforma fáctica propia de la causa llevada adelante por el delito de asociación ilícita fiscal.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Ciertamente que la circunstancia de que tales hechos compusieran ya la descripción de la imputación delictiva que pesaba sobre los acusados en el citado proceso penal supone que los nombrados ejercieron su defensa material a su respecto y que el TOF2 consideró y valoró dichos hechos para fundar su decisorio del pasado 9 de agosto de 2021. Más aun, las apreciaciones y conclusiones emitidas en relación con esos reproches formulados en contra de los acusados tuvieron lugar sobre la base de los mismos elementos de juicio incorporados luego al debate de autos.

De otro modo, dado que los términos de fijación de los mentados hechos primero y segundo contienen elementos de base comunes, la escisión posterior de los procesos penales no hizo sino que acabaran duplicándose las imputaciones delictivas sobre los acusados.

Tan amplia ha sido, en definitiva, la descripción de las circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona en relación con el accionar de asociación ilícita fiscal que se les atribuyó en la causa anterior que, el cabo, el tribunal interviniente tomó razón de tales extremos y, sobre la base de las mismas pruebas que sustentan la actual imputación, examinó y juzgó los hechos que conforman la acusación de la presente causa.

Y es claro que ello tuvo lugar sin asignar a tales maniobras la significación jurídica de lavado de activos, en el entendimiento —por cierto— que la apreciación de dichos hechos tendría lugar luego, en el marco de un proceso penal diferente.

Sin embargo, insisto, la circunstancia de que la base de la imputación delictiva de aquella causa abarcara —en lo medular— la descripción de acciones y maniobras propias de los hechos que motivan el presente expediente condiciona de manera inexcusable su actual juzgamiento. En concreto, esa base común ha significado su valoración y juzgamiento por el TOF2, aunque no se le haya conferido entonces el rótulo jurídico de lavado de activos.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En la línea de esta conclusión, es clave considerar que toda imputación delictiva supone la atribución de hechos con significación jurídica, no la mera atribución de delitos o calificaciones jurídicas. Por ello, no cabe descartar una violación a la garantía constitucional en juego sobre la base de considerar que los imputados no fueron condenados por el delito de lavado de activos.

Entiendo, pues, que un deficiente método en la descripción de los hechos contenidos en la promoción de acción penal y la decisión jurisdiccional ulterior de escindir los procesos ha supuesto que se verifique en autos una vulneración a la garantía constitucional de prohibición de doble juzgamiento.

En tal sentido, valga aclarar que la amplitud en la descripción de las conductas endilgadas a los imputados (en sí misma) no habría acarreado un problema jurídico de haberse sustanciado un único juicio oral y público con un objeto procesal comprensivo de la imputación delictiva en su conjunto formulada en contra de los acusados.

Nótese, al respecto, que el propio Fiscal General asumió los problemas generados por el desdoblamiento de las causas, lo que —de suyo y por las razones dadas— excede una cuestión de mero desgaste jurisdiccional.

El cotejo de los sustratos fácticos contenidos en las acusaciones de ambos procesos penales evidencia que las respectivas imputaciones contienen el mismo acontecimiento histórico, con significación jurídica diversa.

En definitiva, reitero que una deficiente técnica en la descripción de los hechos, por un lado, y la decisión posterior de desdoblar los procesos penales, por el otro, trajo consigo el alto costo de afectación de garantías constitucionales que, por cierto, no puede ser avalado, ni consentido por este Tribunal.

Como fuera mencionado, para que opere la garantía que repele la doble persecución penal debe existir identidad de persona, objeto y causa.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

La identidad objetiva o del hecho se presenta cuando el objeto está dado por el mismo comportamiento. Se trata de una coincidencia fáctica, no de una correspondencia en la calificación jurídica.

En efecto, en consideración de la doctrina: *“la regla genérica que gobierna el principio prescinde, en principio, de toda valoración jurídica del hecho. Se trata de impedir que la imputación concreta, como atribución de un comportamiento determinado históricamente, se repita, cualquiera sea el significado jurídico que se le ha otorgado, en una y otra ocasión, el nomen iuris empleado para calificar la imputación o designar el hecho. Se mira al hecho como acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento o período determinados...”* (MAIER, Julio; op. cit., pp. 606/7).

Así, en el presente caso, se verifica que el Ministerio Público Fiscal mantuvo la acusación respecto de un supuesto acontecimiento histórico que fue objeto de juzgamiento de otro tribunal en causa “CUELLO, Fernando Luis y otros s/ Asociación ilícita fiscal” (Expte. 62000069/2008).

Y no se trata, en los términos planteados por el Fiscal General en el debate, de la simple cuestión de que la enunciación del delito de lavado de activos ha debido comprender en su descripción —de modo de satisfacer los elementos de dicho tipo penal— al delito precedente. Por el contrario, se trata de que la enunciación del delito de asociación ilícita fiscal ya contenía los hechos, y sus circunstancias, que hoy se endilgan a los imputados.

Por ende, siendo que además se constata la identidad de personas acusadas y de motivo de persecución, deviene insoslayable concluir que, con la imputación deducida en las presentes actuaciones —lavado de activos (art. 303 del CP)— se ha conculcado indebidamente el principio de *ne bis in ídem*, protegido constitucional y convencionalmente.

Y aunque la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba desestimó la excepción de litis pendencia por violación del principio *ne bis in ídem*, al revisar con





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

fecha 30.03.2021 el auto de procesamiento impugnado por las defensas, el nuevo planteamiento de la cuestión en el curso del debate habilita un nuevo examen del asunto, frente al fallo dictado en otro proceso penal.

Partiendo del sustrato fáctico intimado a los imputados y del plexo probatorio reunido en la causa, hay que decir que dicho Tribunal de apelaciones centró su análisis en la forma de concurrencia de las figuras penales de asociación ilícita fiscal y lavado de activos agravado por ser “miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”. En particular, se consideró allí que *“la disímil construcción de las figuras penales, su ubicación sistemática diferencial, las particularidades respecto de la autoría y, principalmente, los distintos segmentos o tramos contemplados para la configuración típica de una y otra (reunión constitutiva de actos preparatorios para la comisión de delitos tributarios y consumación del lavado a través de la conformación de una asociación o banda) conducen a considerar que, en el caso bajo estudio, se está en presencia de dos hechos independientes y autónomos, mediando entre ellas una relación de concurso real o material, en los términos definidos en el art. 55 del Código Penal; sin resultar de aplicación el art. 210 del Código Penal, en razón de la especialidad de las figuras aquí analizadas. (...)”*.

Y, previo a concluir, se postuló que *“...debe entenderse y leerse el complejo criminal en un todo sistémico, desde que el circuito orquestado por la asociación delictiva bien pudo haberse servido de entidades funcionales a la emisión de facturas apócrifas y, en otro momento, entidades funcionales a la utilización concreta de dichas facturas para la comisión de delitos determinados y específicos, luego blanqueados por distintos medios comisivos.*

En efecto, se trata al menos de tres tramos completamente diferenciables, tanto en su dimensión fáctica cuanto jurídica. El primero, atiende a la reunión de sujetos para la comisión de delitos tributarios, el segundo, la comisión de delitos tributarios específicos y determinados, empleando las herramientas brindadas por





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

la banda o asociación criminal, y el tercero, el lavado del dinero producto de la cuota tributaria impaga de los contribuyentes evasores. De otro ángulo, podría decirse que el primero consta de la preparación de delitos indeterminados, luego la comisión de delitos tributarios concretos y, finalmente, su introducción a los mercados y economía formal a fin de dotarlos de apariencia de legalidad.

*En este escenario, habrá quienes intervengan en los actos preparatorios de **delitos indeterminados** -confeccionando las “carpetas” o usinas de facturas apócrifas-; quienes lo hagan en los actos preparatorios de los delitos concretos – proporcionando o recibiendo dichas facturas; quienes ejecuten los **delitos específicos** mediante la utilización de las facturas de mención y, finalmente, quienes blanqueen el producto de estas actividades delictivas. Por ende, la valoración de los acontecimientos fácticos en estos segmentos o tramos explicitados, bajo el prisma o lente del derecho, conduce a definirlos como conductas independientes y autónomas entre sí, en los términos del concurso material prevista en el art. 55 del CP.”*

Suscribo las razones expuestas en dicho decisorio respecto del concurso de delitos en juego (asociación ilícita fiscal y lavado de dinero agravado). De haberse discutido la existencia de los hechos y las participaciones penales en el marco de un mismo y único debate, el supuesto de pluralidad delictiva que conllevan los hechos en juego hubiese configurado, en su caso, una hipótesis de concurso real o material, en los términos del artículo 55 del CP.

Sin embargo, lo examinado y constatado aquí es algo diferente: los imputados fueron traídos a juicio por un acontecimiento fáctico ya juzgado en otro proceso penal.

d) Mención especial merecen las vicisitudes que —por su parte— trajo aparejado el desdoblamiento de los procesos, siendo que en el curso del debate, en instancias propias de la discusión final, este Tribunal debió tomar razón de decisiones jurisdiccionales adoptadas de manera concomitante en el marco del





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Expediente FCB 62000069/2008, por su innegable incidencia en la configuración del delito de lavado de activos en juego y, así, en la propia interpretación del caso a juzgar.

Es sabido que el objeto del delito de lavado de activos puede ser cualquier bien proveniente de un ilícito penal. Así, el ilícito precedente forma parte de la estructura del tipo objetivo del art. 303 del CP.

En el caso bajo análisis, dicho ilícito previo está dado por delitos tributarios, en concreto, asociación ilícita fiscal, evasiones y apropiaciones indebidas de tributos.

Por ello, cobra valor la discusión de doctrina respecto a si los delitos tributarios pueden ser delito precedente de la figura de lavado de activos; debate que puede sintetizarse en la siguiente cita: *“en nuestra legislación, delito precedente de lavado puede ser cualquier delito y, desde la reforma de la Ley 26.683, cualquiera sea el valor de los bienes involucrados (art. 303, inc 4°), pues el monto de \$300.000 sólo determina la existencia de un caso de lavado agravado (art. 303, inc. 1°).*

Desde este punto de vista, los delitos tributarios no presentan ninguna particularidad cuando se trata del delito de aprovechamiento indebido de subsidios o del delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales (arts. 3° y 4°, Ley 24.769). El dinero que el autor recibe en concepto de reintegro, recupero, devolución o subsidio es un bien que se obtiene a través de la comisión del delito; y también lo es el derecho que resulta del reconocimiento del beneficio fiscal obtenido fraudulentamente (en ambos casos, se trata de scelere quaesita).

Pero el debate se plantea con el delito de evasión tributaria, pues aquí la pregunta que hay que responder es si el dinero que el evasor deja de pagar al Fisco puede ser considerado un bien que proviene de la comisión de ese delito. Es decir, que la discusión acerca de si la evasión fiscal puede ser “hecho precedente” de lavado de dinero no se vincula con la cuestión de si forma parte o no de los





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

delitos que integran esa categoría (que en nuestra legislación son todos, según se ha explicado), sino con la interpretación del elemento “proveniente” (CÓRDOBA, Fernando; Delito de lavado de dinero, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2015, pp. 180-181)

A partir de esa conceptualización, surge que la acusación prescindió de determinar —de manera clara y concreta— el ilícito precedente. No es un tema menor dado que de los ilícitos previos habrían proveniendo los bienes a los que se pretendió dar apariencia lícita. Pues bien, al fijar el monto de dinero objeto del lavado de activos, la acusación se apartó de las constancias de la causa y sostuvo —por fuera de los extremos evidenciados— el monto de dinero descripto inicialmente por la instrucción.

En concreto, la Fiscalía General optó por mantener en el debate la referencia a la suma de Pesos 57.232.547,49, según lo descripto en la pieza acusatoria.

Se trata del monto que surge, puntualmente, de un oficio remitido por la Sección Penal Tributaria de la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP-DGI a la Fiscalía Federal de Villa María, en el que se detallan las denuncias penales formuladas en contra de “...- **LUDUEÑA, Diego Gastón** correspondiente a Impuesto al Valor Agregado – Períodos Fiscales 01/2010 a 12/2010 e Impuesto a las Ganancias – Período Fiscal 2010 por la suma de \$ 12.130.861,13.- y \$ 20.217.283,92.-, respectivamente.- Fecha de presentación de la denuncia: 19/08/2015.- -**CUELLO, Fernando** correspondiente a Impuesto a las Ganancias – Período Fiscal 2011 – por la suma de \$ 430.525,82.- Fecha de presentación de la denuncia: 27/07/2016.- -**“FG CEREALES S.A.”** correspondiente a: a) Impuesto al Valor Agregado – Períodos Fiscales 2010, 2011 y 2012 – por la suma de \$ 427.105,84.- \$ 3.749.871,14.-; \$ 1.354.592,93.-, respectivamente; b) Impuesto a las Ganancias – Período Fiscal 2011 – por un importe de \$ 2.544.221,80.- y c) Retenciones Practicadas y no Ingresadas de I.V.A – Períodos Fiscales 06/2010 a 12/2011, 02/2012 a 08/2012 por la suma de \$ 12.395.416,14.-. Fecha de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

presentación de la denuncia: 03/06/2016; y –“CERCAL S.R.L.” correspondiente al Impuesto a las Ganancias – Período Fiscal 2011 – por la suma de \$ 565.256,19.- e –Impuesto al Valor Agregado – Períodos Fiscales 2010, 2011 y 2012- por la suma de \$ 1.016.248,26.-; \$ 1.784.123,80.- y \$ 617.040,52-, respectivamente.-...”. (Fs. 3389/3390).

Es preciso añadir que, a raíz de dichas denuncias penales, se iniciaron las siguientes causas judiciales:

-CUELLO FERNANDO LUIS s/INFRACCION LEY 24.769” (Expte. N° FCB 27783/2016)

-LUDUEÑA, DIEGO GASTÓN Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: AFIP-DGI Y OTRO” (Expte. N° FCB 36467/2015)

-F.G. CEREALES S.A. Y OTROS s/EVASION AGRAVADA TRIBUTARIA y APROPIACION INDEBIDA DE TRIBUTOS DENUNCIANTE: PANZA, ANTONIO RAMÓN Y OTRO” (Expte. N° FCB 21258/2016)

-FARIAS, LUIS FERNANDO Y OTROS s/INFRACCION LEY 24.769 QUERELLANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (AFIP- DGI), BARBARA (AFIP - DGI)” (Expte. N° FCB 35148/2014).

En síntesis, el perjuicio fiscal conformado por la sumatoria de los montos indicados en las cuatro denuncias penales formuladas por AFIP-DGI fue considerado como monto objeto de lavado de activos de esta causa por parte de la acusación.

Sin embargo, se impone observar que en los citados procesos judiciales se dictaron sucesivas y diversas resoluciones que —al cabo— afectaron el monto fijado. Esta circunstancia fue soslayada por el Ministerio Publico Fiscal en el planteo de su imputación y, al acusar a los imputados, hizo caso omiso de ellas y —sin explicación alguna— optó por mantener la imputación del monto original, estipulado





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

en el requerimiento de elevación de la causa. Lo propio puede afirmarse respecto de la querella. Veamos:

En autos “CUELLO, Fernando Luis s/Infracción Ley 24769” (Expte. N° FCB 27783/2016), el Juzgado Federal de Villa María, con fecha 2.11.2021, tras considerar que el monto evadido no cumplía la condición objetiva de punibilidad de la figura según ley 27.430, ordenó el sobreseimiento de los acusados Fernando Luis Cuello y Rubén Adolfo Ceva en orden a los delitos de Evasión Simple Tributaria (art. 1 de la ley 24.769), por aplicación de ley penal más benigna (art. 2 CP) (cfme surge del certificado actuarial respectivo).

En autos “LUDUEÑA, Diego Gastón y otros s/Infracción Ley 24769. Denunciante: AFIP-DGI Y OTRO” (Expte. N° FCB 36467/2015), la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba —mediante resolución de fecha 4.4.2022, tras analizar la posible doble persecución penal indebida con relación a estas actuaciones— ordenó revocar el auto de procesamiento, remitir las actuaciones al Juzgado Federal de Villa María para su acumulación a la causa conexa Exp. FCB 62002154/2013/CA1 y comunicar la resolución a este Tribunal.

Dada dicha comunicación, este Tribunal tomó razón de lo allí resuelto y el 10.05.2022 dio noticia a las partes.

Por su parte, con relación a las dos últimas actuaciones FCB 21258/2016 y FCB 35148/2014, acumuladas a autos FCB62000069/2008, el TOF2 dictó sentencia condenatoria con fecha 9.08.2021 —aún no firme—.

Ahora bien, con posterioridad al dictado de la sentencia condenatoria en el marco del “Legajo N°30 – IMPUTADO: CUELLO, Fernando Luis y otros s/LEGAJO DE CASACIÓN” (Expte. 62000069/2008), radicado ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, los abogados defensores Maximiliano O. García y Eduardo M. Gorosito, en representación del imputado Julio Daniel Luján, y los Dres. José Antonio Buteler y Julio Antonio Loza, en ejercicio de la defensa técnica de Rubén Adolfo Ceva, denunciaron un hecho nuevo, atinente a la adhesión de los





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

nombrados al régimen de alivio fiscal previsto en la Ley 27.653. Dichas presentaciones motivaron que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal ordenara suspender el trámite de la incidencia y dispusiera su remisión al Tribunal de origen para la resolución de la cuestión.

En este marco, el pasado 11.10.2022, el TOF2 —previo dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y de la parte querellante (AFIP-DGI)— resolvió: 1. *SUSPENDER el proceso penal seguido a Julio Daniel LUJAN DNI: 20.443.922 en relación a los hechos 1 a 15 y 17 a 28 del Expediente FCB 35148/2014 de conformidad a lo establecido por el artículos 6, inc. “c”, art. 11 de la ley 27.653 y art. 16 de la ley 27.541* 2. *DECLARAR la EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL en favor de Julio Daniel LUJAN, DNI: 20.443.922 y en consecuencia dictar el SOBRESEIMIENTO del delito de Apropiación Indebida de Tributos, prevista y penada por el art. 6º, de la Ley 24.769 en relación al hecho 16 de la presente causa (causa FCB 35148/2014) por haberse acogido al “Régimen de Alivio Fiscal para fortalecer la salida económica y social a la pandemia generada por el Covid-19 – Ley 27.653”. (causa FCB 35148/2014), todo ello de conformidad a lo establecido por el artículos 6, inc. “c”, art. 11 de la ley 27.653 y art. 16 de la ley 27.541.* 3. *DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCION PENAL en favor de Adolfo CEVA, DNI: 13.429.992 Jorge Ricardo FERRER, DNI: 13.461.715 y Sergio Luis GUEVARA, DNI: 14.050.444, y en consecuencia SOBRESEER a los nombrados respecto del delito de evasión agravada -dos hechos- y de la apropiación indebida de tributos -hechos 3 a 27 (causa FCB 21258/2016) todo ello de conformidad a lo establecido por el artículo 6, inc. “c”, art. 11 de la ley 27.653 y art. 16 de la ley 27.541.*

A la par, es preciso explicitar que con fecha 7.12.22 el TOF2 resolvió hacer extensivo al coimputado Fernando Luis Cuello lo dispuesto en la resolución precedentemente citada respecto a la suspensión del proceso penal y la





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

declaración de extinción de acción penal por acogimiento al Régimen de alivio fiscal de la ley 27.653.

Ello significa que dichas resoluciones afectaron el destino de las causas FCB 21258/2016 y FCB 35148/2014 y, por ende, de los delitos involucrados en ambas, tras operar la amnistía fiscal prevista en el régimen de la Ley 27.653.

Lo dicho nos sitúa frente a la cuestión de si el producido de la conducta tributaria que se regulariza a través de aquel régimen puede seguir siendo considerado como objeto del lavado de activos, o si, por el contrario, dicha regularización implica la descontaminación del bien resultante del delito tributario y, por ende, el cese de la persecución penal por el delito de lavado de activos de origen delictivo.

Valga decir que el concepto de “descontaminación” del objeto del lavado de activos del art. 303 del CP, en los casos en que el delito precedente sea un delito tributario, es utilizado por la doctrina —en particular la española— para referir a aquellos casos en que el delito precedente se ha extinguido por regularización de la deuda (o por prescripción).

Para fundar este concepto de descontaminación del objeto de imputación del delito de lavado de activos, se ha postulado que si se entiende que la regularización de una deuda o la normalización o exteriorización de activos sana esa situación anterior y se perdona la conducta tributaria, por consiguiente, el producto del posible delito de lavado de activos deja de tener ese carácter ilícito, se “descontamina”. Así, estos regímenes no solo amparan a montos dinerarios no ingresados sino también a bienes y cuentas bancarias obtenidos a partir de inconductas tributarias (DÍAZ CAFFERATA, Agustín; “La descontaminación del objeto del lavado de activos en casos de regularización tributaria o blanqueo de capitales”, trabajo presentado en: *Primeras Jornadas conjuntas de prevención de lavado de dinero y de Derecho Penal Tributario*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 2022).





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En tal sentido, es claro que las decisiones jurisdiccionales antes mencionadas dieron paso a una progresiva situación de descontaminación de los ilícitos tributarios precedentes del lavado de activos que aquí se juzga.

Por tanto, el tratamiento y decisión sobre los hechos que nos motivan en la presente causa se han visto condicionados por pronunciamientos que —de manera concomitante— adoptaron el TOF2 y demás tribunales de la jurisdicción, vinculados a las leyes de blanqueo de capitales, así como a la condición objetiva de punibilidad y principio de *ne bis in ídem*, y que fueron —en parte— traídos a este proceso por las defensas en pleno curso de debate.

De otro modo, tras la celebración de un juicio complejo, de numerosas audiencias, en instancias ya de la discusión final, debió asumirse que el objeto del delito juzgado era modificado por decisiones jurisdiccionales adoptadas, en forma simultánea, en el marco de otro proceso penal.

Y ello con la acotación de que ni el Ministerio Público Fiscal, ni la querella, adecuaron su acusación a dichas circunstancias actuales, aun en conocimiento de que la decisión adoptada en el Legajo de Casación N°30 gozaba de firmeza.

Es más, al momento de alegar en este juicio —el pasado 27.09.2022— la Fiscalía General no efectuó ninguna valoración sobre la existencia de este incidente en trámite ante el TOF2, a pesar de que ya había dictaminado en favor de la suspensión del proceso y extinción de las acciones penales, con fecha 4.09.2022. No es un dato menor, en tanto que —al omitir ponderar el extremo— la acusación planteó al Tribunal una teoría del caso sin correspondencia con las constancias de la causa. Lo propio hizo la querella, al no sumar elementos o razones para el análisis.

Y es indudable que se trata de un extremo con incidencia no solo en la apreciación sobre la existencia de los hechos y participación penal de los acusados, sino también en cuestiones referidas a la determinación de las penas pecuniarias (multas) y accesorias (decomiso de bienes) que pudieren corresponder.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

En relación con el efecto liberatorio de la regularización tributaria sobre el producido del delito fiscal que descontamina el objeto del lavado de activos, la doctrina y jurisprudencia sostienen —en su mayoría— que la extinción de la conducta delictiva tributaria prevista en los regímenes de moratoria y blanqueo de capitales supone una amnistía, en los términos del art. 59 del Código Penal (ibídem). A partir de allí, la controversia teórica gira en torno al ámbito en que opera esa amnistía: la tipicidad (con lo que el supuesto de hecho ya no es considerado delito) o la punibilidad (con lo que el supuesto de hecho que podría ser penalizado ya no será perseguido) (v., por todos, ZAFFARONI, Eugenio Raúl; *Tratado de Derecho Penal Parte General*, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1998; LASCANO, Carlos Julio. *Derecho Penal Parte General*, Ed. Advocatus, Córdoba, 2005).

Ahora bien, dado que la amnistía atañe en el caso a los delitos de evasión y apropiación indebida de tributos, se abre pues la discusión paralela —postulada en las conclusiones finales por las defensas— respecto de la chance de que el delito de asociación ilícita fiscal que persiste, y por el cual fueron condenados los imputados, pueda ser considerado delito precedente del lavado de activos, siendo que los delitos tributarios cometidos bajo su órbita fueron suprimidos del escenario a considerar para el ilícito precedente.

Sobre el punto, y más allá de tratarse de delitos autónomos, es claro que en la consideración del delito de lavado de activos debe partirse de la acreditación de un objeto determinado de lavado, lo que —por definición— escapa a la figura misma de asociación ilícita fiscal.

La descontaminación del delito precedente es en el caso un aspecto dirimente sobre el que debió debatirse en el juicio habida cuenta no puede existir lavado de activos sin ilícito previo, por formar parte de la estructura del tipo objetivo del art. 303 del CP.

Sin embargo, insisto, la acusación prescindió de considerar los efectos de aquel sobreseimiento dictado por el TOF2 y las decisiones del Juzgado Federal de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Villa María y de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad en los restantes expedientes sobre la configuración del delito de lavado de activos que nos convoca. Ni la fiscalía ni la querella abrieron juego a una discusión profunda del tema, y si bien fijaron posición respecto de la persistencia del delito de asociación ilícita fiscal como delito precedente no trajeron al debate un análisis sobre los bienes o dinero generado por dicha asociación ilícita fiscal por fuera de los delitos tributarios amnistiados.

Del conjunto de apreciaciones que antecede surge evidente la conclusión de que las garantías constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio (art. 18, CN) se vieron comprometidas con la división o segmentación de los procesos. Su desdoblamiento, con apertura y sustanciación paralela de legajos complementarios respecto de hechos conexos, afectó el derecho a una defensa sustancial e integral por parte de los acusados y, al cabo, a una correcta administración de justicia.

Desde el punto de vista de la defensa, es indudable el derecho que asiste a los imputados —por su importancia y conveniencia— de conocer y discutir, en el marco de un único debate, la totalidad de hipótesis delictivas formuladas en su contra, con base en la totalidad de las pruebas recabadas por la instrucción, así como que ello tenga lugar frente a un único tribunal de juicio.

IV.- Por las razones dadas, corroborada en definitiva la afectación al principio de prohibición de doble enjuiciamiento —*ne bis in ídem*—, corresponde declarar la nulidad del proceso y, en consecuencia, **ABSOLVER** a los imputados **Fernando Luis Cuello, Sergio Luis Guevara, Rubén Omar Di Primio, Diego Gastón Ludueña, Jorge Ricardo Ferrer, Rubén Adolfo Ceva y Miguel Ángel Ortega** en orden al delito de lavado de activos agravado —art. 303, apartado a) del C.P.— artículo 1 del CPPN y artículos 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Así voto.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

**A LA QUINTA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA
DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:**

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se expide en la misma forma.

**A LA QUINTA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA
DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU DIJO:**

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia de igual modo.

**A LA SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA CUESTIÓN PLANTEADAS, LA
SEÑORA JUEZA DE CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:**

En virtud de las consideraciones y conclusiones expuestas con motivo del último apartado, deviene abstracto el tratamiento de las presentes cuestiones.

**A LA SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA CUESTIÓN PLANTEADAS, EL
SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:**

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se pronuncia de igual modo.

**A LA SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA CUESTIÓN PLANTEADAS, EL
SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU DIJO:**

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia de igual modo.

**A LA NOVENA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA JUEZA DE
CÁMARA DRA. CAROLINA PRADO DIJO:**

Dadas las consideraciones y conclusiones expuestas en la quinta cuestión, el tratamiento de la presente deviene abstracto en lo concerniente a la procedencia de sanción. No obstante, corresponde expedirme con relación a la imposición de costas procesales (art. 530 CPPN).

Al respecto, la defensa técnica a cargo del Dr. Gustavo Taranto solicitó que el Ministerio Público Fiscal y la querella afronten las costas del proceso en caso de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

absolución de sus defendidos, si —en la réplica— no adecuaban su acusación a las constancias actuales de la causa, en virtud de los sobreseimientos ordenados por el Tribunal Oral N°2 de Córdoba en el Legajo N°30 de Casación, FCB 62000069/2008.

Sobre el tópico, debo decir que estimo que en el caso de autos se han verificado razones plausibles para litigar por parte de la Ministerio Público Fiscal y la querrela, motivo por el cual corresponde eximir a las partes acusadoras del pago de costas procesales (art. 531 CPPN) y, en este sentido, el planteo defensivo no debe prosperar (art. 530, CPPN). Así me pronuncio.

A LA NOVENA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. MARIO MARTÍNEZ DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara preopinante y se pronuncia de igual modo.

A LA NOVENA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA DR. JOSÉ CAMILO QUIROGA URIBURU DIJO:

Que adhiere en un todo a las consideraciones y conclusiones expuestas por la señora Jueza de Cámara del primer voto y se pronuncia de igual modo.

Por el resultado de los votos emitidos **EL TRIBUNAL POR UNANIMIDAD RESUELVE:**

I) NO HACER LUGAR al planteo de nulidad de la intervención de la querrela particular AFIP-DGI en la causa, formulado por la defensa a cargo del Dr. Julio Antonio Loza (cfme. artículos 166, 167 inc. 2 CPPN *a contrario sensu* y 170 del CPPN).

II) NO HACER LUGAR al planteo de insubsistencia de la acción penal por violación de la garantía de juzgamiento en plazo razonable, formulado por las defensas a cargo de los Dres. Gustavo Taranto y Julio Antonio Loza.

III) HACER LUGAR al planteo de nulidad del proceso por violación de la garantía de prohibición de doble enjuiciamiento —*ne bis in ídem*—, formulado por las defensas a cargo de los Dres. Rodrigo Altamira (Defensor Público Oficial), José





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 1

Ignacio Cabanillas, Gustavo Taranto y Julio Antonio Loza y, en consecuencia, **ABSOLVER** a los imputados **Fernando Luis Cuello, Sergio Luis Guevara, Rubén Omar Di Primio, Diego Gastón Ludueña, Jorge Ricardo Ferrer, Rubén Adolfo Ceva y Miguel Ángel Ortega** en orden al delito de lavado de activos agravado — art. 303 inc. a) del CP— (cfme. artículo 1 del CPPN y artículos 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

IV) ABSOLVER a los imputados **Rolando Oscar Martín, Horacio Omar Cismondi, Walter Fabián Cabrera y Rafael Gustavo Vega** en orden al delito de lavado de activos agravado —art. 303 inc. a) del C.P.—, por ausencia de acusación en el debate por parte de la querella y del Ministerio Público Fiscal.

V) SIN IMPOSICIÓN de costas procesales (artículos 530 y 531 CPPN).

Protocolícese y hágase saber.-

MARIO E. MARTINEZ
JUEZ DE CÁMARA

CAROLINA PRADO
JUEZA DE CÁMARA

JOSE C. QUIROGA URIBURU
JUEZ DE CÁMARA

HERNAN MOYANO CENTENO
SECRETARIO DE CÁMARA

